



Informe sobre la situación de las graves violaciones del Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales en Ecuador

Report on the situation of serious violations of the rule of law and of fundamental rights and freedoms in Ecuador

Presentado por:

Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (C.E.D.E)

Gesellschaft für Menschen Rechte Amnestie und Chancengleichheit Internationale Aktionen (G.R.A.C.I.A)

Norwegian Forum for Democracy and Rights in Ecuador (N.O.F.E.C)

Association des Migrants Latino-Américains en France (A.L.M.A)

Associazione Amici dell'Ecuador (A.D.E)

Informe sobre la situación de las graves violaciones del Estado de Derecho y de los derechos y libertades fundamentales en Ecuador

I. Introducción

Ecuador atraviesa una profunda crisis social, económica, política, democrática y seguridad. El Estado de Derecho, los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos ya no están garantizados. El Estado de Derecho presupone el respeto a la separación y al equilibrio de los distintos poderes del Estado, lo que solo permite de proteger y garantizar el respecto de los derechos humanos.

Desde 2018, en Ecuador, el sistema judicial ha sido profundamente remodelado, arruinando las garantías de independencia e imparcialidad de la justicia. Los miembros del Consejo de la Judicatura, los magistrados de la Corte Constitucional, el 70% de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General y otros han sido destituidos arbitrariamente de sus cargos, sin haber cometido ninguna falta y sin respetar sus derechos a la defensa. Desde entonces, el aparato judicial ha pasado a estar al servicio del gobierno de turno para criminalizar a opositores políticos. Además, los medios de comunicación participan activamente en estrategias para crear la figura del "opositor enemigo" propagando un mensaje oficial sin retrospectiva ni pruebas. La preocupación por el futuro institucional de Ecuador es mayor porque el actual Presidente de la República planea demagógicamente la realización de un nuevo referéndum, que en realidad pretende politizar los organismos de control.

El ataque jurídico y mediático a opositores políticos, también conocido como "lawfare" se ha utilizado principalmente contra los líderes y partidarios del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC). Estos han sido sometidos a varios juicios con una clara violación del derecho y sus derechos humanos. Sin juicios justos y con tratos inhumanos y degradantes.

Organismos internacionales como la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y el Comisariado General para los refugiados y apátridas de Bélgica y otros llegan en su totalidad a la misma conclusión que el lawfare se ha utilizado repetidamente para criminalizar, desacreditar y deslegitimar no solo a opositores políticos, sino también a los líderes de los movimientos sociales e indígenas que protestan a favor de la aplicación de políticas que respeten sus derechos sociales económicos y culturales. Entre las víctimas del asalto a los derechos humanos se encuentran también Julian ASSANGE, torturado psicológicamente en la embajada ecuatoriana desde la llegada a la presidencia de L. MORENO y luego privado arbitrariamente de su estatus de refugiado, y Ola BINI, detenido y encarcelado arbitrariamente, víctima de un juicio injusto, por sus vínculos con el fundador de WikiLeaks.

La democracia requiere la posibilidad de una expresión representativa de distintos pensamientos políticos de la población. Tras la ruptura al interior del partido Alianza País en 2018, y a raíz del repentino giro político del sucesor de R. CORREA DELGADO, se impidió sistemáticamente a los partidarios de la "Revolución Ciudadana" crear un nuevo partido o

alianza política que les permitiera participar, en igualdad de condiciones, en las elecciones regionales de 2019 y nacionales de 2021. Al igual que en Brasil, el lawfare ha socavado el derecho a unas elecciones libres, justas y democráticas.

Desde 2017, la pobreza y la violencia han aumentado alarmantemente. Las dificultades económicas, sociales y de seguridad han provocado protestas generalizadas en 2019 y 2022. Las mismas que fueron reprimidas violentamente dejando un resultado de varios muertos y cientos de heridos. Como respuesta al descontento popular, las libertades de expresión y de manifestación han sido violadas mediante el abuso de la instauración del estado de excepción y el uso excesivo de la fuerza. Este uso desproporcionado de la fuerza pública ha sido denunciado internacionalmente. El Gobierno ecuatoriano también ha utilizado estas manifestaciones masivas como pretexto para criminalizar a sus "opositores". El diálogo democrático es generalmente negado y descalificado.

En 2019, la administración penitenciaria fue objeto de una reforma estructural y presupuestaria. El uso excesivo del encarcelamiento y la falta de inversión han provocado un importante hacinamiento en condiciones que no permiten la clasificación de los presos, y se ha mermado el número de guías penitenciarios en los recintos carcelarios. El Estado ya no puede garantizar el derecho a la vida y al respeto de la integridad física de los detenidos en Ecuador. Desde diciembre de 2020, a pesar del estado de emergencia declarado en septiembre de 2021, más de 400 presos han perdido la vida en enfrentamientos violentos. Se trata de masacres con algunas víctimas que han sido desmembradas y/o decapitadas. No se ha decidido que medidas estructurales podrían tomar, ni inversiones significativas en este campo.

La crisis en Ecuador pone de manifiesto una gestión que atenta gravemente contra los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos (derecho a vivir dignamente, derecho a la salud, a la libertad de expresión y de manifestación, derecho a la vida, derecho al respeto de la integridad física, derecho a un juicio justo, a la libertad de ejercer los derechos políticos).

El desmoronamiento del Estado de derecho es motivo de profunda preocupación, por ser una condición necesaria para el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Índice

I. Introducción	2
II. Ruptura del Estado de Derecho - establecimiento de un poder judicial bajo la tutela del ejecutivo, carente de independencia e imparcialidad	5
A. Proceso de "desmantelamiento" del poder judicial	5
1. Referéndum 2018	5
2. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T)	8
3. Destitución y sustitución del Consejo de la Judicatura	10
4. Destitución y sustitución de la Corte Constitucional	11
5. Destitución y sustitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)	12
6. Destitución del cargo y nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado (FGE)	18
7. Conclusión.....	19
B. Utilización del poder judicial para la persecución/represión política.....	20
1. Contextualización.....	20
2. Caso de Rafael CORREA DELGADO	24
3. El caso de Jorge GLAS	26
4. El caso de Carlos OCHOA.....	29
5. Caso de Fernando ALVARADO ESPINEL.....	29
6. Caso de Vinicio ALLVARADO	30
7. El caso de Walter SOLIS	30
8. Caso de Ricardo Armando PATINO.....	31
9. Caso Alexis MERA.....	32
10. Caso de Maria DUARTE	32
11. Caso Julian ASSANGE.....	33
12. Caso de Ola BINI	36
13. Asilo diplomático tras las "protestas" de octubre de 2019.....	39
14. El uso del poder judicial para presionar al poder legislativo	39
III. Violación del derecho a formar un partido político de la fuerza política más importante del país y lawfare dentro del sistema electoral.....	40
IV. Violenta represión de la protesta social en octubre de 2019.....	45
V. Violación masiva del derecho a la vida y al respeto de la integridad física de las personas privadas de libertad	50
VI. Empobrecimiento, aumento de la violencia, estado de emergencia, represión y criminalización del debate democrático	53
VII. Organización de un nuevo referéndum (2022): nuevos temores de desinstitucionalización y politización de la justicia.....	64
VIII. Conclusiones	73

II. Ruptura del Estado de Derecho - establecimiento de un poder judicial bajo la tutela del ejecutivo, carente de independencia e imparcialidad

A. Proceso de "desmantelamiento" del poder judicial

1. Referéndum 2018

1. Entre las atribuciones constitucionales del presidente de la República se encuentra la de *"convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución"*¹.

El 2 de octubre de 2017 el presidente de la República solicitó que la Corte Constitucional emita dictamen previo y vinculante respecto de la constitucionalidad de la convocatoria a referéndum y el cuestionario relativo a cinco preguntas alusivas a los siguientes temas: lucha contra la corrupción, reelección indefinida, participación ciudadana e institucionalidad, social y ambiental².

La pregunta 3 del referéndum en específico expresaba:

*"¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos, de acuerdo al Anexo 3?"*³

El anexo 3 tuvo el siguiente contenido:

"1. Terminación anticipada de periodo: Se dan por terminados los periodos constitucionales de los consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes cesarán en sus funciones el día en que se instale el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que llevará a cabo la transición conforme a este anexo.

[...] 3. Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: Se dan por terminados anticipadamente los periodos de las consejeras y consejeros del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta la instalación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conforme

¹ Constitución de la República del Ecuador, Art. 147 numeral 14.

² Presidencia de la República, Oficio N°. T.141-SGJ-17-0331 de 2 de octubre de 2017

³ Presidencia de la República, Oficio N°. T.141-SGJ-17-0331 de 2 de octubre de 2017.

al sistema establecido en la Constitución enmendada, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y estará conformado por siete miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. (...) El Consejo en transición tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias. El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos, y si lo hiciere procederá inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección. Para el efecto, expedirá una normativa que regule el proceso de evaluación garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios. Del mismo modo, garantizará la mejora, objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de selección de las autoridades cuya designación sea de su competencia [...]”⁴.

Sin esperar el dictamen vinculante de la Corte Constitucional, el expresidente ecuatoriano L. MORENO llamó a los votantes a acudir a las urnas el 4 de febrero de 2018.

2. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es un órgano constitucionalmente establecido, cuyos miembros son elegidos por votación popular, que supervisa múltiples instituciones (Procuraduría general, Fiscalía general, Consejo de la Judicatura, etc.).

Su destitución fuera del plazo y las condiciones fijadas por la ley y su sustitución por miembros elegidos por el poder político pusieron en claro peligro la estructura del Estado y la independencia del poder judicial.

La Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) invitó al Estado ecuatoriano a esperar el resultado del control de constitucionalidad, pero el gobierno se opuso. La OEA emitió entonces un informe preliminar crítico en el que destacaba la ilegalidad de la falta de revisión previa por parte de la Corte Constitucional; la desproporción entre las organizaciones a favor del "sí" (partidarias del presidente Moreno) y del "no"; la falta de difusión de la campaña del "no"; el uso de recursos estatales a favor del "sí"; y la falta de legibilidad/claridad de las preguntas formuladas⁵.

⁴ Presidencia de la República, Oficio N°. T.141-SGJ-17-0331 de 2 de octubre de 2017.

⁵ OEA, "Preliminary Report on the Referendum in Ecuador by the Electoral Experts Mission of the organization of American States", 5 de febrero de 2018, https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-002/18

El 24 de enero de 2018, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados dijo a Ecuador:

“Nos llama la atención particularmente las materias que tocan la composición del Consejo de Participación ciudadana, entidad constitucional. De acuerdo a esa información ello conduciría a la cesación de los actuales miembros y la designación de un nuevo Consejo. Se alega que ello conduciría a una designación por el ejecutivo de los integrantes de dicho Consejo y que se afectaría, derivadamente, la autonomía de la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la de los órganos de la Función de Transparencia y Control Social. Adicionalmente, se alega que podría llevar a la destitución de los integrantes de la Corte Constitucional.

(...)

Quisiera que su Gobierno nos informe, a la brevedad, sobre lo siguiente (...)

3. Garantías de que el proceso en marcha no llevara a un Consejo de Participación Ciudadana controlado por el Poder Ejecutivo o afectando la independencia de órganos como los mencionados, en particular la Corte Constitucional, la Fiscalía General del estado y la Defensoría Pública”⁶ ;

3. A solicitud de los miembros del CPCCS, el 6 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la emisión de medidas provisionales: ordenar al gobierno que se abstenga de remover a estos miembros para crear un CPCCS-Transitorio (en adelante CPCCS-T)⁷ .

La Corte Interamericana de derechos humanos no consideró la medida solicitada hasta después de la destitución de los miembros del CPCCS, por lo que la declaró sin materia.

El recurso de los miembros del CPCCS destituidos fue declarado admisible por la CIDH: *“la Comisión estima que las alegaciones de la parte peticionaria relativas a su destitución como miembros del CPCCS no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo pues los hechos alegados, de corroborar como ciertos podrían caracterizar violaciones a los artículos 8 (garantías judiciales), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con sus artículos 1.1 (obligación de respetar derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)”⁸.*

⁶ Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, 24 de enero de 2018, OL ECU 1/2018, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23589>

⁷ Comunicado de prensa de la OEA, "CIDH remite solicitud de medidas provisionales a favor de miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador", 6 de febrero de 2018, <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/021.asp>

⁸ CIDH, Informe No. 195/21. Petición 2377-17. Admisibilidad. Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García. Ecuador, 7 de septiembre de 2021, <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ECAD2377-17ES.pdf>

4. En 2019, se celebraron nuevas elecciones para sustituir al CPCCS-T designado políticamente.

Sin embargo, anteriormente, el CPCCS-T había conseguido que la "nueva" Corte Constitucional (véase más adelante) aprobara una resolución que prohíbe a los nuevos miembros elegidos poder evaluar el trabajo del CPCCS-T⁹.

Como resultado de este decreto constitucional, los nuevos miembros del CPCCS, elegidos por votación popular, entre otras cosas para supervisar el trabajo del CPCCS-T, fueron destituidos. Desde el referéndum de 2018, esta institución está en crisis¹⁰, como muchas otras¹¹.

5. A pesar de las garantías solicitadas por el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, el proceso iniciado irregularmente en febrero de 2018 condujo a la destitución de todos los jueces de la Corte Constitucional¹², del fiscal general, así como del 70% de los jueces de la "Corte Nacional de Justicia", el segundo tribunal más alto del país (ver más abajo).

Esta fue la primera fase de un desmantelamiento sistemático del poder judicial.

2. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T)

6. El referéndum convocado por L. Moreno tuvo lugar el 4 de febrero de 2018.

Poco después, los miembros del CPCCS fueron destituidos y un CPCCS-transitorio fue nombrado por la Asamblea Nacional, en lugar de ser elegido, siguiendo la propuesta del entonces Presidente L. MORENO.

7. El 13 de marzo de 2018 el CPCCS-T resolvió iniciar el proceso de evaluación a todas las autoridades de control y las designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado¹³.

El 28 de marzo de 2018, el Pleno del CPCCS-T aprobó el Mandato de Evaluación de las Autoridades, el cual reguló el proceso de investigación administrativa, evaluación, impugnación y resolución sobre las autoridades designadas por el Consejo de Participación

⁹ El Comercio, "¿Cuáles son las decisiones del Cpccs-t blindadas por la Corte Constitucional?", 10 de mayo de 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/CPCCS-T-dictamen-corte-constitucional-autoridades.html>

¹⁰ El Comercio, "El Cpccs va por su cuarto presidente", 10 de febrero de 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-presidente-hernan-ulloa-ecuador.html>

¹¹ Primicias, "Nueve instituciones en crisis por renunciadas, destituciones y falta de renovación" 23 de febrero de 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/nueve-instituciones-inestabilidad-prorrogas-subrogaciones/>

¹² Jorge Luis Rivera Choez, Orlando Ivan Ronquillo Riera, "Destitución de los miembros de la Corte Constitucional y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico interno del Ecuador", 18 de septiembre de 2019, <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/541>

¹³ Pleno del CPCCS-T, Resolución N°. PLE-CPCCS-T-O-001-13-03-2018

Ciudadana y Control Social cesado¹⁴ con los siguientes procesos administrativos: solicitud de un informe de gestión a las autoridades respectivas; evaluación concluida con un Informe Técnico de Investigación; puesto en conocimiento del informe Técnico a la autoridad evaluada para que, en un plazo entre tres a diez días, ejerza su derecho a la defensa; audiencia pública; aplicación de los parámetros de evaluación determinados previamente por el Pleno del CPCCS-T; decisión en el término de cinco días; impugnación, luego de tres días de que la autoridad evaluada fuera notificada; resolución sobre la demanda en revisión por el CPCCS-T, última instancia.

8. El 14 de mayo de 2018, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ya expresaba su preocupación por las competencias que ha asumido el CPCCS-t:

«Observamos que varios de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) han manifestado que la voluntad popular les ha conferido una potestad extraordinaria y sobre esa base ellos han hecho una interpretación normativa, indicando inclusive que sus actos se encuentran al mismo nivel que la propia Constitución, creemos que esa afirmación es un error. El efecto de aquello es que el Consejo Transitorio realiza una serie de actos extralimitándose del mandato recibido por el pueblo ecuatoriano, arrogándose funciones para las que no tiene atribución ni competencia como: encargar a nuevas autoridades en reemplazo de las cesadas sin observar que las leyes específicas sí establecen reglas de sucesión; pretender evaluar y cesar a la Corte Constitucional cuya designación de acuerdo a la Constitución no le corresponde al CPCCS sino a una Comisión Calificadora en que tienen participación, entre otros, la Función Ejecutiva, la Función Legislativa y la Función de Transparencia y Control Social, esta última conformada por varios órganos, es decir que en este caso el CPCCS-T pretende asumirse integralmente como las tres funciones del Estado»¹⁵.

El profesor RUIZ-CHIRIBOGA, después de haber hecho un agudo análisis de la (i)legalidad del referéndum de febrero de 2018, concluyó que:

"Las enmiendas constitucionales pretendidas por el presidente Moreno deberían haber sido revisadas por la Corte Constitucional, pero Moreno eludió esta revisión. La falta de revisión constitucional produjo graves problemas para la democracia y los derechos humanos. La pregunta 3 del referéndum por el que se creó el CPCCS-T estaba incompleta, poco clara y difuminada, lo que afectó al derecho del electorado a votar con conocimiento de causa. La Corte Constitucional podría haber corregido la pregunta si se le hubiera permitido realizar su revisión constitucional. La oscuridad de la pregunta representaba un obstáculo para la expresión de la voluntad popular. (...)

¹⁴ Pleno del CPCCS-T, Resolución N°. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018

¹⁵ Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, "CPCCS-T EXTRALIMITA MANDATO DE CONSULTA POPULAR", 24 de mayo 2018, <https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamientos/354-cpccs-t-extralimita-mandato-de-consulta-popular.html>

El todopoderoso CPCCS-T se presentó como la voz del pueblo. Tuvo la soberbia de llamar a sus decisiones "mandatos", como si hubieran sido aprobadas por el pueblo, presentándolas como supraconstitucionales. El CPCCS-T era imparable. Se convirtió en un tribunal administrativo ad hoc que no aplicaba normas ni procedimientos preestablecidos. El referéndum alteró la separación de poderes y la autonomía de las funciones públicas. Tal cambio, según la Constitución, no debe ser aprobado por referéndum. Las enmiendas constitucionales de 2018 en Ecuador fueron inconstitucionales"¹⁶.

3. Destitución y sustitución del Consejo de la Judicatura

9. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial (poder judicial ecuatoriano). Este órgano no es jurisdiccional, por lo que no puede administrar justicia.

En junio de 2018, el CPCCS-T resolvió cesar y dar por terminado el período de los vocales del Consejo de la Judicatura¹⁷. Se resolvió también designar a cinco vocales encargados del Consejo de la Judicatura hasta la designación de los titulares.

10. La Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional debían presentar una lista de candidatos para formar el nuevo Consejo de la Judicatura.

Una comisión técnica, creada por el CPCCS-T, se encargó de examinar los requisitos, las incompatibilidades y los méritos de los candidatos y, a continuación, elaboró una lista de preseleccionados. Al final, el CPCCS-T llevó a cabo una fase de "recusación" para quedarse sólo con los candidatos deseados.

Esta breve descripción del "procedimiento" seguido para formar el Consejo de la Judicatura ilustra el dominio del politizado CPCCS-T sobre el nombramiento para funciones clave del Estado. El Consejo de la Judicatura es, en efecto, el órgano que aglutina a toda la institución judicial: la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, etc.

El 23 de enero de 2019, el CPCCS-T designó los nuevos miembros principales del Consejo de la Judicatura definitivo¹⁸.

¹⁶ Oswaldo Ruiz-Chiriboga, "The 2018 Constitutional Referendum in Ecuador and the Transitory Council of Citizen's Participation and Social Control", de 2021, https://www.researchgate.net/publication/350740720_The_2018_Constitutional_Referendum_in_Ecuador_and_the_Transitory_Council_of_Citizen's_Participation_and_Social_Control, traducción libre.

¹⁷ CPCCS-T, Resolución N°. PLE-CPCCS-T-O-037-04-06-2018 : decisión

CPCCS-T, Resolución N°. PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018 : negación de los recursos de revisión

¹⁸ CPCCS-T, Resolución N°. PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019

11. En la misma Resolución, el CPCCS-T exhortó a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura a que, "ante el clamor ciudadano", procedan a fijar los parámetros y la evaluación inmediata de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia.

En cuanto a la evaluación de los jueces de uno de los más altos tribunales del país, el CPCCS-T ya había anunciado:

“se afirma que la evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia debe cumplir con los estándares de garantías del debido proceso señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, “en este punto de la transición no garantizaría estos estándares debido al tiempo insuficiente para efectuar la valoración del desempeño y productividad individual de los 21 jueces y conjuces de la Corte”¹⁹.

4. Destitución y sustitución de la Corte Constitucional

12. En agosto de 2018, el CPCCS-T dió por terminado el mandato de los nueve jueces de la Corte Constitucional²⁰.

El 19 de septiembre de 2018, el Consejo Transitorio aprobó el mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional por parte de la "Comisión Calificadora". Esta Comisión estaba compuesta por delegados de la administración pública nombrados por el Consejo Transitorio²¹. Al final del proceso, el CPCCS-T podía seguir objetando e impidiendo a ciertos candidatos bajo el pretexto del "control social".

El Consejo Transitorio validó el nombramiento de los 9 nuevos miembros de la Corte Constitucional el 30 de enero de 2019²².

13. La Corte Constitucional, que inicialmente fue declarada en "vacancia" durante 60 días, permaneció así durante más de cinco meses.

El 7 de mayo de 2019, a petición del Presidente del CPCCS-T, la "nueva" Corte Constitucional emitió un "dictamen interpretativo" que prohíbe al futuro CPCCS electo revertir las decisiones adoptadas por el CPCCS-T:

“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el “Régimen de transición del Consejo de

¹⁹ Comunicado de prensa n° 212 del Consejo Transitorio, 19 de septiembre de 2018. En línea: <https://www.cpccs.gob.ec/2018/09/la-corte-nacional-de-justicia-sera-evaluada-por-el-consejo-de-la-judicatura-definitivo/>

²⁰ El Comercio, "El Consejo de Participación transitorio cesa a los nuevos jueces de la Corte constitucional", 23 de agosto de 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/consejo-participacion-ceso-corte-constitucional.html>

²¹ Comunicado de prensa n° 214 del Consejo Transitorio, 19 de septiembre de 2018. En línea: <https://www.cpccs.gob.ec/2018/09/se-aprobo-mandato-de-designacion-de-la-corte-constitucional-cc/>

²² Comunicado de prensa n° 408 del Consejo Transitorio de 30 de enero de 2019. En línea: <https://www.cpccs.gob.ec/2019/01/designados-nuevos-miembros-de-la-corte-constitucional-del-ecuador/>

Participación Ciudadana y Control Social” otorgó al Consejo transitorio. Por tal razón, no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio en ejercicio de aquellas”²³.

5. Destitución y sustitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)

14. El "nuevo Consejo de la Judicatura" ha sido encargado por el CPCSS-T de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia a la luz del "clamor ciudadano".

El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó las diferentes resoluciones para "fijar" las nuevas reglas para destituir y nombrar los jueces de la más alta jurisdicción del país²⁴.

El proceso de elaboración de las normas, el establecimiento de un "comité de expertos", la elaboración de un informe sobre el trabajo de los jueces, la realización de exámenes escritos y orales y el examen de los recursos duró solo 7 meses: de febrero a noviembre de 2019. Al final de este proceso, el 70% de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (en adelante CNJ) fueron destituidos.

²³ Corte constitucional, « Interpretación constitucional de las facultades extraordinarias "Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”», numero 2-19-IC/19, 7 de mayo 2019, <https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=2-19-IC/19>

²⁴ Resolución N°. 010-2019 de 19 de febrero de 2019, mediante la cual expidió el “Reglamento para la evaluación integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional del Justicia de la República del Ecuador”.

Resolución N°. 035-2019 de 26 de marzo de 2019, mediante la cual expidió el “Instructivo para la conformación y funcionamiento del comité de expertos y del comité evaluador del proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador”.

* Resolución N°. 059-2019 de 26 de abril de 2019, mediante la cual resolvió “Nombrar a los miembros del Comité de Expertos para la Evaluación Integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia”.

Resolución N°. 094-2019 de 18 de junio de 2019, mediante la cual resolvió “Aprobar el informe final correspondiente a la Metodología de Evaluación Integral para las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia y su anexo”.

Resolución N°. 103-2019 de 2 de julio de 2019, mediante la cual resolvió “Reformar las resoluciones 010-2019 y 035-2019, en cuanto a la incorporación del control social en el proceso de evaluación integral a las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia”.

Resolución N°. 116-2019 de 12 de julio de 2019, mediante la cual resolvió “Nombrar a los miembros del Comité de Evaluadores para la Evaluación Integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia”.

Resolución N°. 140-2019 de 6 de septiembre de 2019, mediante la cual resolvió “Precisar que la entrega de resultados al evaluado por este Comité consiste en dejar constancia, a través de un acta, que se han cumplido los indicadores para la evaluación oral de autos y/o sentencias en lo que corresponde a tiempos (...)”.

Resolución N°. 141-2019 de 7 de septiembre de 2019, mediante la cual resolvió “Aperturar la fase de sustentación oral de competencias en el ejercicio de su cargo de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia y declararse en sesión permanente durante los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2019”.

Resolución N°. 147-2019 de 17 de septiembre de 2019, mediante la cual resolvió: “Precisar el contenido dentro del criterio de evaluación para el “análisis de calidad de autos de admisión / inadmisión” para las y los conjuces de la Corte Nacional de Justicia”.

Resolución N°. 163-2019 de 23 de octubre de 2019, mediante la cual resolvió: “Aprobar el informe final de resultados del proceso de evaluación integral a las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia”.

Resolución N°. 187-2019 de 15 de noviembre de 2019, mediante la cual resolvió: “Aprobar el informe de resultados definitivos y declarar concluido el proceso evaluación integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional del Justicia”

Después de las destituciones, el Consejo de la Judicatura resolvió *"Declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de las y los conjuces temporales en la Corte Nacional de Justicia"*²⁵, de entre las y los jueces de las Cortes Provinciales y Tribunales Contenciosos Administrativos y Tributarios del país en reemplazo de aquellos que no habían superado la evaluación efectuada. Resolvió: *"Designar a las y los conjuces temporales para la Corte Nacional de Justicia"*²⁶. Conforme al listado fueron designados 26 conjuces temporales, quienes tomaron posesión del cargo el 2 de diciembre de 2019.

15. Este proceso socava claramente los principios de independencia e imparcialidad de la justicia.

El 18 de septiembre de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de magistrados y abogados (REIMA) reiteró su preocupación a Ecuador:

"En el marco de la cuestión referida y teniendo en cuenta las alegaciones recibidas, quisiera expresar mi preocupación sobre el hecho de que el proceso de evaluación integral de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia de la República de Ecuador pudiera no ajustarse a los estándares internacionales en la materia de ser fundadas esas alegaciones. Ha de resaltarse que todo proceso de evaluación judicial debe de velar por el cumplimiento efectivo del principio de la independencia judicial.

*El proceso de evaluación y los criterios establecidos podrían afectar el principio de independencia judicial y suponer una injerencia o intimidación en el proceso judicial. Es más, se podría correr el riesgo de que el objeto de la evaluación fuera justificar remociones o procesos disciplinarios graves, lo cual violaría el principio de inamovilidad y los estándares para la imposición de las medidas disciplinarias, suspensión y separación del cargo. Este riesgo se ve acentuado cuando, según las alegaciones presentadas, los criterios de evaluación establecidos en el proceso entran en conflicto con el objetivo de 3 una evaluación de desempeño e incluyen cuestiones disciplinarias que tendrían como finalidad la destitución de jueces y juezas"*²⁷.

El 10 de junio de 2020, el REIMA volvió a dirigirse a Ecuador:

"Sin perjuicio de la ampliación de información sobre los hechos del caso, expreso mi profunda preocupación por las consecuencias que el nuevo procedimiento de evaluación de jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia y la destitución de jueces y magistrados, así como las condiciones de inestabilidad en el desempeño de las 3 funciones de los jueces y magistrados temporales del tribunal, podrían tener para la independencia e imparcialidad del poder judicial en el Ecuador.

²⁵ Pleno del Consejo de la Judicatura, Resolución N°. 188-2019 de 15 de noviembre de 2019

²⁶ Pleno del Consejo de la Judicatura, Resolución N°. 197- 2019 de 28 de noviembre de 2019

²⁷ REIMA, llamamiento del 18 de septiembre de 2019, AL ECU 14/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24848>

A este respecto, noto con preocupación las fallas en el Reglamento para la evaluación integral de jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia, la composición del Comité de Apoyo para la evaluación integral, y el informe elaborado por el mismo que formó la base de la decisión tomada por el pleno del Consejo de la Judicatura de cesar a los jueces y conjuces, aparentemente sin la debida consideración de las limitaciones jurídicas internas aplicables.

Además, expreso mi grave preocupación por las consecuencias del nombramiento de jueces temporales, aparentemente sin base clara en la ley doméstica, para la administración de la justicia en la Corte Nacional de Justicia. Recuerdo que el establecimiento de una situación en la que el poder judicial pueda ser controlado, dirigido o influenciado en el cumplimiento de sus funciones judiciales, es incompatible con la noción de un tribunal independiente”²⁸.

16. Varios magistrados destituidos de la Corte nacional de Justicia han presentado recursos jurisdiccionales en Ecuador.

El 21 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional invalidó el proceso de destitución de los jueces del CNJ:

"89. Al respecto, este Organismo ha explicado que: “La independencia judicial institucional, tanto interna como externa, es indispensable, a su vez, para garantizar la independencia individual o funcional de los jueces y juezas, de forma que los justiciables puedan ejercer su derecho a un juez independiente, imparcial y competente, conforme al artículo 76 numeral 7 literal k de la Constitución. (...) La independencia judicial constituye, por tanto, una garantía básica del debido proceso judicial, pero no solo por el derecho específico a ser juzgado por un juez independiente, sino además porque de la independencia de la jueza o juez depende, a su vez, la debida protección de otros derechos y principios, algunos de los cuales integran el debido proceso”
(...)

94. Esta Corte Constitucional enfatiza que la independencia judicial es un derecho de los justiciables, una garantía del debido proceso y un principio que se constituye en un elemento estructural del sistema de administración de justicia
(...)

141. En el presente asunto, en cuanto a la garantía de inamovilidad de las y los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia, se observa que constitucionalmente y legalmente se ha establecido su designación para un periodo fijo de nueve años
(...)

143. En este sentido, (...) y por tanto, generó la vulneración a la seguridad jurídica, debido a que la realización de un proceso de evaluación sobre la totalidad de

²⁸ REIMA, llamamiento del 10 de junio de 2020, AL ECU 1/2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25333>

integrantes de la Corte Nacional de Justicia, cuya consecuencia era la remoción y cuya oportunidad y frecuencia era imprevisible, “equivaldría a relativizar la duración de sus mandatos, con los mismos efectos de una “ratificación”.

(...)

149. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 9 contempla al principio de legalidad al señalar que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”.

(...)

157. (...) la derivación por vía reglamentaria del proceso sancionatorio infringe el principio de legalidad de las infracciones y sus sanciones”²⁹.

La opinión concurrente del juez JIMENEZ, más acorde con los estándares internacionales, también señala:

“14. Sin embargo, en mi criterio, la evaluación se torna atentatoria a la independencia judicial cuando bajo condiciones constitucionales ordinarias aquella: 1) no se realiza conforme a los plazos y parámetros normativos preestablecidos en la ley y, 2) incursiona indebidamente en el ámbito inherente a la actividad jurisdiccional, para justificar la remoción.

(...)

20. En mi criterio, es claro que sobre la base de la Resolución No 10-2019 se procedió a regular y ejecutar una evaluación respecto a esta actividad interpretativa de los jueces y juezas nacionales que sirvió de fundamento a su inconstitucional remoción. Esta evaluación incluso se confunde en la mencionada Resolución con un proceso disciplinario, cuestión que se analiza en el voto de mayoría. La evaluación derivó en que, con fundamento en un informe emitido por un comité ad-hoc, que no ejerce jurisdicción, el CJ remueva jueces y juezas nacionales, sin seguir los plazos y procedimientos establecidos previamente en la ley, violando también la independencia judicial” (pp. 57-60)³⁰.

El análisis de los jueces SALAZAR MARIN y LOZADA PRADO, más acorde con las exigencias internacionales, va en la misma línea:

« 5.1. Se vulneró la garantía de inamovilidad por haberse removido a los jueces y conjuces nacionales sin haber garantizado un debido proceso, en particular, por haberse transgredido el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el procedimiento previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial (“COFJ”).

²⁹ Corte constitucional de Ecuador, Sentencia No. 37-19-IN/21, 21 de diciembre 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlODhY2UxOWUucGRmJ30=

³⁰ Corte constitucional de Ecuador, Sentencia No. 37-19-IN/21, 21 de diciembre 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlODhY2UxOWUucGRmJ30=

5.2. *Se vulneró la garantía de inamovilidad de los jueces por haberse removido al 70% de una Alta Corte ecuatoriana por fuera de los períodos permitidos en la Constitución.*

5.3. *Se vulneró la garantía frente a presiones externas por haberse utilizado la calidad de las sentencias y autos como criterio principal y determinante para remover a las y los jueces y conjuces evaluados.*

(...)

30. *Consideramos que el mero hecho de que se haya removido a los jueces y juezas por fuera de los períodos de renovación establecidos en el artículo 187 de la Constitución es más que suficiente para configurar, por sí mismo, una violación a la garantía de inamovilidad. La realización imprevista y arbitraria de un proceso de evaluación integral por fuera de la periodicidad establecida constitucionalmente constituye un incumplimiento de la obligación estatal de abstenerse de separar a los jueces y juezas por motivos distintos al cumplimiento del período o el cometimiento de faltas muy graves.*

31. *Además, esto puede sembrar dudas en un observador razonable respecto a las motivaciones detrás del proceso de evaluación.*

(...)

34. *Es extremadamente relevante considerar que el proceso bajo examen en esta causa culminó con la remoción de más del 70% de las y los juezas, jueces, conjujas y conjuces evaluados. Sin duda, lo que ocurrió puede calificarse como una remoción masiva de jueces, juezas, conjuces y conjujas de la Corte Nacional de Justicia, el más alto órgano de administración de justicia ordinaria, lo que resulta en extremo preocupante.*

(...)

39. *Ahora bien, no es menos cierto que evaluar la calidad de los fallos de una Alta Corte sí puede reñir con la independencia judicial, por generar un amedrentamiento o chilling effect en los jueces y juezas. El control de la calidad de los fallos puede condicionar a los jueces respecto del poder de turno. Si un juez o jueza nacional tiene presente que el Consejo de la Judicatura puede en el futuro utilizar sus criterios jurídicos para su separación del cargo, esto genera una presión externa, en tanto puede condicionar la predisposición de los jueces y juezas al momento de adoptar decisiones que no sean del agrado del Consejo de la Judicatura o incluso del poder político de turno” (pp. 65 y siguientes)³¹.*

17. Más allá de la sanción *in abstracto* del proceso de evaluación de los jueces de la CNJ, también se han interpuesto acciones de protección/reparación por parte de algunos jueces destituidos.

³¹ Corte constitucional de Ecuador, Sentencia No. 37-19-IN/21, 21 de diciembre 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBlDGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlOC0xNDMxODhhY2UxOWUucGRmJ30=

Así, el 30 de diciembre de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha destacó la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales cometidas. Para la Sala Especial, no hay duda de que *“En el caso concreto, la entidad accionada mediante el Proceso de evaluación realizado a los jueces y conjuces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 vulneró el derecho al debido proceso; la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces y conjuces elegidos para un período fijo”*. La Corte Provincial de Pichincha determinó que los miembros encargados de evaluar a los jueces de la CNJ no fueron imparciales; cambiaron las normas y procedimientos durante el proceso de evaluación; se pronunciaron sobre la calidad de las sentencias dictadas, sin tener facultad jurisdiccional alguna; intervinieron fuera de los plazos constitucionalmente establecidos; sancionaron ilegalmente a los jueces destituidos fuera del marco disciplinario existente³².

18. Después de las decisiones de la Corte Constitucional y de la Corte Provincial de Pichincha, ha surgido una polémica en Ecuador: ¿qué debe pasar con las decisiones de los jueces temporales nombrados ilegalmente³³?

En un comunicado de prensa del 3 de enero de 2022, el Consejo de la Judicatura declaró extrañamente:

“El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) alertó que el fallo del Tribunal Penal de la Corte de Pichincha -que favorece a los jueces removidos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por reprobación de la evaluación de 2019- contradice a la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que ya se pronunció sobre este tema.

En rueda de prensa, este lunes 3 de enero de 2022, las autoridades del CJ anunciaron que presentarán un recurso de ampliación y aclaración y una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Provincial, pues su contenido va contra el pronunciamiento de la Corte Constitucional (Sentencia 37-19-IN/21)

(...)

Las autoridades recordaron que el pasado 29 de diciembre de 2021, la institución presentó ante la CC, un Recurso de Aclaración y Ampliación a la Sentencia 37-19-IN/21, ya que en ella no se consideró que el CJ desarrolló la evaluación de jueces y conjuces de la CNJ, con base en el exhorto formulado por el Consejo de Participación Transitorio”³⁴.

³² SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, Juicio Especial No. 17160202000272, jueves 30 de diciembre del 2021, disponible en <http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/mobil.jsf;jsessionid=WFO+9cEDsGFtG5W78pm9EORD>

³³ Al respecto: Primicias, "Qué pasó en la evaluación de jueces de 2019 que tiene en apuros a la Judicatura", 3 de enero 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/evaluacion-destitucion-jueces-apuros-judicatura/>

³⁴ "Consejo de la Judicatura alerta que fallo provincial que favorece a exjueces contradice a Corte Constitucional", 3 de enero 2022, <https://www.funcionjudicial.gob.ec/es/saladeprensa/noticias/item/10593-consejo-de-la-judicatura-alerta-que-fallo-provincial-que-favorece-a-exjueces-contradice-a-corte-constitucional>

La grave crisis institucional creada por el referéndum inconstitucional de febrero de 2018 continúa.

6. Destitución del cargo y nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado (FGE)

19. Paralelamente a la sustitución del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia, el CPCCS-T evaluó y sustituyó al fiscal general del Estado (en adelante FGE)³⁵, un puesto clave en el "aparato judicial". De hecho, la FGE es la que inicia y dirige los procesos penales.

Después de la destitución del FGE, varias personas han ocupado este puesto antes de la elaboración de un proceso de nombramiento a través de una evaluación por una Comisión Técnica Ciudadana de Selección (valor de evaluación: 50/100), una Comisión académica (valor de evaluación 20/100) y el CPCCS-T (valor de evaluación 30/100). Tras las pruebas escritas relativas a los conocimientos jurídicos de los aspirantes, *"Julio César Trujillo, presidente del CPCCS-T, dijo que espera que sea designado como titular de la Fiscalía General "el mejor abogado o abogada", por su integridad, sabiduría y honestidad. Trujillo señaló que el fiscal general del Estado "es el funcionario más poderoso del Ecuador"*³⁶. El cuadro de valoración de los candidatos al puesto de fiscal general muestra sin duda que la fiscal general, D. SALAZAR, no fue elegida en absoluto por sus capacidades jurídicas (puntaje obtenido 10/20, inferior a otros concursantes) sino por sus conexiones políticas, que le permiten de repente adelantar a candidatos mucho más meritorios que ella³⁷.

20. Al mismo tiempo, el nombramiento de "magistrados temporales" en la Fiscalía General del Estado, lo que va en detrimento de la independencia de la función, es una práctica que se sigue dando.

Así, en una resolución de 31 de mayo de 2021, el Consejo de la Judicatura señala:

"(...) el detalle de las partidas vacantes de Agentes Fiscales a esta fecha, reflejándose un total de veintinueve (29) partidas vacantes; diecisiete (17) se encuentran efectivamente vacantes y doce (12) identificadas como vacante / destitución

(...)

Artículo 2: El Pleno del Consejo de la Judicatura nombrará a las y los fiscales y agentes

³⁵ Pleno del CPCCS-T, Resolución N° PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018 de 4 de abril de 2018.

³⁶ El Comercio, "El Cpccs difundió las notas obtenidas por los postulantes a Fiscal General en el examen escrito", 19 de febrero 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-notas-postulantes-fiscal-examen.html>

³⁷ Diana Salazar obtuvo un total de 88,17 con las siguientes notas : Comisión Técnica Ciudadana de Selección (49/50), Comisión académica (10/20) y CPCCS-T (28.17/30)

Su "rival" inmediato, Merck Milko Benavides Benalcázar, obtuvo una puntuación de 85,17 con las siguientes notas: Comisión Técnica Ciudadana de Selección (50/50), Comisión académica (13/20) y CPCCS-T (22,17/30)

El abogado más cualificado, Javier Bosques Villena, sólo obtuvo un 77,91 con las siguientes notas: Comisión Técnica Ciudadana de Selección (44.01/50), Comisión académica (15/20) y CPCCS-T (18.9/30)

*fiscales temporales conforme la determinación de la necesidad extraordinaria que consta en el artículo precedente*³⁸.

7. Conclusión

21. En su Informe sobre el Estado de Derecho 2020, la Comisión Europea recordó que:

"La Unión Europea se basa en un conjunto de valores comunes, como los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. Son la base de nuestras sociedades y de nuestra identidad común. Ninguna democracia puede funcionar sin jurisdicciones independientes que protejan los derechos fundamentales y las libertades públicas y sin una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres y pluralistas. (...)

El Estado de Derecho está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como uno de los valores comunes de todos los Estados miembros. Garantiza que todas las autoridades públicas actúen siempre dentro de los límites establecidos por la ley, de acuerdo con los valores de la democracia y los derechos fundamentales, y bajo el control de jurisdicciones independientes e imparciales. (...)

*El Estado de Derecho tiene un impacto directo en la vida de cada ciudadano. Es un requisito previo para la igualdad de trato ante la ley y para la defensa de los derechos de los ciudadanos de la Unión. (...) La existencia de mecanismos nacionales que equilibren los poderes y que mantengan el respeto al Estado de Derecho es esencial para garantizar que tales restricciones a nuestros derechos se limiten a lo estrictamente necesario y sean proporcionadas, limitadas en el tiempo y sujetas al control de los parlamentos y jurisdicciones nacionales*³⁹.

22. De lo anterior se desprende que el equilibrio de los poderes se ha roto por completo en Ecuador.

Los jueces de más categoría del país, de la Corte Constitucional y el 70% de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, fueron destituidos arbitrariamente de sus cargos, en clara violación del derecho internacional. Ninguno de los jueces destituidos había cometido falta grave alguna. Las garantías de independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales ya no están garantizadas.

³⁸ Consejo de la Judicatura, Resolución 070/2021, 31 de mayo 2021, <https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2021/070-2021.pdf>

³⁹ Comisión Europea, "Rapport 2020 sur l'état de droit La situation de l'état de droit dans l'Union européenne", 30 septembre 2020, COM (2020) 580 final, disponible en https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_2020_rule_of_law_report_fr_0.pdf

La justicia se ha convertido en un instrumento de la política para criminalizar a los "opositores". La persecución política, a través de procesos penales/administrativos injustos, se ha multiplicado (véase más adelante). Los magistrados que no sigan las "directrices" del nuevo Procurador General del Estado corren el riesgo de ser destituidos por decisiones tomadas en el ejercicio de su función. Al mismo tiempo, los medios de comunicación amplifican el mensaje de las autoridades que interfieren en los procedimientos judiciales, preparando a la opinión pública para las decisiones más aberrantes desde el punto de vista jurídico, carentes de base probatoria o contrarias al derecho internacional.

Estos elementos indican una ruptura del Estado de Derecho en Ecuador.

B. Utilización del poder judicial para la persecución/represión política

1. Contextualización

23. En América Latina parece haberse generalizado lo que puede llamarse una "judicialización de la política".

La expresión significa que los conflictos políticos se resuelven mediante la instrumentalización de la justicia. Este fenómeno es tan preocupante que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁴⁰. Recordando lo sucedido en Honduras, Paraguay y Brasil, la Comisión consideró que *"tales situaciones deben llamar la atención sobre posibles casos de distorsión de la figura del juicio político, con el consiguiente riesgo de su utilización arbitraria como cobertura de un golpe de Estado parlamentario"* (§10).

Cabe destacar que Ecuador se opone a que este dictamen sea emitido y argumenta a favor de la inadmisibilidad de la solicitud formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁴¹.

24. A medida que este fenómeno crecía, se creó el Lawfare Institute, un organismo que estudia el uso indebido del derecho como "arma" para lograr un objetivo político, como herramienta para desacreditar a un enemigo político.

Esta organización describe el término "lawfare" de la siguiente manera:

"El término lawfare fue creado en 2001 por el General de División del Ejército de los Estados Unidos Charles Dunlap, y desde entonces ha sido estudiado en importantes universidades como Harvard, por ejemplo. El lawfare es un arma poderosa para combatir

⁴⁰ CIDH, « Demande d'avis consultatif : démocratie et droits de l'homme dans le cadre des procès politiques », 13 de octubre de 2017, https://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitud_13_10_17_fre.pdf

⁴¹ Ecuador, Observaciones transmitidas el 26 de abril de 2018 por la Embajada del Ecuador en Costa Rica, San José, ref. n°4-3-14/2018.

a los enemigos políticos, combinando acciones aparentemente legales con una amplia cobertura mediática. La idea es turbar al enemigo hasta el punto de que se vuelva extremadamente vulnerable a las acusaciones infundadas. Una vez debilitados, pierden el apoyo popular y todo poder de reacción"⁴².

Este Instituto analizó el caso de Ecuador y consideró que el lawfare actuó en varios procesos contra diversas figuras políticas vinculadas al movimiento del expresidente CORREA DELGADO⁴³.

25. A modo de recordatorio, el 24 de mayo de 2017, el Sr. CORREA DELGADO renunció voluntariamente a la presidencia de Ecuador.

Fue el candidato de su partido, Alianza País, quien ganó: el Sr. Lenín Moreno. En consecuencia, todo el mundo esperaba la continuidad de la acción gubernamental. Sin embargo, desde los primeros días del gobierno de Moreno se tomaron decisiones y medidas que rompían completamente con las políticas anteriores.

L. Moreno hizo una serie de declaraciones cuestionando las políticas de su predecesor, acusando a éste de no haber preparado la transición, de haber sobreendeudado al país, de haber creado una crisis económica, de haber ejecutado mal las obras públicas, de haber anunciado su deseo de distanciarse de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), creada en 2008 para hacerle "contrapeso" a la OEA⁴⁴, etc. Poco después de su nombramiento, el presidente Moreno comenzó a nombrar a personas opuestas al presidente saliente para cargos públicos. Entre las decisiones tomadas por L. Moreno, la supresión del asilo político concedido a Julian Assange también atestigua el giro que se dió.

Elegido en tándem con Lenín Moreno como vicepresidente, Jorge Glas acusó públicamente al gobierno de Moreno de prácticas inadecuadas. Esto provocó el inicio de una avalancha de procedimientos judiciales, violando las normas básicas de un juicio justo, contra los ahora llamados "correístas"⁴⁵.

⁴² Traducción libre de:

« *The term lawfare was created in 2001 by US army major General Charles Dunlap, and has been studied ever since in major universities such as Harvard, for example. Lawfare is a powerful weapon for fighting political enemies, combining apparently legal actions and widespread media coverage. The idea is to embarrass the enemy to the point where they become extremely vulnerable to the baseless accusations. once weakened, they lose popular support and any power of reaction* »

Institute Lawfare – About the Institute - http://lawfareinstitute.com/?page_id=4

⁴³ Lawfare Institute, "Expert opinion issued on occurrence of lawfare in Ecuador", 18 de octubre de 2018, <http://lawfareinstitute.com/expert-opinion-issued-on-occurrence-of-lawfare-in-ecuador/>

⁴⁴ Lenín MORENO ha anunciado finalmente que dejaría la UNASUR en marzo de 2019.

⁴⁵ El carácter sistémico y generalizado de la persecución política podría entrar en el ámbito de aplicación del artículo 7.1 h) del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que establece:

"Artículo 7 Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

26. La intención de realizar una purga de todos los funcionarios leales a los ideales y/o políticas del expresidente CORREA DELGADO fue claramente expresada.

El Ministro de Comunicación indicó en octubre de 2018 que era necesario combatir los "topos correístas" en todo el gobierno ecuatoriano⁴⁶. El diario El Comercio tituló "El Gobierno anuncia una purga para 'descorreizar' al Ejecutivo":

"'Mafia', 'fanáticos', 'topos'. Esos son los términos que las autoridades del Gobierno usan para referirse a funcionarios de su administración que permanecen desde el Régimen anterior y que, según ellos, han establecido un sistema para garantizar la impunidad de la corrupción"

(...)

*"Por ello, GRANDA recomienda a otros ministros y secretarios de Estado que realicen una evaluación de los empleados y colaboradores de las instituciones que dirigen para identificar a más infiltrados."*⁴⁷.

Con el argumento de la "lucha contra la corrupción", como lo hizo para desintegrar la función judicial, y a pesar de que él mismo fue durante mucho tiempo miembro del aparato del Estado, el Sr. Moreno y su gobierno le hicieron la guerra a los "topos correístas":

"«Desde su llegada al poder en mayo de 2017, y tras descubrir toda serie de presuntos desfalcos que habían dejado vacías las arcas públicas, Moreno se puso la lucha contra la corrupción como uno de sus principales objetivos (...)"

(...)

«Nosotros tenemos -y hay que ser muy sinceros- topos correístas enquistados en todo el sistema del Gobierno y funciones del Estado. Tenemos enquistados muchos topos», reconoció el secretario nacional frente a esa posibilidad.

(...)

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura ;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte".

⁴⁶ EFE, "Ecuador tiene topos correístas en todo el sistema de Gobierno, dice el ministro de Comunicación", 24 de octubre de 2018, <https://www.efe.com/efe/america/politica/ecuador-tiene-topos-correistas-en-todo-el-sistema-de-gobierno-dice-ministro-comunicacion/20000035-3791343>

⁴⁷ El Comercio, "El Gobierno anuncia una purga para descorreizar al ejecutivo", 25 de octubre de 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-anuncia-purga-descorreizar-ejecutivo.html>

Hombre de confianza de Moreno y la cara más visible de esa nueva forma de hacer política que ha institucionalizado el presidente de Ecuador, Michelena insiste en que el mensaje de combate a la corrupción es “contundente”⁴⁸.

27. El cambio de presidente en 2021 no ha cambiado el discurso de las autoridades.

La intervención de las autoridades en los procesos judiciales relativos a los "correístas" sigue siendo destacada (véase más adelante). En 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reconoció que *'se ha planteado la meta de que el correísmo no regrese al Gobierno, si bien, dijo, debe entregar el poder a otra persona, manifestó que deberá ser alguien que respete lo fundamental de la democracia, la libertad, que cree en la libre empresa, la iniciativa, el emprendimiento privado'*⁴⁹.

28. Un factor indispensable en el lawfare es la creación de la figura del enemigo y la amplificación por parte de la prensa de las acusaciones formuladas contra este enemigo político.

Los medios de comunicación han sido ampliamente utilizados para influir en la opinión pública en Ecuador. Este factor refleja la falta de un juicio justo para las víctimas de estas campañas mediáticas.

Los siguientes casos sólo ilustran el fenómeno del lawfare contra los "correístas" en Ecuador. Muchos correístas, o supuestos correístas, que trabajan en la administración han perdido su empleo sólo por este motivo y/o son objeto de discriminación/amenazas/desahucios. Pocos tienen los conocimientos, la voluntad y los medios para luchar en los tribunales para intentar hacer valer sus derechos. El lawfare se ha extendido recientemente a los líderes indígenas de las protestas de junio de 2022 (véase más abajo).

⁴⁸ Entorno Inteligente, "ANDRÉS MICHELENA: 'ECUADOR TIENE TOPOS CORREÍSTAS EN TODO EL SISTEMA DE GOBIERNO'", 24 de abril 2018, <https://www.entornointeligente.com/andrs-michelena-ecuador-tiene-topos-correstas-en-todo-el-sistema-de-gobierno/>

⁴⁹ Radio Pichincha, "Me he planteado la meta de que los correístas no puedan regresar al Gobierno, reconoce Guillermo Lasso", 5 de junio 2022, <https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/me-he-planteado-la-meta-de-que-los-correistas-no-puedan-regresar-al-gobierno-reconoce-guillermo-lasso/>

2. Caso de Rafael CORREA DELGADO

29. El expresidente del Ecuador CORREA DELGADO ha sido procesado penalmente en dos casos: el caso "Balda" y el caso "Sobornos".

Fue presentado directa y públicamente por las autoridades, con amplia difusión en la prensa, como culpable de los supuestos delitos.

El 24 de enero de 2018, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de magistrados y abogados (REIMA) ha realizado un llamado de atención a Ecuador con respecto a sus obligaciones internacionales y sobre las garantías que se deben dar para que el juicio se llevara a cabo de forma independiente e imparcial⁵⁰. El Relator Especial reiteró su preocupación el 28 de enero de 2019⁵¹. La Comisión de Control de los Ficheros de Interpol se negó a difundir las notificaciones rojas solicitadas por Ecuador⁵². Al ser interpelado por otros implicados en el "caso Sobornos", el REIMA reiteró el 9 de julio de 2021⁵³ y el 26 de enero de 2022⁵⁴ su grave preocupación no sólo por la falta de independencia e imparcialidad de los jueces en este caso, sino también por la violación de otras facetas del derecho a un juicio justo.

30. En ambos casos, la figura jurídica de la "colaboración eficaz" -denuncia de un acusado a cambio de una reducción de la pena- fue fundamental.

A pesar de que se requieren pruebas objetivas para corroborar las afirmaciones del informante, estos casos carecen de ellas. En el caso "Balda", el principal colaborador eficaz, el Sr. Chicaiza, admitió posteriormente que había sido presionado, incluso por el presidente del CPCCS-T, para que implicara al expresidente⁵⁵.

En el caso "Sobornos", el cuaderno que sustentó el testimonio de P. Martínez, la colaboradora eficaz, fue, según su propia confesión, escrito años después de los hechos delictivos y presuntamente fueron transcritos en el mismo momento⁵⁶. P. Martínez nunca pudo ser

⁵⁰ REIMA, llamamiento de 24 de enero de 2018, OL ECU 1/2018, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23589>

⁵¹ REIMA, llamamiento del 28 de enero de 2019, AL ECU 2/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24304>

⁵² EuropaPress, "Interpol rechaza por tercera vez emitir su 'alerta roja' contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa", 18 de agosto 2021, <https://www.europapress.es/internacional/noticia-interpol-rechaza-tercera-vez-emitir-alerta-roja-contra-expresidente-ecuatoriano-rafael-correa-20210818233148.html>

⁵³ REIMA, llamamiento de 9 de julio de 2021, AL ECU 2/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26537>

⁵⁴ REIMA, llamamiento del 26 de enero de 2022, AL ECU 1/2022, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26981>

⁵⁵ Confirmado.net, "Caso Balda: Chicaiza afirmó que Trujillo le amenazó con 9 años de prisión si no implicaba a Correa en el supuesto secuestro de Balda", 3 de enero de 2022, <https://confirmado.net/2022/01/03/caso-balda-chicaiza-afirmo-que-trujillo-le-amenazo-con-9-anos-de-prision-si-no-implicaba-a-correa-en-el-supuesto-secuestro-de-balda/>

⁵⁶ Confirmado.net, "Ecuador: le armaron la "causa de los cuadernos" a Rafael Correa pero los escribieron cuando ya no era presidente", 7 de septiembre de 2019, <https://confirmado.net/2019/09/07/ecuador-le-armaron-la-causa-de-los-cuadernos-a-rafael-correa-pero-los-escribieron-cuando-ya-no-era-presidente/>

interrogada por la defensa. Para este juicio, la Fiscalía General creó una página de Internet para propagar sus acusaciones a través, entre otras cosas, de múltiples videoclips, acompañados de un fondo musical marcial⁵⁷. Al cabo de este procedimiento, el Sr. CORREA DELGADO fue condenado como autor de un delito de corrupción por influjo psíquico⁵⁸, como jefe de un Estado calificado de organización criminal, a 8 años de prisión con prohibición de ejercer sus derechos políticos. La duración y el momento del caso Sobornos atestiguan el propósito político de la acusación. Todo el caso contra casi 20 acusados, incluida la investigación, se tramitó en sólo 17 meses, a pesar de la pandemia que había justificado la paralización de todos los demás procedimientos en el país. El Tribunal de Casación resolvió los 16 recursos introducidos contra las más de 820 páginas de la sentencia apelada en un tiempo récord de 20 días⁵⁹, y dictó una sentencia de 231 páginas. Sentencia que salió en el momento justo para impedir al Sr. CORREA presentarse a las elecciones de 2021 para la vicepresidencia.

31. El expresidente CORREA DELGADO también está involucrado en una multitud de otros procedimientos, menos exitosos, por acusaciones a veces totalmente inverosímiles.

Está siendo investigado por "crímenes contra la humanidad/ejecución extrajudicial"⁶⁰, con respecto a hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, día en que él mismo fue víctima de un intento de golpe de Estado condenado por la comunidad internacional⁶¹.

La avalancha de denuncias, apoyadas por las autoridades y comentadas en la prensa, es una muestra del lawfare en marcha en Ecuador.

32. El 15 de marzo de 2022, Bélgica reconoció el estatus de refugiado del expresidente de Ecuador⁶² como resultado de una persecución política que tomó la forma de procesos penales injustos.

Esta noticia fue ampliamente difundida y puesta en conocimiento de las autoridades ecuatorianas. Las autoridades ecuatorianas siguieron insistiendo en los medios de comunicación

⁵⁷ Cf: <https://www.fiscalia.gob.ec/caso-sobornos-2012-2016/>

⁵⁸ Confirmado.net, "Rafael Oyarte: "Qué pendejada fueron a meter en el fallo", sobre sentencia contra Correa de autoría mediata por influjo psíquico", 21 de mayo 2021, <https://confirmado.net/2021/05/21/rafael-oyarte-que-pendejada-fueron-a-meter-en-el-fallo-sobre-sentencia-contracorrea-de-autoria-mediata-por-influjo-psiquico/>

⁵⁹ Primicias.ec, "Un trámite falta para que se ejecute la sentencia de Rafael Correa", 7 de septiembre 2020, Primicias.ec: <https://www.primicias.ec/noticias/politica/sobornos-decision-casacion/>

⁶⁰ El Comercio, "16 denuncias vinculadas con el 30-S apuntan a Rafael Correa", 29 de septiembre 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-victimas-insubordinacion-rafael-correa.html>

⁶¹ El Comercio, '30S insubordinación policial', <https://especiales.elcomercio.com/2011/09/30s/>

El hecho ha sido condenado de forma unánime por la mayoría de los países latinoamericanos y los Estados Unidos, así como la Unasur, la OEA, la ONU y la ALBA: https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Ecuador_de_2010#Reacci%C3%B3n_internacional

⁶² Rtbf, "Diplomatie : la Belgique accorde l'asile à l'ex-président équatorien Rafael Correa", 22 de abril de 2022, <https://www.rtbf.be/article/diplomatie-la-belgique-accorde-l-asile-a-l-ex-president-equatorien-rafael-correa-10979730>

en que solicitarían la extradición a Bélgica, a pesar de las negativas anteriores de Interpol⁶³. Esta nueva campaña mediática se llevó a cabo a pesar de la obligación de no devolución que implica el estatuto de refugiado político⁶⁴.

3. El caso de Jorge GLAS

33. El caso del exvicepresidente, Jorge Glas, es un ejemplo emblemático de lawfare.

Jorge GLAS adoptó una posición muy firme contra la nueva política aplicada por Lenín Moreno. Tan pronto como el vicepresidente, elegido con la misma papeleta electoral que el Sr. Moreno, manifestó públicamente su continuo apoyo a las políticas respaldadas por el Sr. Correa Delgado, comenzó una persecución política y judicial contra él, apoyada por el presidente Moreno⁶⁵.

34. Jorge Glas fue acusado por primera vez en el caso "Odebrecht", vinculado a la famosa operación "Lava Jato" en Brasil.

En octubre de 2017 se aresta al exvicepresidente Jorge Glas en el marco del "caso Odebrecht". Muy rápidamente, en diciembre de 2017, fue sentenciado a seis años de cárcel, lo que fue confirmado en apelación. Fue en relación con este caso que, en octubre de 2018, el lawfare Institute analizó en detalle la forma en que el exvicepresidente fue puesto en prisión preventiva, privado del cargo para el que había sido elegido y condenado sin el beneficio de las garantías procesales básicas⁶⁶. La condena de Jorge Glas se basó principalmente en las declaraciones de los "cooperadores eficaces" brasileños que nunca pudieron ser interrogados por la defensa. No hay pruebas objetivas que respalden las acusaciones de los informantes, que gozaron de total impunidad en Ecuador. El caso se encuentra ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver más abajo).

La fiabilidad de los testimonios de los empleados de Odebrecht también ha sido fuertemente cuestionada desde que el exdirector de Odebrecht, Carlos Armando Paschoal, reveló que fue

⁶³ DiarioCorreo, "Cancillería pedirá a Bélgica extradición de Rafael Correa", 29 de mayo 2022, <https://diariocorreo.com.ec/71285/nacional/contraloria-pedira-a-belgica-extradicion-de-rafael-correa>

⁶⁴ DW, "Bélgica desestimará extradición de Rafael Correa, dice su defensa", 7 de mayo 2022, <https://www.dw.com/es/b%C3%A9lgica-desestimar%C3%A1-extradici%C3%B3n-de-rafael-correa-dice-su-defensa/a-61716250>

⁶⁵ La República, 'Diario "La Estrella de Panamá" habla de existencia de grave expediente contra Glas', 2 de noviembre de 2016. En línea: <https://www.larepublica.ec/blog/politica/2016/11/02/diario-estrella-panama-habla-existencia-grave-expediente-glas/>

El Comercio: Lenín Moreno: 'Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted', 4 de agosto de 2017. En línea <https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-jorgeglas-guayaquil-carta-funciones.html>

El Universo " Prisión preventiva para Jorge Glas, quien la acepta 'bajo protesta'", 3 de octubre de 2017. En línea: <https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/03/nota/6412954/prision-preventiva-glas-quien-acepta-bajo-protesta>

⁶⁶ Lawfare Institute, "Expert opinion issued on occurrence of lawfare in Ecuador", 18 de octubre de 2018, <http://lawfareinstitute.com/expert-opinion-issued-on-occurrence-of-lawfare-in-ecuador/>

"casi obligado" a construir un caso contra el expresidente brasileño LULA DA SILVA con fines políticos⁶⁷. También se han hecho públicos los mensajes intercambiados entre los fiscales encargados del caso contra el expresidente Lula y el exjuez Sergio Moro, que llegó a ser el ministro de Justicia del presidente brasileño BOLSONARO. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido la violación de la presunción de inocencia y del derecho a un juicio justo y sus implicaciones para el ejercicio de los derechos políticos del expresidente de Brasil, Lula da Silva, falsamente implicado en el "caso Lava Jato"⁶⁸.

35. El exvicepresidente Jorge GLAS también fue condenado en el caso "Sobornos" (véase más arriba), por lo que Bélgica le concedió el estatuto de refugiado al Sr. CORREA DELGADO en vista de la flagrante injusticia del proceso.
36. Jorge Glas se ve finalmente involucrado en un caso "Singue", relacionado con la presunta adjudicación ilícita de un contrato petrolero.

Este caso aún no está definitivamente resuelto, pero cabe señalar que Ecuador acaba de perder ante el Tribunal de Arbitraje Internacional contra la empresa que ganó el contrato⁶⁹.

37. Puesto en prisión preventiva en octubre de 2017, el exvicepresidente fue trasladado en 2018 a una cárcel de alta seguridad donde, ante las constantes amenazas contra él, tuvo que vivir aislado.

La situación era tan peligrosa que obtuvo una medida provisional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la preservación de su vida y su salud⁷⁰.

A pesar de los graves problemas de salud del Sr. Glas y de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, Ecuador lo ha mantenido, sin justificación, en régimen de aislamiento en una prisión de alta seguridad donde no recibió una asistencia sanitaria adecuada. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió un dictamen el 9 de septiembre de 2021, en el que dice “65. *El Grupo de Trabajo desea expresar su gran preocupación por el deterioro de la salud del Sr. Glas Espinel, así como por las condiciones de peligro en las cuales se alega que se encuentra detenido. Según la fuente, el Sr. Glas Espinel ha recibido amenazas de muerte durante su detención en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Además, recientemente otros prisioneros del Centro habrían perdido la vida por*

⁶⁷ Artículo de Le Monde, "Au Brésil, des révélations sur l'opération 'Lava Jato' ternissent encore l'image de la justice", 18 de julio de 2019. En línea: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/18/de-nouvelles-revelations-sur-l-operation-lava-jato-ternissent-encore-l-image-de-la-justice-bresilienne_5490761_3210.html

⁶⁸ CDH, *Lula da Silva v. Brasil*, CCPR/C/134/D/2841, 27 de marzo de 2022, <https://tbinternet.ohchr.org/>

⁶⁹ El Universo, "Procuraduría planteará una acción de anulación al laudo arbitral que condenó a Ecuador a pagar \$ 11 millones a Gente Oil", 9 de junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/procuraduria-planteara-una-accion-de-anulacion-al-laudo-arbitral-que-condeno-a-ecuador-a-pagar-11-millones-a-gente-oil-nota/>

⁷⁰ CIDH, *Jorge David Glas Espinel respecto de Ecuador*, 31 de diciembre de 2019, RESOLUCIÓN 69/2019, Medida Cautelar No. 1581-18, disponible en <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/69-19MC1581-18-EC.pdf>

*hechos de violencia ocurridos dentro del penal. El Grupo de Trabajo le urge al Gobierno del Ecuador tomar acciones inmediatas para resguardar la seguridad y el bienestar del Sr. Glas Espinel, incluyendo el otorgamiento de medidas alternativas a la detención, incluyendo la liberación anticipada u otras medidas no privativas de libertad"*⁷¹.

Por lo tanto, se presentó una solicitud de habeas corpus para conseguir una modalidad alternativa de ejecución de la pena. Un juez aceptó esta solicitud el 9 de abril de 2022. Tan pronto como se hizo pública esta decisión, las más altas autoridades -el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional, la fiscal general del Estado, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y el procurador general- interfirieron en el proceso judicial⁷². Tanto es así que el presidente de la Corte Constitucional, el 25 de abril de 2022, emitió un vídeo en el que afirmaba que *"las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el habeas corpus y la institución del precedente vinculante. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos firme y enfáticamente"*⁷³.

El juez que concedió el habeas corpus fue suspendido de sus funciones⁷⁴. El 20 de mayo de 2022, la Corte de Santa Elena ordenó que Jorge Glas sea localizado de inmediato y se lo lleve de nuevo a la Cárcel Regional de Cotopaxi, pero también que la Fiscalía investigue la actuación del juez y de los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad que intervinieron en la diligencia de primera instancia⁷⁵.

⁷¹ GTDA, Dictamen 39/2021, 9 de septiembre de 2021, A/HRC/WGAD/2021/39

⁷² COMUNICADO OFICIAL | Ante la decisión judicial que concede el habeas corpus en favor de J. Glas, manifestamos nuestro rechazo y desacuerdo jurídico, así como nuestra preocupación por el abuso de las acciones constitucionales disponibles en: <https://twitter.com/ComunicacionEc/status/1512971387018911749?s=20&t=LABLd4mASEyNBs8n4GY2g>
#ATENCIÓN | Ante la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa de Jorge Glas, sobre quien pesan 2 sentencias ejecutoriadas y un proceso pendiente (por apelación), #FiscalíaEc informa a la ciudadanía (comunicado).#FiscalíaContraElDelito, disponibles en: <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1512949416621129730?s=20&t=LABLd4mASEyNBs8n4GY2g>
Consejo Judicatura @CJudicaturaEc 10 abr. #ComunicadoCJ | El Consejo de la Judicatura al país, disponible en https://twitter.com/CJudicaturaEc/status/1513003124046409729?s=20&t=lkGSx5iT6wx5ppFL_fXJFQ
Ecuador refuerza vigilancia de exvicepresidente por temor a fuga, 11 de abril de 2022, disponible en <https://www.dw.com/es/ecuador-refuerza-vigilancia-de-exvicepresidente-por-temor-a-fuga/a-61442839>
Entrevista al Gral. (sp) Patricio Carrillo, Ministro del Interior en La Posta, el 12 de abril de 2022, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=FGm2C4tShLo>

“Lasso: «Jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces corruptos o cobardes””, 24 de abril 2022, <https://sradio.com.ec/lasso-jamas-permitire-que-el-ecuador-se-convierta-en-un-estado-sitiado-por-bandas-de-narcotrafico-auxiliadas-por-jueces-corruptos-o-cobardes>

⁷³ La Corte Constitucional del Ecuador a los medios de comunicación y a la ciudadanía, 24 de abril de 2022, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=ehl76kM37fY>

⁷⁴ Corte Nacional de Justicia pide suspensión e investigaciones a jueces que dieron 'habeas corpus' a Jorge Glas y al líder de Los Choneros, 24 de abril de 2022, disponible en <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/corte-nacional-de-justicia-pide-suspension-e-investigaciones-a-jueces-que-dieron-habeas-corpus-a-jorge-glas-y-al-lider-de-los-choneros-nota/>

⁷⁵ Expreso.ec, "Corte de Santa Elena ordena la localización y captura de Jorge Glas", 20 de mayo 2022, <https://www.expreso.ec/actualidad/corte-santa-elena-ordena-localizacion-captura-jorge-glas-127853.html>

38. A finales de mayo de 2022, ante la gravedad de la situación, la CIDH decidió acelerar el trámite del recurso presentado por Jorge Glas en el caso "Odebrecht"⁷⁶.

4. El caso de Carlos OCHOA

39. El Sr. Carlos Alberto OCHOA HERNANDEZ fue superintendente de comunicaciones bajo la administración de CORREA.

El 24 de enero 2019, la Fiscalía formuló cargos por el delito de falsificación y uso de documento falso, pero finalmente lo acusó en calidad de autor del delito de falsificación ideológica⁷⁷.

El exfuncionario aseguró que en su caso la presunción de inocencia y el debido proceso han sido violadas flagrantemente por la Fiscalía. El Sr. OCHOA HERNANDEZ ha solicitado el asilo político en Bolivia⁷⁸. Interpol, institución destinada a facilitar la cooperación penal internacional, se negó a ejecutar la solicitud de difusión roja emitida por Ecuador⁷⁹.

5. Caso de Fernando ALVARADO ESPINEL

40. El Sr. ALVARADO ESPINEL fue ministro de la SECOM (Secretaría de Comunicación).

El Sr. ALVARADO ESPINEL fue acusado de haber celebrado un contrato de trabajo para una cobertura en los medios de comunicación con una persona que *a priori* no estaba cualificada para desempeñar esta función. Este contrato tenía una duración de 8 meses y preveía una remuneración mensual de 1.500 dólares. El Sr. ALVARADO ESPINEL fue imputado únicamente por su condición de jefe de la administración en la que se había contratado a la persona "no cualificada".

Al Sr. ALVARADO ESPINEL se le colocó un brazalete electrónico, con prohibición de salir del país. Sin embargo, huyó del país a causa de la persecución que sufría.

⁷⁶ RadioPichincha, "CIDH acelera el proceso en Caso Glas por presuntas violaciones a sus derechos humanos", 3 de junio 2022, <https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/cidh-acelera-el-proceso-en-caso-glas-por-presuntas-violaciones-a-sus-derechos-humanos/>

⁷⁷ El Universo, "Exsuperintendente Carlos Ochoa es llamado a juicio por el delito de falsificación ideológica", 20 de marzo de 2019, <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/20/nota/7242710/exsuperintendente-carlos-ochoa-es-llamado-juicio-delito/>

⁷⁸ Metro, "Sofía Espín y Carlos Ochoa están en Bolivia por asilo político", 31 de enero de 2019, <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/01/31/sofia-espín-carlos-ochoa-están-bolivia-asilo-politico.html>

⁷⁹ El Universo, "Interpol niega difusión roja contra exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa", 13 de febrero 2019, <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/13/nota/7187066/interpol-niega-difusion-roja-contr-exsuperintendente-comunicacion/>

En octubre de 2018, las autoridades ecuatorianas solicitaron una notificación roja por una presunción de malversación de fondos por parte de su administración. Interpol rechazó la publicación de la notificación roja solicitada por Ecuador⁸⁰.

En octubre del 2020, un voto de mayoría de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante la inexistencia del delito de peculado, declaró la inocencia de Alvarado. El entonces juez nacional y hoy presidente de la CNJ, Iván Saquicela, involucrado en los casos contra el expresidente CORREA y el exvicepresidente GLAS, fue quien emitió un dictamen distinto, señalando que sí existía el delito de peculado.

La Fiscalía apeló la decisión de mayoría. A pesar de la absolución, la Fiscalía también interpuso un recurso para que el Sr. ALVARADO ESPINEL fuera condenado por el incumplimiento de la medida cautelar ordenada en 2018⁸¹. El 10 de noviembre de 2020, el Ministerio de Gobierno publicó una foto de Fernando Alvarado Espinel en la lista de "Los más buscados por corrupción" del país⁸², a pesar de que ya no existía una orden de detención.

6. Caso de Vinicio ALVARADO

41. Vinicio ALVARADO estuvo involucrado en el caso "Sobornos", al igual que el expresidente CORREA y el exvicepresidente GLAS.

El 8 de agosto de 2019, la justicia ecuatoriana solicitó a la Interpol que publicara la notificación roja y se procediera a la localización y captura del exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado.

Interpol negó la demanda ecuatoriana. El organismo internacional concluyó que la solicitud entra en el ámbito del artículo 3 de su Estatuto, por lo que no procede aprobarla⁸³. Esta disposición prohíbe "*rigurosamente (...) a la Organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.*"⁸⁴ Con base en ese artículo, la Interpol indicó que la Secretaria General no está en condiciones de publicar la notificación roja y que la información sobre Alvarado se eliminará de las bases de datos del organismo.

7. El caso de Walter SOLÍS

42. Walter Solís fue titular de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y ministro de Obras Públicas durante el Gobierno de Rafael Correa.

⁸⁰ Su nombre no figura en la lista de personas buscadas por Interpol (notificación roja) - <https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-rouges>

⁸¹ El Universo, "Por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente Fiscalía pide audiencia para formular cargos contra Fernando Alvarado", 17 noviembre 2021

⁸² Expreso.ec, "Fernando Alvarado, el más buscado en Ecuador por delitos de corrupción", 10 de noviembre 2020, <https://www.expreso.ec/actualidad/fernando-alvarado-buscado-ecuador-delitos-corrupcion-93336.html>

⁸³ Primicias.ec, "Interpol niega solicitud de difusión roja para Vinicio Alvarado", 17 de febrero 2020, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/interpol-niega-solicitud-difusion-roja-vinicio-alvarado/>

⁸⁴ Artículo 3, Estatuto de Interpol.

Fue imputado en el caso "Sobornos", al igual que el expresidente CORREA y el exvicepresidente GLAS. El 8 de agosto de 2019, la justicia ecuatoriana solicitó a la Interpol que publicara la notificación roja y se procediera a la localización y captura de Walter Solís. Interpol lo negó.

El 4 de enero de 2021, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador condenó otra vez a W. SOLÍS a ocho años de prisión, le declaró culpable de "peculado" o malversación de fondos públicos⁸⁵.

A pesar de esta doble condena⁸⁶, dado el perfil político y las violaciones del derecho a un juicio justo, Interpol no emitió una notificación roja para él⁸⁷.

El 26 de enero de 2022, a raíz de una acción urgente presentada por W. SOLIS, C VITERI, V. BONILLA y R ALVARADO, el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados expresó a Ecuador su grave preocupación respecto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en relación con el derecho a tener acceso a un juez independiente e imparcial y a un juicio justo⁸⁸.

8. Caso de Ricardo Armando PATINO

43. El Sr. PATINO fue ministro de Asuntos Exteriores bajo el gobierno de CORREA.

A finales de octubre del 2018, reunido con militantes de la llamada ‘revolución ciudadana’, Patiño arengó en Latacunga: *“Es necesario pasar a la ofensiva. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa”*. Fue procesado por el delito de "incitación a delinquir" por haber llamado a los miembros de la oposición a emprender una "resistencia combativa con medios pacíficos" con el fin de rechazar las políticas del gobierno y exigir la liberación del exvicepresidente de la República, Jorge GLAS⁸⁹.

⁸⁵ DW, "Ecuador: Walter Solís condenado a la cárcel por malversación", 5 de enero 2021, <https://www.dw.com/es/ecuador-walter-solis-condenado-a-la-c%C3%A1rcel-por-malversaci%C3%B3n/a-56129491>

⁸⁶ El Telégrafo, "Dos juicios, prisión y extradición afronta Walter S.", 10 de marzo 2020, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/walter-solis-caso-sobornos>

⁸⁷ Su nombre no figura en la lista de personas buscadas por Interpol (notificación roja) - <https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-rouges>

⁸⁸ REIMA, Llamamiento del 26 de enero de 2022, AL ECU 1/2022, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26981>

⁸⁹ La República « Patino llama a la “resistencia combativa” contra el gobierno de Moreno”, 28 octubre 2018, <https://www.larepublica.ec/blog/politica/2018/10/28/patino-llama-resistencia-combativa-contra-gobierno-moreno/>

Un juez ordenó el 18 de abril del 2019 la prisión preventiva de Ricardo Patiño, por su presunta participación en el delito de instigación y pidió la difusión roja a la Interpol⁹⁰. El señor PATINO, entonces líder del partido político de la oposición presentó un recurso ante la Interpol⁹¹, que se negó una vez más a atender la petición ecuatoriana.

9. Caso Alexis MERA

44. Alexis Javier Mera Giler, exsecretario Jurídico de la Presidencia de la República de Rafael Correa (2007-2017) fue involucrado en el caso Sobornos.

Actualmente cumple condena de la cárcel de Ambato. El ex-juez Edgar Flores uno de los magistrados que integraron el Tribunal que en julio de 2019 resolvió la apelación de la sentencia, declaró la tarde del jueves 4 de agosto de 2022, durante su comparecencia en el proceso de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura (CJ): *“El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, debió ser liberado inmediatamente cuando se levantó la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de concusión, dentro del caso Arroz Verde (Sobornos); sin embargo la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dictó medidas alternativas “para evitar un escándalo”⁹².*

10. Caso de Maria DUARTE

45. María de los Ángeles Duarte, exministra de la Revolución Ciudadana (2007-2017) fue involucrada en el caso “Sobornos”.

Como por el expresidente CORREA, denuncia que no se ha cumplido el debido proceso, que se ha atropellado varios principios jurídicos en un caso en el que ni siquiera debía haber sido llamada a juicio. Denuncia también el linchamiento mediático y expresó que todo lo que sucede fue por impedir que Correa o alguien de su entorno pueda participar en el proceso electoral⁹³.

María DUARTE se refugió en la Embajada de Argentina en Quito, donde reside con su hijo desde hace más de dos años como huésped humanitaria. En marzo de 2022, Interpol volvió a

⁹⁰ El Comercio, “Ricardo Patiño es prófugo de la Justicia; juez ordena su prisión y solicita su ubicación internacional a Interpol”, 18 de abril 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/prision-ricardo-patino-interpol-profugo.html>

⁹¹ El Universo, “Ricardo Patiño espera que la Interpol deseche de difusión roja en su contra”, 22 abril 2019. En línea : <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7297289/patino-espera-que-interpol-deseche-pedido-difusion-roja-su-contra>

⁹² El Universo, “Alexis Mera debía ser liberado, pero se dictaron medidas alternativas para evitar un escándalo”, reveló Édgar Flores, exjefe de la Corte Nacional de Justicia”, 4 de agosto 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/edgar-flores-exjefe-de-la-corte-nacional-de-justicia-revelo-que-alexis-mera-debia-ser-liberado-pero-se-dictaron-medidas-alternativas-para-evitar-un-escandalo-nota/>

⁹³ Confirmado.net, “María Duarte.- “Hemos sufrido linchamiento mediático que antes se penaba y ahora es normal””, 18 de febrero 2020, <https://confirmado.net/2020/02/18/maria-duarte-hemos-sufrido-linchamiento-mediatico-que-antes-se-penaba-y-ahora-es-normal/>

rechazar la difusión de la notificación roja solicitada por Ecuador⁹⁴. Ante la prolongada detención *de facto* de la exministra y su hijo, varias ONG han solicitado que se le conceda formalmente asilo diplomático⁹⁵.

11. Caso Julian ASSANGE

46. Julian Assange es un periodista australiano, activista y fundador de WikiLeaks⁹⁶. Su vida se ha dedicado a trabajar a favor del derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información ciudadana, con un fin social, político o reivindicativo⁹⁷.

Assange publicó a través de la plataforma WikiLeaks información de interés público sobre casos como la corrupción bancaria en Suiza o Islandia, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, crímenes medio ambientales en la Costa de Marfil, censura del internet en China, o información relevante de otros países como Arabia Saudí o Rusia. De igual forma, WikiLeaks publicó documentos que probaban violaciones a derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense en Irak y Afganistán, así como documentos públicos relativos a torturas en Guantánamo.

Como consecuencia de la difusión de información de graves violaciones cometidas por autoridades de Estados Unidos, Assange fue acusado de 18 cargos, 17 de los cuales se enmarcan bajo la Ley de Espionaje (*Espionage Act*) de 1919, iniciándose así toda una persecución desde Estados Unidos contra un periodista por el simple hecho de publicar información veraz que prueba la ejecución de gravísimos crímenes. Ante esta situación, Assange solicitó asilo ante las autoridades ecuatorianas, mismo que le fue concedido el 16 de agosto de 2012, durante el Gobierno de Rafael Correa. El asilo fue solicitado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Durante el tiempo que Assange permaneció en la misión diplomática, múltiples organismos de derechos humanos intervinieron y reclamaron su libertad, como por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condenó a Suecia, Reino Unido y los demás países implicados por mantener al periodista en una situación de detención contraria al derecho internacional⁹⁸. Sin embargo, el Gobierno de

⁹⁴ Confirmado.net, “Interpol niega difusión roja contra María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Rafael Correa.”, 9 de marzo 2022, <https://confirmado.net/2022/03/09/interpol-niega-difusion-roja-contra-maria-de-los-angeles-duarte-ex-ministra-de-rafael-correa/>

⁹⁵ La República, “ONGs piden a Argentina dar asilo a exministra María de los Ángeles Duarte”, 18 de abril 2022, <https://www.larepublica.ec/blog/2022/04/18/ongs-piden-a-argentina-dar-asilo-a-exministra-maria-de-los-angeles-duarte/>

⁹⁶ WikiLeaks es un portal de noticias que desde 2006 se ha encargado de publicar documentos de interés público proveniente de fuentes anónimas. La plataforma diseñó un sistema de cortafuegos de las IP para evitar que nadie, ni siquiera la propia plataforma de noticias, pudiera identificar a los *whistleblowers* que remitían esa documentación. Gracias a la información publicada por WikiLeaks se han revelado múltiples violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

⁹⁷ <https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/el-gobierno-de-ecuador-concede-asilo-politico-julian-assange-fundador-de-wikileaks>

⁹⁸ Le Monde, Un groupe de travail de l’ONU estime que Julian Assange a été «détenu arbitrairement», 5 février 2016, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/02/05/julian-assange-a-ete-detenu-arbitrairement-par-la-suede-et-la-grande-bretagne-estime-l-onu_4859913_4408996.html

Lenín Moreno, en Ecuador, violando el principio de no devolución de todo refugiado que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había recordado, le retiró el estatuto de asilado el 11 de abril de 2019, le suspendió la ciudadanía ecuatoriana a la que había accedido, y permitió el acceso de la policía metropolitana británica a la misión diplomática para arrestar al fundador de WikiLeaks⁹⁹.

Es entonces cuando Estados Unidos revela lo que ya se sabía, que existía una causa secreta contra él en el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, solicitando formalmente su extradición. Desde entonces Assange permanece en régimen de prisión provisional en Belmarsh, prisión de máxima seguridad conocida como la “Guantánamo Británica”. Su equipo jurídico actualmente lucha para evitar su extradición a los Estados Unidos.

47. El caso de Julian ASSANGE difiere un poco de los demás casos descritos en este capítulo. Sin embargo, es relevante en el sentido de que se le retiró el estatus de refugiado, y en consecuencia su nacionalidad, violando el derecho a un juicio justo y a un recurso efectivo, para satisfacer los intereses políticos del gobierno de Lenín Moreno, que ha dado un claro giro a favor de los Estados Unidos de América.

En su opinión consultativa del 30 de mayo 2018, la Corte interamericana de derechos humanos había concluido, por unanimidad, que:

“El derecho a buscar y recibir asilo en el marco del sistema interamericano se encuentra configurado como un derecho humano a buscar y recibir protección internacional en territorio extranjero, incluyendo con esta expresión el estatuto de refugiado según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales, y el asilo territorial conforme a las diversas convenciones interamericanas sobre la materia

(...)

El principio de no devolución es exigible por cualquier persona extranjera, incluidas aquellas en búsqueda de protección internacional, sobre la que el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o que se encuentre bajo su control efectivo, con independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo del Estado

(...)

Special Rapporteur on the right to privacy, 18 April 2019, AL ECU 6/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24557> ;

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 18 de abril 2019, AL ECU 5/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24556>;

Todas las decisiones de la ONU sobre el caso J. Assange se encuentran en este sitio: <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/>

⁹⁹ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47902652>

*El principio de no devolución no solo exige que la persona no sea devuelta, sino que impone obligaciones positivas sobre los Estados*¹⁰⁰

Sin embargo, los derechos fundamentales de Julian ASSANGE han sido groseramente violados por parte de Ecuador. En una interpelación del 2 de octubre de 2019, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes señaló las numerosas violaciones de los derechos humanos de Julián ASSANGE por parte del gobierno de Lenín MORENO:

“Dado que el Gobierno de su Excelencia no ha aportado ninguna prueba creíble para la existencia, el 11 de abril de 2019, de una urgencia médica, una amenaza inminente a la seguridad u otra necesidad temporal para poner fin al asilo del Sr. Assange, que estaba en desde 2012, y dados los gravísimos riesgos para los derechos humanos del Sr. Assange en el caso de su extradición a los Estados Unidos, no parece convincente y plausible que haya sido imposible o poco razonable que el Gobierno de su Excelencia permitir a mi mandato realizar una visita in situ al Sr. Assange antes de expulsarlo de la Embajada

(...)

De hecho, desde su detención por la policía británica el 11 de abril de 2019, las preocupaciones se han demostrado correctas por las repetidas y continuas violaciones de sus derechos a un juicio justo en los procedimientos penales y de extradición británicos llevados a cabo contra él

(...)

Por las mismas razones, las garantías dadas por el Reino Unido a su Gobierno de su Excelencia de que el Sr. Assange no sería extraditado a un país en el que podría enfrentarse a la pena de muerte o a la tortura o los malos tratos, carecen de la credibilidad y la fiabilidad necesarias para que la expulsión del Sr. Assange al Reino Unido sea admisible según el derecho internacional. Como este mandato ha observado sistemáticamente las garantías diplomáticas han demostrado ser incapaces de proporcionar la protección requerida bajo el principio perentorio de no devolución

(...)

En resumen, es mi opinión considerada que, al menos desde marzo de 2018, los factores primarios, derivados de la responsabilidad de las autoridades ecuatorianas, infligieron de forma acumulativa y continuada graves sufrimientos mentales y emocionales a Sr. Assange, produciendo así los síntomas médicos típicos de las víctimas de tortura psicológica

(...)

En resumen, si bien puede haber situaciones en las que el asilo diplomático puede ser legalmente terminado, el estado de derecho requiere que cualquier decisión de este tipo se tome en un procedimiento regular sujeto al debido proceso legal, incluyendo la posibilidad de que la persona afectada presente y de recurrir a una autoridad judicial.

¹⁰⁰ Corte IADH, Opinión Consultiva OC-25/18 de 30 de mayo de 2018 solicitada por la República del Ecuador, <https://www.refworld.org.es/pdfid/5b48db9a4.pdf>

Además, ninguna de las circunstancias planteadas por el Gobierno de su Excelencia parece haber creado una situación de tal gravedad o urgencia que justifique o requiera la terminación del asilo diplomático del Sr. Assange. La prohibición de no devolución ante un riesgo real de tortura, al ser absoluta, inderogable y perentoria, prevalece sobre cualquier otra consideración

(...)

Como se determinó con precisión determinado por el GTAD en su decisión de 4 de diciembre de 2015, a la luz de estos riesgos, la presencia del Sr. Assange en la Embajada de Ecuador no podía considerarse en ningún momento como voluntaria, sino que equivalía a un confinamiento arbitrario, aunque es cierto que no es imputable a Ecuador, sino a Suecia y al Reino Unido. También reconozco que los cinco años iniciales de años de convivencia entre el Sr. Assange y el personal de la Embajada de Ecuador desde junio de 2012 a mayo de 2017 parecen haber estado marcados por unas relaciones respetuosas y amistosas.

Sin embargo, tras la elección del actual Gobierno ecuatoriano en 2017, las autoridades ecuatorianas habrían comenzado a crear y mantener deliberadamente circunstancias que hacen que las condiciones de vida del Sr. Assange sean cada vez más difíciles y opresivas.

(...)

Estas conclusiones del titular del mandato abajo firmante y de dos expertos médicos independientes con experiencia y especializados en el examen de víctimas de tortura proporcionan "motivos razonables para creer" que los funcionarios ecuatorianos han contribuido a la tortura psicológica del Sr. Assange. Como cuestión de derecho internacional, por lo tanto, el Gobierno de su Excelencia no tiene la discreción de simplemente refutar de refutar estas conclusiones, sino que tiene la obligación clara e inequívoca de llevar a cabo una investigación rápida e imparcial de estas acusaciones"¹⁰¹.

12. Caso de Ola BINI

48. Ola Bini es un desarrollador de software, programador, y activista de internet sueco. Trabaja para el Centro de Autonomía Digital en temas de privacidad, seguridad y criptografía¹⁰².

¹⁰¹ Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 2 October 2019, AL ECU 15/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24861>

¹⁰² El Centro de Autonomía Digital, una organización sin fines de lucro incorporada en Ecuador y España "con el propósito de hacer de Internet un lugar más seguro para todos", del cual es director técnico, publicó una declaración⁷ detalla sus contribuciones y notando que había sido clasificado por Computerworld como el desarrollador número 6 de Suecia (en 20088), y que "creó dos lenguajes de programación" y es "un activista de software libre, privacidad y transparencia desde hace mucho tiempo". La declaración enumeró sus contribuciones a loke, Seph, JesCov, JRuby, JtestR, Yecht, JvYAMLb, JvYAML-gem, RbYAML, Costillas, ActiveRecord-JDBC, Jatha, Xample y JOpenSSL <https://autonomia.digital/2019/04/12/ola-bini-arrest.html>

Dedicado a promover el uso del software libre, ha estado domiciliado en Ecuador desde 2013.

Por estar vinculado supuestamente a Julian Assange, WikiLeaks y el correísmo¹⁰³ fue detenido y arrestado en el aeropuerto de Quito cuando se preparaba para abordar un vuelo a Japón el 11 de abril de 2019¹⁰⁴. Esto ocurre luego de la detención del fundador de WikiLeaks en la Embajada de Ecuador en Londres. Dentro de la audiencia de formulación de cargos, la ministra del Interior María Paula Romo señaló a Bini como sospechoso de participar en un complot para desestabilizar el Gobierno de Moreno¹⁰⁵.

El 11 de Mayo 2019, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos mandaron una carta al gobierno ecuatoriano:

“quisiéramos expresar nuestra consternación, particularmente, porque el arresto y los cargos contra el Sr. Bini parecen estar conectados al apoyo público y su amistad con Julian Assange, así como con su trabajo y activismo en el área de la privacidad (...)

expresamos nuestra preocupación por las circunstancias que rodean el arresto y la detención del Sr. Bini (...)

recordamos que toda persona detenida deberá ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella, según los artículos 9 (2) del PIDCP y 7 (4) de la CADH. Las autoridades deben proporcionar información suficiente para que la persona pueda impugnar los motivos de la detención (...)

Finalmente, hacemos referencia a la alegación de que el Sr. Bini estuvo detenido en un lugar de detención no oficial el 11 de abril, y de que se le negó repetidamente el 4 acceso a sus abogados. Sobre este punto, expresamos nuestra preocupación por la alegada falta de salvaguardias para prevenir las violaciones de derechos¹⁰⁶.

¹⁰³ Expreso.ec, „El paso de Ola Bini por Ecuador“, 12 abril 2019, <https://web.archive.org/web/20190412234313/https://www.expreso.ec/ciencia-y-tecnologia/olabini-informatica-casoassange-telecomunicaciones-GE2754118>

¹⁰⁴ Infobae, „Un colaborador de Julian Assange fue detenido al intentar salir de Ecuador rumbo a Japón“, 11 abril 2019, <https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/11/un-colaborador-de-julian-assange-fue-detenido-al-intentar-salir-de-ecuador-rumbo-a-japon/>

¹⁰⁵ La Republica, „Audiencia de formulación de cargos contra sueco señalado como cercano a Assange“, 12 abril 2019, <https://www.larepublica.ec/blog/2019/04/12/audiencia-de-formulacion-de-cargos-contrasueco-senalado-como-cercano-a-assange/>

¹⁰⁶ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, interpelación del 11 de Mayo 2019, UA ECU 7/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24566>

El 26 de Julio 2019, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos interpelaron otra vez al gobierno ecuatoriano:

“Pese a que observamos la liberación del señor Ola Bini de la cárcel, aún seguimos preocupados por las continuas investigaciones y procedimientos criminales en su contra, dada la falta de información que observamos en cuanto a los motivos que puedan fundamentar estos procedimientos (...)

Aunque la evidencia mencionada podría calificar para la detención preventiva del Sr. Bini, bajo la ley domestica ecuatoriana, ninguna respuesta ha sido dada con relación a la base legal o factual de las acusaciones en su contra, razón por la cual nos gustaría recordarle al gobierno de su Excelencia sus obligaciones de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos¹⁰⁷.

La Misión de Observación que ha estado monitoreando el caso de Bini durante los últimos años y que incluye organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas e internacionales como Access Now, Article 19, Electronic Frontier Foundation (EFF), la Asociación de Software Libre de Ecuador (ASLE), Brasil de Fato, Fundación Karisma, Indymedia Ecuador, y otras ha rendido su informe en Mayo 2022¹⁰⁸. El informe recuerda que en el momento de su detención, Bini fue encarcelado sin que se presentaran cargos contra él, y el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, llegó a afirmar que el activista podría haber intentado interferir en las elecciones estadounidenses¹⁰⁹. Tras 70 días en la cárcel, Bini fue puesto en libertad, pero el proceso judicial contra él continúa. Bini tiene prohibido salir de Ecuador y sus cuentas bancarias han sido congeladas. El informe también explica que Fabián Hurtado, un testigo experto en el caso de Bini que preparó un informe sobre los cargos de la fiscalía contra Bini, ha sido acusado de obstrucción a la justicia y su casa fue objeto de una operación de registro policial. Amnistía Internacional afirma que a Hurtado, que trabajó para la defensa de Bini, se le confiscó violentamente su equipo electrónico y que la acción policial fue un acto "intimidatorio" que socava la defensa del activista de los derechos digitales¹¹⁰. Las organizaciones de derechos

¹⁰⁷ Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, interpelacion del 26 de Julio 2019, UA ECU 12/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24774>

¹⁰⁸ Access Now, Article 19, Electronic Frontier Foundation (EFF), la Asociación de Software Libre de Ecuador (ASLE), Brasil de Fato, Fundación Karisma, Indymedia Ecuador, y otras, „Informe de un proceso paradigmatico para los derechos humanos en la era digital: El caso Ola Bini“, Mayo 2022, https://www.eff.org/files/2022/05/09/final_report_ola_bini_case_in_spanish_informe_final_caso_ola_bini_en_espanol.pdf

¹⁰⁹ Ver tambien, Amnesty International, „Equateur, Ingérence dans la procédure pénale contre Ola Bini“, 26 août 2019, <https://www.amnesty.be/infos/actualites/equateur-ingerence-ola-bini>

Amnesty International, „Le droit d’Ola Bini à un procès équitable menacé“, 6 septembre 2019, <https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/equateur-droit-bini-proces-equitable-menace>

¹¹⁰ Amnesty International, Équateur. Une violente descente de police menace le droit d’Ola Bini à un procès équitable », 6 septembre 2019, <https://www.amnesty.org/fr/latest/press-release/2019/09/ecuador-allanamiento-violento-pone-en-riesgo-juicio-justo-ola-bini/>

humanos afirman que el programador sueco es objeto de una campaña de acoso judicial. La fiscalía se ampara en el artículo 234 del Código Penal para acusar a Bini de un delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de comunicaciones. La pena es de tres a cinco años de prisión. Su defensa está intentando que se desestime el caso. Tras años de aplazamientos, estaba previsto que el juicio de Bini se reanude el 16 de mayo 2022 pero todavía no hay sentencia.

A pesar de este largo plazo desde su arresto y de la obligación de juzgar las personas en un plazo razonable, se mantiene en contra de Ola Bini una prohibición de salir del país y se encuentra sometido a vigilancia constante.

13. Asilo diplomático tras las "protestas" de octubre de 2019

49. Tras la persecución de los líderes de la protesta social de octubre de 2019 (ver más abajo), siete 'correístas' decidieron refugiarse en la embajada de México, donde se les concedió asilo diplomático y luego un salvoconducto para huir de Ecuador¹¹¹.

14. El uso del poder judicial para presionar al poder legislativo

50. Las elecciones presidenciales de 2021 llevaron al poder a Guillermo LASSO.

Aunque ha sido elegido presidente, su partido sólo tiene 11 escaños de los 137 de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional eligió a Guadalupe LLORI, de otro partido político, como presidenta.

Sin embargo, diversos incidentes llevaron a sus pares a crear una comisión para determinar si la Sra. LLORI respetaba la ley y sus competencias. Este proceso es, por supuesto, muy político.

51. La Sra. LLORI fue apoyada por el presidente LASSO¹¹².

La Sra. LLORI y algunos parlamentarios trataron de impedir el desarrollo normal de la actividad parlamentaria. Interpusieron varios recursos para impedir su destitución y/u obtener

Amnesty International, Équateur. Les autorités doivent surveiller le procès contre le défenseur des droits numériques Ola Bini", 3 mars 2020, <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/03/ecuador-authorities-must-monitor-trial-digital-defender-ola-bini/>

¹¹¹ CNN, "Milитantes correístas asilados en embajada viajan a México", 9 de enero, <https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/09/alerta-militantes-correistas-asilados-en-embajada-viajan-a-mexico/>

¹¹² El Universo, "Lasso anuncia el respaldo a Guadalupe Llori para evitar su destitución", 29 de mayo 2022, <https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/143516-lasso-anuncia-el-respaldo-a-guadalupe-llori-para-evitar-su-destitucion>

medidas cautelares para interrumpir el proceso de evaluación decidido por el pleno de la Asamblea Nacional¹¹³.

La fiscal general ha abierto una investigación contra 93 diputados¹¹⁴.

El 31 de mayo de 2022, finalmente, la Asamblea Nacional de Ecuador destituyó a su presidenta, Guadalupe Llori, por incumplir sus funciones y por permitir el desprestigio de la cámara¹¹⁵.

52. Este episodio evidencia otro intento de utilizar la justicia como arma política.

III. Violación del derecho a formar un partido político de la fuerza política más importante del país y lawfare dentro del sistema electoral

53. Uno de los elementos fundadores de toda democracia es la posibilidad de que los ciudadanos se organicen en partidos políticos, para que puedan aportar sus sensibilidades económicas, sociales e ideológicas a la gobernanza del país.

54. Rafael CORREA DELGADO fue uno de los fundadores históricos del partido político Alianza País, partido político fundado en abril de 2006 a partir de la alianza de varios partidos de izquierda.

Rafael CORREA DELGADO se presentó a las elecciones, con Lenín MORENO como candidato a la vicepresidencia, en 2006. Tras ganar esa elección, el Sr. CORREA DELGADO fue reelegido consecutivamente.

En 2017, el Sr. CORREA DELGADO anunció su decisión de no presentarse a la reelección tras sus dos mandatos y propuso a su antiguo vicepresidente, Lenín MORENO, para sucederle.

Sin embargo, el giro liberal que dió Lenín Moreno tras su victoria en 2017, provocó una ruptura dentro del partido Alianza País. Por ello, los partidarios del movimiento de la Revolución Ciudadana intentaron crear un nuevo partido político. Esto se impidió.

¹¹³ El Comercio, "Juzgado acepta medidas cautelares y frena proceso de destitución de Llori", 27 de mayo 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/juzgado-medida-cautelar-frena-destitucion-guadalupe-llori.html>
Primicias, "Asamblea: Nuevas medidas cautelares buscan salvar a Llori de la remoción", 24 de mayo 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/nuevas-medidas-cautelares-salvar-llori-remocion/>

¹¹⁴ El Comercio, "Fiscal Salazar defiende investigación contra 93 asambleístas denunciados por Llori", 7 de mayo 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fiscal-salazar-investigacion-asambleistas-denuncia-llori.html>

¹¹⁵ DW, "Asamblea Nacional de Ecuador destituye a Guadalupe Llori", 1 de junio 2022, <https://www.dw.com/es/asamblea-nacional-de-ecuador-destituye-a-guadalupe-llori/a-61992607>

55. Los poderes públicos, y más concretamente el Consejo Nacional Electoral (en adelante "CNE"), remodelado tras la llegada del CPCCS-T, denegaron sistemática y arbitrariamente todo intento de los "correístas" de formar un nuevo movimiento político:

- El 29 de diciembre de 2017, los correístas presentaron las condiciones formales para solicitar el permiso para iniciar el proceso de creación del partido "Revolución Ciudadana". El 23 de enero de 2018, el CNE negó la autorización para iniciar el proceso de creación de este partido, argumentando que el nombre "Revolución Ciudadana" era el lema que identificaba al Movimiento *Alianza País*. El CNE también justificó su negativa argumentando que el 13 de diciembre de 2017 se había hecho una solicitud por parte de una persona cercana al entonces Secretario Ejecutivo de Alianza País para reservar el nombre "Partido de la Revolución Ciudadana"¹¹⁶.

- El 6 de marzo de 2018, en un nuevo intento por lograr el reconocimiento legal de su partido, los correístas presentaron una solicitud ante el CNE para iniciar el proceso de legalización del partido "Movimiento de la Revolución Alfarista: Hacia un Nuevo Polo Ciudadano". El 5 de abril de 2018, el CNE volvió a rechazar la solicitud, esta vez argumentando que no se podía otorgar el nombre de "Alfarista" a una organización que se reivindica de izquierda y socialista, ya que Alfaro, según el CNE, sería una persona vinculada al liberalismo político. Los recursos contra esta denegación han quedado todos sin efecto¹¹⁷.

56. Ante estos reiterados bloqueos, los activistas de la revolución ciudadana se pusieron en contacto con un movimiento político que ya estaba acreditado, el Movimiento Acuerdo Nacional (en adelante MANA).

El señor Juan Pablo Arévalo fue, en este contexto, designado como responsable legal de la recolección de firmas de ciudadanos en nombre de este movimiento para poder presentarse en las elecciones locales de 2019. En pocos meses se recogieron 462.000 firmas. Estas firmas debían ser presentadas a la CNE. La antigua representante de MANA, que había dimitido el 4 de mayo de 2017, anunció entonces repentinamente la expulsión del movimiento del Sr. Rafael CORREA DELGADO y de otras nueve personas. El CNE se negó a reconocer la capacidad de Juan Pablo Arévalo para actuar en nombre de MANA.

Así se evitó la alianza con el partido MANA¹¹⁸.

¹¹⁶ Colectivo de Abogados por la Democracia, "Judicialización de la política y bloqueo político: El caso del "proceso" de la Revolución Ciudadana en Ecuador", pp. 14-15. <http://economiaenbicicleta.com/wp-content/uploads/2018/09/Judicializaci%2n-de-la-Pol%Altica.pdf>

¹¹⁷ Colectivo de Abogados por la Democracia, "Judicialización de la política y bloqueo político: El caso del "proceso" de la Revolución Ciudadana en Ecuador", pp. 15-17. <http://economiaenbicicleta.com/wp-content/uploads/2018/09/Judicializaci%2n-de-la-Pol%Altica.pdf>

¹¹⁸ NotiMundo, "Correístas suspenden entrega de firmas al CNE por controversia con facción de MANA", 9 de agosto 2018, <https://notimundo.com.ec/correistas-suspenden-entrega-de-firmas-al-cne-por-controversia-con-faccion-de-mana/>

Los partidarios de la revolución ciudadana consiguieron finalmente, *in extremis*, presentarse a las elecciones locales del 24 de marzo de 2019, a través del movimiento político 'Compromiso Social Listas 5' (FCS). A pesar de la evidente falta de comunicación a la población sobre esta participación, la Lista 5 ganó las elecciones en dos provincias muy pobladas de Ecuador, Pichincha y Manabí, y quedó segunda en la provincia más poblada del país, Guayas¹¹⁹.

57. Por lo tanto, el FCS se posicionó favorablemente para las elecciones presidenciales y parlamentarias de febrero de 2021.

De repente, a pesar de sus participaciones anteriores, fue objeto de ataque por parte de la Oficina de la Contraloría General del Estado. En agosto de 2019, la Contraloría emitió un informe en el que señalaba que algunos partidos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, no cumplían el requisito legal para participar en las elecciones. El pleno del Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE) desestimó dicho informe¹²⁰. A pesar de esta decisión, el 19 de junio de 2020, la Contraloría General del Estado emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba, una vez más, que el FCS no habría cumplido los requisitos legales para poder presentarse a las elecciones. Los miembros del CNE fueron sometidos a una presión extrema, amenazados con multas y destituciones¹²¹. Nadie se atrevió a oponerse a la solicitud de supresión de los cuatro partidos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social¹²². El partido no pudo presentarse a las elecciones generales de 2021¹²³.

Durante este proceso, el Secretario General del Gabinete del Presidente de Ecuador, Juan Sebastián ROLDÁN, también hizo esta amenaza apenas velada:

*"Buen riesgo es ser candidato correísta porque la justicia va a poner los ojos sobre los que todavía no están fugados o no están condenados. Ya quedan pocos"*¹²⁴.

El Comercio, "El CNE deja sin posibilidades de participación a la facción correísta del movimiento MANA", 23 de agosto 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-mana-participacion-faccion-correista.html>

¹¹⁹ Telesur, "CNE de Ecuador publica resultados de elecciones seccionales", 26 de marzo de 2019, <https://www.telesurtv.net/news/Correismo-se-consolida-como-primera-fuerza-electoral-en-Ecuador-20190326-0007.html>

¹²⁰ El Comercio, "Fuerza Compromiso Social, movimiento del correísmo, podrá presentar candidatos para las elecciones del 2021", 3 de enero de 2020, disponible en <https://www.elcomercio.com/actualidad/fuerza-compromiso-social-correismo-elecciones.html>

¹²¹ Expresso.ec, "El contralor Pablo Celi se enfrenta a la justicia electoral", 12 de julio de 2020, disponible en <https://www.expresso.ec/actualidad/contralor-pablo-celi-enfrenta-justicia-electoral-15585.html>

¹²² El Comercio, "Suspensión de cuatro grupos será la defensa de consejeros del CNE", 21 de julio de 2020, disponible en <https://www.elcomercio.com/actualidad/suspension-consejeros-cne-partidos-politicos.html>

¹²³ El Universo.com, "TCE niega recurso a Fuerza Compromiso Social a resultados de la segunda vuelta", 5 de mayo de 2021, en línea: <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/tce-niega-recurso-a-fuerza-compromiso-social-a-resultados-de-la-segunda-vuelta-nota/>

¹²⁴ Tweet, "Roldán habla de apresar a los candidatos del correísmo", 8 de agosto de 2020

Véase "Juan Sebastián Roldán amenaza a "candidatos del correísmo" y dice que la justicia pondrá "los ojos sobre ellos", 7 de agosto de 2020, disponible en <http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/juan-sebastian-roldan-amenaza-a-candidatos-del-correismo-y-dice-que-la-justicia-pondra-los-ojos-sobre-ellos/>

En relación con estas elecciones presidenciales y parlamentarias, el 5 de octubre de 2020, el Parlamento Europeo realiza una pregunta dirigida al vicepresidente de la Comisión y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre el tema, subrayando que "*una serie de partidos políticos, incluido el partido respaldado por el expresidente Rafael Correa, ha sido impedido de presentarse, [y] se han quejado de que el gobierno ha puesto obstáculos legales en el camino del proceso electoral para impedir unas elecciones justas*"¹²⁵.

58. Ante los ataques y el escenario de la posible eliminación del FCS, el 8 de julio de 2020, la Revolución Ciudadana decidió hacer una alianza con el Movimiento Centro Democrático Listas 1, que se denominó UNES, Unión por la Esperanza.

La lista de UNES pudo finalmente presentarse a las elecciones, sin poder incluir a ninguno de sus dirigentes históricos, debido al lawfare que sufren en su contra y les impide la participación.

Durante la campaña electoral de 2021, el lawfare siguió en marcha, con las autoridades afirmando que los partidarios de la "Revolución Ciudadana" eran delincuentes vinculados al cártel de la droga. El expresidente Lenín Moreno acusó a Andrés Arauz y a Rafael Correa de estar vinculados al narcotráfico colombiano¹²⁶. Las autoridades electorales y judiciales secundaron las denuncias del presidente saliente¹²⁷.

Sin embargo, el dúo ARAUZ-RABASCALL ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 32% de los votos¹²⁸.

Durante la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la fiscal general, que fue designada políticamente para su cargo (ver arriba), invitó oficialmente a la Oficina de la Fiscalía colombiana a una cooperación judicial de gran resonancia por la supuesta financiación de la campaña del candidato correísta, Andrés ARAUZ, por parte del ELN¹²⁹. La

¹²⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005442_EN.html (traducción libre).

¹²⁶ Europa press.es, "Moreno pedirá información a Colombia sobre presunta financiación de la campana de Arauz por parte del ELN", 2 de febrero de 2021, <https://www.europapress.es/internacional/noticia-moreno-pedira-informacion-colombia-presunta-financiacion-campana-arauz-parte-eln-20210202120111.html>

¹²⁷ El Universo, "Tribunal Contencioso desecha denuncia de campana contra Andrés Arauz por pruebas de COVID-19; Fiscalía pide información a Colombia sobre supuestos aportes del ELN", 12 de febrero de 2021, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/tribunal-contencioso-desecha-denuncia-de-campana-contra-andres-arauz-fiscalia-pide-informacion-a-colombia-sobre-supuestos-aportes-del-eln-nota/>

¹²⁸ Artículo de la BBC, "Ecuador election goes into run-off with Arauz in the lead", 8 de febrero de 2021, disponible en <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55934856>

¹²⁹ Primicias, "Fiscalía pide asistencia a Colombia sobre supuesto aporte del ELN a Andrés Arauz", 9 de febrero de 2021, disponible en <https://www.primicias.ec/noticias/politica/fiscalia-asistencia-colombia-aportes-eln-andres-arauz/>

La Hora, "Fiscal de Colombia viaja a Ecuador por posible financiación del ELN a candidato correísta", 12 de febrero de 2021, disponible en <https://lahora.com.ec/noticia/1102340580/fiscal-de-colombia-viaja-a-ecuador-por-posible-financiamiento-del-eln-a-candidato-correista> - (traducción libre)

fiscal general incluso emitió un anuncio de televisión con el fiscal de Colombia¹³⁰, a pesar de que la cooperación sólo se estaba llevando a cabo en el marco de una investigación preliminar, que se abandonó después de las elecciones.

Ante esta "intervención" del poder judicial en la campaña electoral, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por el acoso judicial al candidato progresista, Andrés ARAUZ¹³¹. El 2 de marzo de 2021, el secretario general de la ONU, Antonio GUTERRES, hizo un llamamiento a "*todas las partes interesadas para que actúen de forma responsable y de acuerdo con los marcos institucionales y jurídicos en la fase previa a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 11 de abril*"¹³².

"Agence France Presse" (AFP) también identificó el uso de "*fake news*", cuyo objetivo es desacreditar a Andrés ARAUZ y hacer temer por el futuro económico del país¹³³.

59. Las reiteradas intervenciones de las autoridades utilizando arbitrariamente su poder para impedir la participación de candidatos, la creación de un partido, la consolidación de una alianza electoral, para amedrentar a los candidatos o para empañar continuamente la reputación de los candidatos de la UNES, constituye una grave vulneración de los derechos políticos de las víctimas directas de estos ataques, pero también de la democracia ecuatoriana en general.

Semana, "El viaje del fiscal Barbosa a Ecuador y los informes que entregó sobre el candidato de Rafael Correa", 11 de abril de 202, disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-viaje-del-fiscal-barbosa-a-ecuador-y-los-informes-que-entrego-sobre-el-candidato-de-rafael-correa/202124/>

¹³⁰ "#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @FiscaliaCol se reúnen para la entrega de información encontrada en los dispositivos de alias "Uriel", del ELN, en el marco de la cooperación penal entre ambos países." - Tweet de la Fiscalía de Ecuador, 12 de febrero de 2021, disponible en <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1360359986992467972>

"Agradezco a @FiscaliaCol y a su Fiscal General por haber aceptado la petición de información que hoy nos ha entregado. Es un ejercicio muy importante en la lucha contra la criminalidad, estamos juntos y así la vamos a combatir": @DianaSalazarM2" - Tweet de la Fiscalía de Ecuador; 13 de febrero de 2021, disponible en <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1360363112688402434>

¹³¹ Confirmado.net, "Diego Garcia-Sayan-Relator Especial de la ONU: Ecuador los jueces y fiscales no deben interferir, de manera directa e indirecta, en las tareas de órganos y procesos electorales", 4 de marzo de 2021, <https://confirmado.net/2021/03/04/diego-garcia-sayan-relator-especial-de-la-onu-ecuador-los-jueces-y-fiscales-no-deben-interferir-de-manera-directa-e-indirecta-en-las-tareas-de-organos-y-procesos-electorales/>

¹³² ONU, « Secretary-General Welcomes Peaceful Elections in Ecuador », 2 de marzo de 2021, SG/SM/20611, disponible en <https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20611.doc.htm>

¹³³ Por ejemplo:

AFP, "No hay registro de que Maduro haya enviado "un abrazo revolucionario" a Andrés Arauz", 11 de abril de 2021, disponible en <https://factual.afp.com/no-hay-registro-de-que-maduro-haya-enviado-un-abrazo-revolucionario-andres-arauz>

AFP, "La fotografía del candidato ecuatoriano Andrés Arauz con Nicolás Maduro es un montaje", 11 de diciembre de 2020, disponible en <https://factual.afp.com/la-fotografia-del-candidato-ecuadoriano-andres-arauz-con-nicolas-maduro-es-un-montaje>

AFP, "Andrés Arauz no se refirió a la caravana indígena de Ecuador en eventos con migrantes en EEUU", 23 de febrero de 2021, disponible en <https://factual.afp.com/andres-arauz-no-se-refirio-la-caravana-indigena-de-ecuador-en-eventos-con-migrantes-en-eeuu>

IV. Violenta represión de la protesta social en octubre de 2019

60. Habiendo elegido a un presidente "de izquierda", los ecuatorianos quedaron masivamente descontentos con las políticas liberales aplicadas bajo el gobierno de MORENO.

A principios de octubre de 2019, el gobierno ecuatoriano aprobó unos decretos que eliminan los subsidios públicos a los combustibles. El 3 de octubre de 2019, los ciudadanos ecuatorianos, sostenidos por el movimiento indígena, se levantaron contra estas medidas. Algunos analistas señalan las causas de la movilización ciudadana:

*"Podemos ver detrás de estas manifestaciones el hartazgo de la población, que ha sido sometida durante dos años y medio a políticas neoliberales de ajuste estructural muy agresivas: suspensión de ciertos derechos, de prestaciones sociales, etc. Desde que Moreno llegó al poder en 2017, se ha producido un giro hacia la derecha neoliberal, que busca reducir el papel del Estado y la carga impositiva. Ha habido una enorme amnistía fiscal para los más ricos de la sociedad. Al mismo tiempo, el país sufrió un déficit fiscal que obligó al gobierno a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional. El FMI concedió un préstamo de 4.200 millones de dólares, pero exigió una reducción de los gastos del Estado y de la administración pública, lo que provocó numerosos despidos. Esto contrasta con el período anterior del presidente Correa, que fue un período de progreso social, reducción de la desigualdad y crecimiento económico. El gobierno de Correa había duplicado el PIB en diez años, y lo hizo sin hacer reformas neoliberales"*¹³⁴.

*"Un gran movimiento social está sacudiendo Ecuador, marcado por los bloqueos de carreteras y pozos petrolíferos en la Amazonia, las manifestaciones y las huelgas. Para la investigadora Marie-Esther Lacuisse, el presidente Moreno no ha cumplido sus promesas ecológicas y sociales y está pagando el precio por ello"*¹³⁵.

61. La reacción del gobierno de Lenín Moreno fue declarar el estado de emergencia.

Estos decretos presidenciales, denunciados como inconstitucionales¹³⁶, permitían criminalizar y detener a quienes participaban en las manifestaciones.

Durante el mes de octubre, el gobierno criminalizó sistemáticamente a los manifestantes con mayor peso político. En total, al menos 1192 personas fueron detenidas arbitrariamente entre el

¹³⁴ IRIS, « Manifestations en Equateur: symbole d'un revirement annoncé », 7 de octubre de 2019 <https://www.iris-france.org/140720-manifestations-en-equateur-symbole-dun-revirement-annonce%E2%80%89>

¹³⁵ Reporterre, « Equateur : un pays révolté par le retour du FMI dans la politique », 11 de octubre de 2019, <https://reporterre.net/Equateur-un-pays-revolte-par-le-retour-du-FMI-dans-la-politique>

¹³⁶ NORTESUR, "La dictadura en Ecuador: la inconstitucionalidad de los estados de excepción decretados por Lenín Moreno", p.5, 13 de octubre de 2019, <https://nortesur.media/2019/10/13/la-inconstitucionalidad-de-los-estados-de-excepcion-decretados-por-lenin-moreno/>

3 y el 13 de octubre de 2019. Se realizaron requisas a periodistas, y miembros del partido político Compromiso Social por la Revolución Ciudadana (FCS).

El 9 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. También señaló las denuncias de presiones ejercidas para destruir las pruebas de la violencia policial¹³⁷. El 17 de octubre de 2019, la CIDH anunció una investigación in situ¹³⁸.

El 11 de octubre de 2019, el Estado ecuatoriano también fue cuestionado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y por la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Esta interpelación se produce tras la recepción de denuncias relativas a "*serias violaciones a los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en Ecuador, en el contexto de las manifestaciones que han tenido lugar desde el 3 de octubre de 2019 a partir de la declaratoria de estado de excepción, incluyendo de uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de edad, y personas con discapacidad), miembros de pueblos indígenas y periodistas, lo cual ha causado al menos 929 detenidos y cientos de heridos, y al menos 5 personas que habrían perdido la vida mientras participaban en las protestas. Hemos recibido también información sobre presuntas detenciones masivas, y hechos que podrían constituir tortura, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en centros de detención*"¹³⁹.

62. El 13 de octubre de 2019, el Gobierno llegó a un acuerdo con el movimiento indígena¹⁴⁰ que inició las movilizaciones.

La derogación de uno de los decretos polémicos y el levantamiento de las medidas de austeridad en los territorios indígenas aplacaron a los ciudadanos y pusieron fin a la insurrección.

¹³⁷ CIDH, "IACHR and its Special Rapporteurship Concerned about Excessive Use of Police Force against Demonstrators and Attacks on Journalists during Protests in Ecuador", 9 de octubre de 2019, comunicado de prensa 252, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/252.asp

¹³⁸ CIDH, "IACHR Announces Observation Mission to Ecuador in Response to Protests", 17 de octubre de 2019, comunicado de prensa 262, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/262.asp

¹³⁹ Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; de la Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de pacífica y de asociación; del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; y de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Interpelación del 11 de octubre de 2019, UA ECU 16/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24900>

¹⁴⁰ Le Monde, "Equateur : gouvernement et indigènes trouvent un accord pour sortir de la crise", 14 de octubre de 2019

63. Según las organizaciones de defensa de derechos humanos, la represión policial dejó al menos 8 muertos y 1400 heridos. Entre los detenidos, 32 personas fueron procesadas por "rebelión"¹⁴¹.

En 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su "preocupación por la forma en que se aplicó el estado de emergencia proclamado el 3 de octubre de 2019 tras las protestas contra la adopción de medidas de austeridad, en particular en lo que respecta a la suspensión de la libertad de asociación". También le preocupa la violencia relacionada con las protestas sociales contra las medidas de austeridad, que en algunos casos estuvo acompañada de actos de vandalismo, y el uso de la fuerza, a veces desproporcionado, contra los manifestantes y los defensores de los derechos humanos, incluso por parte del Ejército (art. 2, párr. 1)"¹⁴².

El 14 de enero de 2020, la CIDH presentó sus observaciones sobre su visita a Ecuador en relación con las protestas sociales que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre de 2019. Señaló la violación de múltiples derechos fundamentales en el contexto de estas protestas:

" A. Agresiones y ataques a la prensa durante protestas

La escalada de la violencia derivó en la obstaculización del trabajo de la prensa, debido a una serie de ataques contra periodistas y medios de comunicación, tanto por parte de fuerzas de seguridad pública, como de manifestantes (...)

(...) Denunciaron, asimismo, cortes permanentes en el acceso a internet por parte de las plataformas telefónicas de las empresas Claro y Movistar. (...)

B. Violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación

(...) A través de un pronunciamiento público, diferentes medios de comunicación alternativos que realizaron la cobertura de las manifestaciones en Ecuador denunciaron al gobierno por censura tecnológica y digital e indicaron que habrían sido intervenidos y vulnerados en sus derechos. (...)

C. Afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales

Durante su visita de trabajo, la Comisión Interamericana recibió información documental, material audiovisual y cientos de testimonios relacionados con las afectaciones a la integridad personal en el marco de las protestas sociales en Ecuador.

(...)

¹⁴¹ ANRed, "Ecuador: Lenin Moreno persigue a comunicadores y opositores políticos", 18 de octubre de 2019, <https://www.anred.org/2019/10/18/ecuador-lenin-moreno-persigue-a-comunicadores-y-opositores-politicos/>

¹⁴² CESCR de la ONU, "Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l'Équateur", 14 de noviembre de 2019, E/C.12/EQU/CO/4, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fEQU%2fCO%2f4&Lang=fr

Dichas afectaciones habrían sido ocasionadas por la actuación violenta de los agentes encargados del orden mediante la “policía montada”, patadas, golpes, agresiones verbales e, inclusive, mediante disparos a corta distancia de municiones de perdigón y/o bombas lacrimógenas directamente hacia las personas manifestantes o contra quienes se encontraban en las zonas aledañas. Como consecuencia, decenas de personas habrían resultado heridas, –algunas de ellas, de gravedad– debido a fracturas provocadas por el impacto de proyectiles o por perdigones alojados en diversas partes del cuerpo. (...)

Sumado a lo anterior, la CIDH recibió al menos diecinueve testimonios de personas que habrían perdido la visión totalmente, o parcialmente, mediante la pérdida de algún ojo, debido al impacto de bombas lacrimógenas o perdigones utilizados para la dispersión de las protestas, tanto por parte de agentes de la policía como por militares (...)

La información al alcance de la CIDH revela que las agresiones y disparos a quemarropa por agentes policiales y fuerzas militares también habría sido dirigidos contra quienes prestaban asistencia médica a manifestantes. (...)

En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana concluye que la reacción violenta y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas. Como consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana.

D. Afectaciones a la vida en el marco de las protestas sociales

(...) En el marco de su visita de trabajo a Ecuador, la CIDH recibió información de la Defensoría del Pueblo, entidades de la sociedad civil y testimonios de los familiares de las víctimas sobre once personas que habrían perdido la vida en el contexto de las protestas sociales en el país. (...)

Especialmente, la CIDH advierte que la precipitación de dos personas del puente de San Roque habría ocurrido en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes del Estado en un contexto que permitiría la utilización de medidas alternativas de resolución de conflicto (...)

E. Detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes en el contexto de las protestas sociales

(...) en el periodo comprendido desde el inicio de las protestas sociales el 2 de octubre de 2019 hasta el 13 de octubre, un total de 1228 personas fueron detenidas (...)

la CIDH recibió diversa información de numerosas detenciones en las que se habría vulnerado el debido proceso. (...)

La CIDH expresa su alarma por la información recibida que señala tortura y otros tratos cueles, inhumanos o degradantes en el contexto de las detenciones. Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, así como la recibida mediante testimonios, numerosas personas detenidas fueron fuertemente agredidas verbal y físicamente; habrían sido amenazadas, golpeadas con puños, patadas y porras metálicas, rociadas con gas pimienta en el rostro y obligadas a realizar ejercicios físicos. (...)

En materia de criminalización, la CIDH recibió información sobre la utilización del sistema de justicia penal en contra de manifestantes y líderes sociales y de oposición. (...)

Finalmente, la CIDH observa que en varias ocasiones estos procesos de criminalización vienen precedidos y acompañados de campañas de estigmatización. (...)

El 6 de diciembre la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Paola Verenice Pabón Caranqui, Prefecta de Pichincha; Virgilio Hernández, Secretario Ejecutivo del Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; y Christian Fabián González Narváez. La CIDH, al decidir otorgar las medidas, señaló que entre los indicios que pueden tomarse en cuenta al momento de valorar la situación de riesgo de los propuestos beneficiarios, tras supuestas amenazas y actos de hostigamientos presuntamente relacionados con sus labores como líderes de oposición política, consideró las declaraciones supuestamente estigmatizantes de altas autoridades en las que directamente se les señala como responsables de los altercados"¹⁴³.

Estas conclusiones confirman que las autoridades ecuatorianas han violado gravemente los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos, incluidos los opositores políticos, al detenerlos arbitrariamente, maltratándolos y violando su derecho a un juicio justo.

En un informe realizado a un año de la dura represión de la protesta social de octubre de 2019, "Alianza por los Derechos Humanos Ecuador" -que agrupa a 18 organizaciones- señaló:

- La negación de los hechos por parte de las autoridades;
- La falta de medidas concretas para abordar los retos sociales señalados por la población;
- La violación del derecho constitucional a la protesta;
- El enfoque sobre ciertos desbordes como táctica de evasión de los medios de comunicación;
- Las persecuciones penales asimétricas que conducen a la impunidad de las fuerzas del orden y a la falta de reparación;

¹⁴³ CIDH, "IACHR Issues Observations Following Visit to Ecuador", 14 de enero de 2020, comunicado de prensa 008, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/008.asp

- El abuso del uso de la figura del estado de excepción por parte del Ejecutivo¹⁴⁴.

64. Esta gestión de una protesta social a través de medidas represivas que atentan contra los derechos y libertades fundamentales constituyen una grave violación del Estado de Derecho y de los valores que son la base de cualquier Estado democrático.

El uso abusivo de la figura del estado de excepción ante una crisis económica y social, la represión violenta de los manifestantes, la impunidad de las fuerzas del orden, la criminalización de los líderes de las protestas, etc. se repitieron en junio de 2022 (véase más adelante).

V. Violación masiva del derecho a la vida y al respeto de la integridad física de las personas privadas de libertad

65. El sistema penitenciario ecuatoriano, atraviesa grandes dificultades.

En 2019, cuando el Ministerio de Justicia fue eliminado por el Gobierno, el nuevo Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) recibió un presupuesto de 98 millones de dólares. En 2020, se redujo en un 43%: sólo se asignaron unos 55 millones de dólares. Para 2021, el presupuesto se incrementó en 8 millones de dólares, alcanzando los 63 millones de dólares¹⁴⁵.

Se calcula que en algunos centros de rehabilitación social sólo hay un guía por cada 20 o 30 personas¹⁴⁶. Tampoco hay personal en otras áreas que son indispensables para una verdadera rehabilitación social: educadores, médicos, psiquiatras, psicólogos.

La falta de gestión y financiación del sistema penitenciario ha provocado un hacinamiento "monstruoso". La pandemia ha aumentado este problema. "*Para reducir el número de presos en medio del brote de coronavirus, el gobierno conmutó las penas de los condenados por infracciones menores, reduciendo el hacinamiento del 42% al 30%*"¹⁴⁷. Por desgracia, esto no fue suficiente para disminuir las tensiones.

¹⁴⁴ Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, "Verdad, Justicia y Reparación: A un año de la protestas sociales Octubre 2019 - Informe actualizado, Ecuador", pp.94-95, 15 de octubre 2020, https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-10/informe_actualizado_paroec.pdf

¹⁴⁵ "Prison en Équateur", https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_en_%C3%89quateur#cite_note-5

¹⁴⁶ Primicias, "Cárceles tienen déficit de casi 70% de guías penitenciarios", 3 de agosto 2020, <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/carceles-tienen-deficit-setenta-por-ciento-guias-penitenciarios/>

¹⁴⁷ Dayly Sabah, "At least 75 killed in prison riots in Ecuador", 23 de febrero de 2021, disponible en <https://www.dailysabah.com/world/americas/at-least-75-killed-in-prison-riots-in-ecuador> (traducción libre).

66. En febrero de 2021, se produjeron disturbios extremadamente violentos en varias prisiones ecuatorianas. Unas 80 personas murieron.

La CIDH recordó *"el deber jurídico ineludible que tiene el Estado de Ecuador como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, de realizar acciones concretas para garantizar su vida e integridad personal. Como parte de esta obligación, el Estado debe adoptar aquellas medidas orientadas a prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en los centros de privación de libertad, tales como desarmar a las personas detenidas, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros artículos prohibidos, investigar y sancionar los actos de violencia en instalaciones penitenciarias, y prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en las cárceles"*¹⁴⁸. La CIDH también indicó que a través de *"una comunicación del 23 de febrero dirigida al presidente de Ecuador, la "Defensoría del Pueblo" indicó que la violencia intracarcelaria se ha profundizado desde el año 2018, con un aumento progresivo de muertes violentas"*¹⁴⁹.

67. Después de este terrible episodio, el gobierno no tomó las medidas adecuadas y las masacres dentro de las cárceles se repitieron.

En un informe sobre las personas privadas de libertad en Ecuador, publicado en marzo de 2022, la CIDH afirmó:

«1. Ecuador atraviesa por una grave crisis penitenciaria de naturaleza estructural, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años atrás, así como a la ausencia de una política criminal integral. (...) En este sentido, se observa la utilización de una política que privilegia el encarcelamiento para resolver los problemas de seguridad ciudadana. Lo anterior, a su vez, ha resultado en un incremento exponencial del encarcelamiento durante los últimos años, excesivo uso de la prisión preventiva, obstáculos para sustituir medidas alternativas a la privación de libertad, e imposibilidad de garantizar la reinserción social de las personas detenidas.

*2. En este escenario, **durante 2021 un total de 316 personas privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado**, y otros cientos resultaron heridas, en una sucesión de ataques violentos ejecutados de manera planificada por grupos organizados conformados por las mismas personas detenidas" (p.8);*

“Al respecto, la Comisión ha señalado que los Estados deben establecer estrategias para dismantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarios

¹⁴⁸ CIDH, "CIDH condena la muerte de 79 personas en cárceles de Ecuador", 26 de febrero de 2021, disponible en <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/044.asp>

¹⁴⁹ CIDH, "CIDH condena la muerte de 79 personas en cárceles de Ecuador", 26 de febrero de 2021, disponible en <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/044.asp>

que controlan diversas actividades delictivas, tales como el tráfico de drogas, alcohol y el cobro de cuotas extorsivas a otras personas detenidas

(...)

Estos graves hechos de violencia evidencian un sistema penitenciario colapsado. Existe consenso entre los diversos actores entrevistados en que los hechos ocurridos en 2021 no son hechos aislados y que el país enfrenta una “crisis del sistema penitenciario”, producto de una situación estructural que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado” (p.86-87);

“la CIDH emite las siguientes recomendaciones al Estado de Ecuador:

(...) 1.1. Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia, así como de los funcionarios que cumplen tareas en los centros de detención, debe ser una prioridad del Estado. En este escenario, se recomienda que el Estado priorice la realización urgente de acciones eficaces que se orienten a prevenir y controlar todo tipo de violencia las cárceles, así como a restablecer el control de las cárceles” (p.88)¹⁵⁰.

68. A pesar de la atención internacional sostenida¹⁵¹, el nuevo gobierno no ha adoptado las medidas estructurales inmediatas necesarias.

El 9 de mayo de 2022 se produjo otra masacre que cobró 43 nuevas víctimas y otras tantas familias en duelo¹⁵².

El 10 de mayo de 2022, Amnistía Internacional informó:

"Desde diciembre de 2020, al menos 390 personas han sido asesinadas en las cárceles de Ecuador. Tras la matanza del 9 de mayo en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la que murieron al menos 44 presos y otros 10 resultaron heridos, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que:

"Estar privado de libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte. Los repetidos errores de las autoridades ecuatorianas en la gestión de la crisis de las cárceles han provocado la muerte de cientos de personas. Las autoridades deben abordar, de una vez por todas, las causas estructurales de este problema, como el

¹⁵⁰ OEA-CIDH, « Personas privadas de libertad en Ecuador », Informe Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de febrero de 2022, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf

¹⁵¹ Véase también, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Interpelación de 27 de octubre de 2021, AL ECU 3/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26685>

¹⁵² El País, "Al menos 43 presos mueren en un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador", 9 de mayo de 2022, <https://elpais.com/internacional/2022-05-09/al-menos-20-presos-mueren-en-un-nuevo-enfrentamiento-en-una-carcel-de-ecuador.html>

hacinamiento, la corrupción y la impunidad, mediante una política penitenciaria integral centrada en los derechos humanos. Todas las muertes y violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad deben ser investigadas de forma exhaustiva, independiente e imparcial.

"En respuesta a esta última masacre, el presidente Guillermo Lasso anunció el traslado de "seis líderes de bandas criminales" a otras prisiones. Sin embargo, estas medidas superficiales son insuficientes para cumplir con la obligación principal de las autoridades en este contexto: proteger la vida y la seguridad de miles de personas que están privadas de libertad y que actualmente corren peligro"¹⁵³.

A pesar del estado de excepción declarado por el presidente Lasso en el sistema penitenciario desde septiembre de 2021, el 19 de julio de 2022 se volvió a denunciar la masacre de 13 reclusos¹⁵⁴, con lo que el número de víctimas desde 2020 supera las 400. Algunos detenidos fueron desmembrados y decapitados.

69. Las personas privadas de libertad son una categoría vulnerable de personas que están totalmente bajo el control del Estado.

La falta de garantía del respeto a los derechos fundamentales que son el derecho a la vida y a la protección de la integridad física de las personas, debido a la ausencia de medidas gubernamentales adecuadas desde hace años, atestigua la grave violación por parte de Ecuador de los derechos que constituyen el núcleo de cualquier Estado democrático.

VI. Empobrecimiento, aumento de la violencia, estado de emergencia, represión y criminalización del debate democrático

70. En 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU planteó algunas preocupaciones con respecto al Ecuador, como *"el impacto de las medidas de austeridad del Plan de Prosperidad 2018-2021 y del acuerdo concluido con el Fondo Monetario Internacional en el marco del Servicio Ampliado del Fondo sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales"*¹⁵⁵.

La falta de una respuesta social adaptada a las necesidades de la población ha provocado un aumento de la tasa de pobreza. Los datos del Banco Mundial muestran que, después de haber

¹⁵³ AI, "Ecuador: In light of new prison massacre, authorities must address structural causes", 10 de mayo de 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/ecuador-prison-massacre-authorities-must-address-structural-causes/> (Traducción libre).

¹⁵⁴ 20Minutos.es, "Al menos 13 muertos por una nueva masacre entre reclusos en una cárcel de Ecuador", 19 de julio 2022, <https://www.20minutos.es/noticia/5031726/0/al-menos-13-muertos-por-una-nueva-reyerta-en-una-carcel-de-ecuador/>

¹⁵⁵ UN CESCR, "Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador", 14 de noviembre de 2019, E/C.12/EQU/CO/4, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/324/90/PDF/G1932490.pdf?OpenElement>

disminuido de 2008 (35,1%) a 2017 (21,5%), la relación entre la población pobre y el umbral de pobreza nacional ha aumentado constantemente hasta alcanzar el 33% en 2020¹⁵⁶. El llamamiento del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento ilustra la falta de contemplación de las necesidades básicas de los más necesitados:

«Si bien no se pretende prejuzgar la precisión de las informaciones anteriores, resulta preocupante la posibilidad de que vuelvan a efectuarse cortes de agua por falta de pago a familias en situación de vulnerabilidad y pobreza en el Ecuador, tras haber expirado la Ley de Apoyo Humanitario, en cuyo caso se quebrarían sus derechos humanos. Esta preocupación se acentúa en el marco vigente de pandemia por la Covid19, dada la necesidad que tienen las personas afectadas de acceder al agua y al saneamiento a fin de cumplir con las recomendaciones sanitarias. (...) los cortes de agua por falta de pago a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza constituyen violaciones de derechos humanos que todos los Estados deben evitar a toda costa en cumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes en materia de derechos humanos»¹⁵⁷.

71. Las condiciones de vida más difíciles no son ajenas al aumento de la inseguridad y la violencia.

Así, "En paralelo a la crisis carcelaria, Ecuador lidia desde el año pasado con una ola de violencia que ha disparado las cifras de asesinatos, en especial los cometidos a través de sicarios, y que ha motivado la declaración de recurrentes estados de excepción y de emergencia, aumentar la dotación policial y militar en las calles e imponer toques de queda. El último estado de excepción se decretó hace dos semanas, sin que se hayan frenado las muertes violentas. Contados hasta marzo, van 959 homicidios en Ecuador. El año pasado, fueron casi 2.500, un 80 % más que en 2020"¹⁵⁸.

En respuesta al aumento de la violencia, Ecuador no ha adoptado las medidas estructurales necesarias, sino que, como en el caso de las protestas de octubre de 2019, ha introducido el estado de excepción, es decir, ha movilizó a las fuerzas armadas para mantener el orden, ha suspendido los derechos de los ciudadanos y ha introducido toques de queda¹⁵⁹.

¹⁵⁶ "Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) – Ecuador", 2007-2020,

<https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?end=2020&locations=EC&start=2007&view=chart>

¹⁵⁷ Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, llamamiento del 24 février 2021, OL ECU 1/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26079>

¹⁵⁸ El País, "Al menos 43 presos mueren en un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador", 9 de mayo de 2022, <https://elpais.com/internacional/2022-05-09/al-menos-43-presos-mueren-en-un-nuevo-enfrentamiento-en-una-carcel-de-ecuador.html>

¹⁵⁹ Le Temps, "L'état d'exception décrété en Equateur en raison des violences liées au narcotrafic", 19 de octubre de 2021, <https://www.letemps.ch/monde/letat-dexception-decrete-equateur-raison-violences-liees-narcotrafic>

72. Los problemas económicos, sociales y medioambientales afectan especialmente a las poblaciones indígenas del Ecuador.

En 2019, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó que "le preocupa la persistencia de discriminación sistémica, de facto y por manifestaciones violentas, hacia algunos grupos de la población, en particular (...) los pueblos indígenas"¹⁶⁰.

El 4 de mayo de 2022, Amnistía Internacional informó:

"Las autoridades y las empresas de Ecuador amenazan a la Amazonía con leyes, políticas y proyectos extractivistas (principalmente petroleros y mineros) que no han obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o que han afectado a sus territorios, su medio ambiente, su salud, su agua o su alimentación, ha declarado hoy Amnistía Internacional, al hacer público el informe Ecuador: la Amazonía en peligro.

"Ecuador debe garantizar el consentimiento de los Pueblos Indígenas a la legislación, políticas y proyectos que puedan poner en riesgo su existencia. El Amazonas es también un ecosistema crítico para superar la crisis climática que amenaza toda la vida en nuestro planeta, y los pueblos indígenas lo han protegido durante siglos"¹⁶¹.

73. En junio de 2022, tras el rechazo de los intentos de debate iniciados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización de pueblos indígenas del país¹⁶² emprendió una acción nacional de huelga, bloqueando también algunas carreteras.

"La Conaie exige reducir los precios de los combustibles, atender el problema del desempleo, regular los precios de los productos del campo y combatir el crimen y la inseguridad, entre

¹⁶⁰ UN CESCR, "Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador", 14 de noviembre de 2019, p.5, E/C.12/EQU/CO/4, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/324/90/PDF/G1932490.pdf?OpenElement>

¹⁶¹ AI, « Ecuador: Authorities and companies threaten the Amazon and its Indigenous Peoples », 4 May 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/ecuador-authorities-companies-threaten-amazon-indigenous-peoples/>

¹⁶² La Conaie ayudó a derrocar a tres presidentes ecuatorianos entre 1997 y 2005. La comunidad indígena representa más de un millón de los 17,7 millones de habitantes del Ecuador.

otros pedidos"¹⁶³. La protesta social, iniciada por la CONAIE, fue apoyada por los sindicatos¹⁶⁴ y otros grupos de la sociedad civil¹⁶⁵ que se unieron a las protestas.

El paro nacional comenzó el 13 de junio de 2022.

74. La reacción inicial de las autoridades fue doble.

Por un lado, las autoridades detuvieron al presidente de la CONAIE, el Sr. IZA, que finalmente fue puesto en libertad condicional.

Por otra parte, el presidente LASSO decretó "el estado de emergencia por conmoción interna grave"¹⁶⁶. A pesar de la aprobación de este decreto, la protesta social continuó. Fue reprimida violentamente por las fuerzas del orden (véase más abajo)¹⁶⁷. Numerosos vídeos, que muestran a niños afectados por los gases lacrimógenos o a manifestantes en el suelo golpeados por la policía¹⁶⁸, han circulado por las redes sociales¹⁶⁹, sin que se hayan difundido en los "medios de comunicación dominantes". El 24 de junio de 2022, hubo seis muertos¹⁷⁰. El número de heridos, así como el de detenidos, fue muy elevado¹⁷¹.

¹⁶³ CNN Ecuador, "Jueza en Ecuador dispone libertad de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y ordena medidas alternativas a la prisión", 15 de junio 2022, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/15/ecuador-libertad-leonidas-iza-conaie-orix/>

¹⁶⁴ Por ejemplo: Latam Gremial, "Sindicatos apoyan el paro nacional que inició hoy en Ecuador convocado por comunidades indígenas", 13 de junio 2022, <https://latamgremial.com/sindicatos-apoyan-el-paro-nacional-que-inicia-hoy-en-ecuador-convocado-por-comunidades-indigenas/>

"Ecuador: la CSA expresa su solidaridad y condena la violencia y la represión en el país", 27 de junio 2022, <https://csa-csi.org/2022/06/27/ecuador-la-csa-expresa-su-solidaridad-y-condena-la-violencia-y-la-represion-en-el-pais/>

¹⁶⁵ Por ejemplo: El Mercurio, 'Universitarios lideraron protesta en Cuenca', 14 de junio 2022, <https://elmercurio.com.ec/2022/06/14/universitarios-lideraron-protesta-en-cuenca/>

¹⁶⁶ L'Express, «Equateur: poursuite des protestations indigènes malgré l'état d'urgence», 19 juin 2022, https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/equateur-le-president-declare-l-etat-d-urgence-les-protestations-se-poursuivent_2175486.html

GK, "Guillermo Lasso decretó estado de excepción en 3 provincias. ¿Qué dice el decreto?", 17 de junio de 2022, <https://gk.city/2022/06/17/que-dice-decreto-excepcion-pichincha/>

¹⁶⁷ Véase en particular: Publico.es, "Lasso militariza Ecuador y reprime la protesta indígena contra los recortes", 23 de junio 2022, <https://www.publico.es/internacional/lasso-militariza-ecuador-reprime-protesta-indigena-recortes.html>

¹⁶⁸ https://twitter.com/virgiliohernand/status/1540697129987063810?s=20&t=-BMDvjb7WJ5uxgweLkj_ew

¹⁶⁹ En particular, véase https://twitter.com/conaie_ecuador?lang=fr

France24, "Violentes manifestations en Équateur : "J'ai soigné un homme avec une lésion à l'œil gauche" », 28 juin 2022, <https://observers.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220628-equateur-manifestations-violences-indigenes-police>

¹⁷⁰ LaLibre.be, "Equateur: 6 morts lors de violents incidents devant le Parlement", 24 juin 2022, <https://www.lalibre.be/international/amerique/2022/06/24/equateur-6-morts-lors-de-violents-incidents-devant-le-parlement-TDDB26RRSVDIFIR7XMIIVFZZLI/>

¹⁷¹ El Universo, "En diez días de protestas se aprehendió a 106 personas; los delitos imputados son posesión de armas de fuego, ataques a servidores y bloqueo de servicios públicos", 22 de junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/en-diez-dias-de-protestas-se-detuvieron-106-personas-los-delitos-van-desde-posesion-de-armas-de-fuego-ataques-a-servidores-bloqueo-de-servicios-publicos-nota/>

75. En un comunicado del 20 de junio de 2022, Amnistía Internacional denunció la gestión violenta de la crisis social:

"La represión del gobierno del presidente Guillermo Lasso hacia las manifestaciones convocadas, en el marco de un paro nacional, por organizaciones indígenas, gremiales y sociales desde el 13 de junio de 2022 está causando una crisis de derechos humanos con múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

(...)

El 17 de junio, el presidente Lasso emitió el Decreto Ejecutivo N.º 455, que declaró "el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura", suspendiendo la libertad de asociación, reunión y tránsito durante treinta días.

(...)

El 18 de junio, a pesar de que el estado de excepción suspendió la libertad de asociación y reunión, la Presidencia emitió el Boletín Oficial 561, titulado "La capital de los ecuatorianos marcha por la Paz", para promover una marcha de "cientos de quiteños y quiteñas (...) preocupados por la situación del país y los actos de violencia y vandalismo". El boletín incluía el mensaje "El Gobierno Nacional respalda esta iniciativa y se suma a esta causa". Tanto la página oficial que albergaba el boletín, como el tweet que lo promovía, fueron eliminados posteriormente. Un video difundido en redes sociales, presuntamente grabado durante esa marcha, muestra a un grupo de personas cantando mensajes racistas contra la población indígena"¹⁷².

Muchas otras organizaciones de defensa de derechos humanos han reaccionado ante la brutalidad de la represión empleada contra los manifestantes¹⁷³. Un informe preliminar de una misión de observación indicó que *"Los testimonios recogidos son desgarradores. Todos coinciden en destacar la violencia represiva desplegada y el ataque masivo sobre población civil indefensa. Las fuerzas de seguridad actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión. Cumpliendo órdenes directas del poder ejecutivo, desplegaron intervenciones abusivas, excesivas y desproporcionadas, provocando graves lesiones, en algunos casos letales (...) Así las cosas, de acuerdo a fuentes oficiales, la información brindada por las plataformas de derechos humanos y de las denuncias y testimonios recibidos directamente, podemos dar cuenta de las siguientes violaciones de derechos humanos: ● Asesinatos a manos de las fuerzas policiales y militares. ● Lesiones de diversos grados y mutilaciones por accionar*

¹⁷² Amnesty International, « Ecuador: Represión contra protestas está causando crisis de derechos humanos », 20 de junio 2022, <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ecuador-represion-contra-protestas-esta-causando-crisis-de-derechos-humanos/>

¹⁷³ CubaDebate, "Ecuador: Movimientos sociales denuncian la violencia policial", 22 de junio 2022, <http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/ecuador-movimientos-sociales-denuncian-la-violencia-policial-video/>

Telam, "Ecuador: Una misión de solidaridad argentina releva la situación de los DDHH", 25 de junio, <https://www.telam.com.ar/notas/202206/596607-ecuador-una-mision-de-solidaridad-argentina-releva-la-situacion-de-los-ddhh.html>

desproporcionado de las fuerzas policiales y militares. • Detenciones arbitrarias masivas y falsas imputaciones. • Secuestro, persecución y atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales. • Secuestros y amenazas a manifestantes. • Violación al derecho a la protesta social mediante ataques intempestivos e injustificados a manifestaciones pacíficas o aglomeraciones en particular el ataque a la Casa de la Cultura del viernes 24 de junio. • Violación a las garantías judiciales y acceso a la justicia de los ciudadanos (no recepción de denuncias en fiscalías, no investigación de oficio de hechos de violencia policial, entre otros). • Negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y anti-indigenistas. • Violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica. • Violación a los derechos de niños y niñas. Especialmente en el marco de la represión de las movilizaciones. • Amenazas por parte de las fuerzas policiales al personal voluntario de salud en las zonas de paz. • Ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche. • Ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista. • Censura a medios comunitarios y bloqueo de la libre circulación de información. • Bloqueo del servicio de internet y redes sociales. Hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales. • Desaparición forzada de personas que se encontraban participando en el marco de las movilizaciones”¹⁷⁴.

El 24 de junio de 2022, la CIDH y el Relator Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su preocupación, haciendo un llamado urgente al diálogo:

"Las protestas, que se iniciaron el 13 de junio, tras una convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), contienen varias demandas dentro de las que se destacan la atención a derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales (DESCA). (...) En la convocatoria actual, organizaciones denunciaron la ausencia de mecanismos de diálogo efectivos para dar respuesta a dichas demandas.

El Estado declaró el estado de excepción por grave conmoción interna (...) El Ecuador tiene el deber de garantizar que las disposiciones adoptadas resulten proporcionales y que la suspensión de derechos o garantías se realice cuando constituya la única forma de hacer frente a una determinada situación (...)

Preocupa a la CIDH que según información de la Defensoría del Pueblo 6 personas perdieron la vida en el contexto de las protestas, al menos 2 a causa de impactos de armas de fuego. Asimismo, conforme otras fuentes, al menos 166 personas

¹⁷⁴ Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, “ Informe preliminar : violación de DDHH en Ecuador en el marco del paro nacional 2022”, 28 de junio 2022, <https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-se-ha-dado-a-conocer-el-informe-preliminar-de-la-mision-de-solidaridad-internacional-y-derechos-humanos-que-visito-este-pais-graves-constataciones-sobre-la-represion/>

manifestantes han resultado heridas y 120 agentes de la Policía Nacional. Según cifras oficiales, 108 personas han sido aprehendidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación ante la detención de dirigentes sociales, incluyendo la detención del líder de la CONAIE; y posibles casos de abuso de la fuerza policial, incluyendo incursiones en albergues en sedes universitarias a donde se alojaban manifestantes. La CIDH y su RELE condena toda violación de derechos humanos cometidas en el marco de la protesta social y urgen al Estado a esclarecer las circunstancias de los fallecimientos con la debida diligencia.

Además, se tuvo conocimiento de al menos 86 hechos graves de violencia contra la prensa que cubre el Paro Nacional, según lo reportado por organizaciones de sociedad civil. Los relatos incluyen actos de agresiones físicas -incluso con el uso de látigos y lanzas - y lanzamiento de líquidos calientes contra periodistas, amenazas, hostigamiento, daños, apropiación ilícita de equipos e impactos por bombas de gases lacrimógeno. Sumado a lo anterior, la información da cuenta de ataques a sitios web de periódicos o de organizaciones de sociedad civil que monitorean y reportan sobre los sucesos en el Paro Nacional

(...)

La falta de acceso a la información tiene el potencial de afectar tanto a voces institucionales como de la sociedad civil, dificulta la comprensión social del entorno y aleja las posibilidades de resolución de controversias.

La CIDH y su RELE, adicionalmente, tomaron nota de los distintos actos de violencia reportados por el Estado en contra de agentes y bienes públicos, (...)

Ahora bien, el Estado de Ecuador debe actuar sobre la base de la licitud de las protestas como manifestación de los derechos de asociación, libertad de expresión y reunión pacífica. El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia no vuelve, per se, violenta o ilegítima toda la protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas.

(...)

En el marco de la institucionalidad democrática, el Estado es el responsable de garantizar los derechos y canalizar los reclamos de la población, por lo que debe velar por el fortalecimiento de espacios que aborden las peticiones, reivindicaciones y demandas"¹⁷⁵.

¹⁷⁵ OEA, "CIDH y RELE observan con preocupación la agudización de tensiones sociales en Ecuador e instan a un diálogo urgente, inclusivo y efectivo", 24 de junio 2022, <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/145.asp>

76. Ante las manifestaciones, el gobierno no inició un diálogo, sino que argumentó que la protesta social tenía como objetivo destruir la democracia¹⁷⁶, sin tener en cuenta la grave falta de legitimidad del gobierno¹⁷⁷.

La respuesta del gobierno ha sido criminalizar a los líderes de las protestas, establecer el estado de emergencia, no dialogar, apoyar a las fuerzas del orden y criminalizar el debate democrático.

- Criminalización de los líderes de las protestas

Al día siguiente de la huelga general, la policía detuvo al presidente de la CONAIE¹⁷⁸. El poder judicial fue utilizado una vez más para desacreditar el movimiento social. La detención arbitraria y la criminalización del líder del movimiento indígena fueron ampliamente denunciadas¹⁷⁹. La Alianza por los derechos humanos Ecuador, de la cual hacen partes 13 organizaciones, ha hecho *“un llamado URGENTE al poder judicial para que mantenga su independencia en todas las actuaciones procesales en las que deba intervenir. Pedimos que se haga un uso racional, proporcional y de última ratio del derecho penal, que sea riguroso en la observancia de los estándares nacionales e internacionales en materia de debido proceso y de derechos humanos de pueblos indígenas y sobre todo tome en cuenta el antecedente de graves violaciones a derechos humanos”*¹⁸⁰.

En contraste con este llamado a la moderación, la Fiscalía ecuatoriana allanó los locales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), lugar simbólico de la lucha social indígena, a raíz de una denuncia anónima¹⁸¹.

¹⁷⁶ Infobae, "El ministro de Defensa de Ecuador dijo que "la democracia está en serio riesgo" por las protestas contra el gobierno de Lasso", 21 de junio 2022, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/21/el-ministro-de-defensa-de-ecuador-dijo-que-la-democracia-esta-en-serio-riesgo-por-las-protestas-contra-el-gobierno-de-lasso/>

¹⁷⁷ RFI, "Lasso cumple un año en el poder con una popularidad a la baja", 24 de mayo 2022, <https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20220524-lasso-cumple-un-a%C3%B1o-en-el-poder-con-una-popularidad-a-la-baja>

EcuadorEnVivo, "Credibilidad de Lasso en el 12 %, tras un año de gestión", 17 de junio 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/entrevistas/a-primera-hora/item/144506-credibilidad-de-lasso-en-el-12-tras-un-ano-de-gestion>

¹⁷⁸ BBS Neews, "Ecuador police arrest protest leader Leonidas Iza", 14 June 2022, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61796430>

¹⁷⁹ Ver en particular, FrontLine Defenders, "Detención arbitraria y criminalización del defensor indígena Leonidas Iza Salazar en el marco de protestas pacíficas en el país", 17 de junio 2022, <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arbitrary-detention-and-criminalization-indigenous-defender-leonidas-iza-salazar-context>

Inred.org, "Inredh ante la detención ilegal de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y el contexto de movilizaciones", 14 de junio 2022, <https://inredh.org/inredh-ante-la-detencion-ilegal-de-leonidas-iza-presidente-de-la-conaie-y-el-contexto-de-movilizacion/>

¹⁸⁰ Alianza por los Derechos Humanos, "Paro nacional - Junio 2022: Pronunciamiento desde la Alianza por los Derechos Humanos sobre las acciones legítimas de protesta social y la respuesta estatal de criminalización por parte del Gobierno Nacional", 14 de junio 2022, <https://ddh.ecuador.org/sites/default/files/documentos/2022-06/Pronunciamiento%20Alianza%20DDHH%20sobre%20protesta%20social%20Junio%202022%20.%2014.06.22.pdf>

¹⁸¹ El Comercio, "Fiscalía de Ecuador allana la Casa de la Cultura en Quito por paro indígena", 19 de junio 2022, <https://elmercurio.com.ec/2022/06/19/fiscalia-de-ecuador-allana-la-casa-de-la-cultura-en-quito-por-paro-indigena/>

- Estado de emergencia

La huelga general comenzó en Ecuador el 13 de junio de 2022. El 17 de junio de 2022, el presidente Lasso declaró el estado de excepción (decreto n°455), sin haber iniciado ningún diálogo con los dirigentes de la CONAIE¹⁸².

La extensión de las restricciones implicadas por el decreto presidencial, junto con la violencia policial y la caótica gestión de la crisis por parte del gobierno, llevó a los miembros de la Asamblea Nacional a pedir un debate democrático sobre el decreto presidencial. En respuesta a este anuncio, el ejecutivo reaccionó presentando solicitudes de medidas provisionales ante la justicia para impedir que se celebrara la sesión parlamentaria¹⁸³. El Presidente de la República, Guillermo Lasso, se adelantó entonces a la Asamblea Nacional revocando su decreto n°455 y sustituyéndolo por un nuevo decreto el 20 de junio de 2022. El debate no llegó a celebrarse debido a la repentina decisión del presidente Lasso de poner fin al estado de excepción el 25 de junio de 2022.

- Falta de diálogo, apoyo a las fuerzas del orden, criminalización del debate democrático

A pesar de la fuerte movilización popular y del impacto de la huelga general en el país, el presidente Lasso no se reunió con los líderes del movimiento social, sino que adoptó medidas unilaterales que se consideraron insatisfactorias¹⁸⁴. No fue hasta el 27 de junio de 2022, 14 días después del inicio del paro nacional, que el gobierno, bajo presión internacional, celebró su primera reunión con los distintos líderes de las organizaciones indígenas¹⁸⁵. El 28 de junio de 2022, el presidente Lasso anunció la suspensión del diálogo¹⁸⁶.

Al mismo tiempo que se negaron a dialogar, las autoridades ecuatorianas se posicionaron como víctimas. Mantuvieron un discurso que desacreditaba y criminalizaba el movimiento social, sin condenar los graves abusos y la violencia policial, y también sugirieron sin pruebas que los manifestantes estaban infiltrados por grupos criminales¹⁸⁷.

¹⁸² France24, "Guillermo Lasso declara el estado de excepción en Ecuador tras quinto día de reclamos", 18 de junio 2022, <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220618-guillermo-lasso-declara-el-estado-de-excepci%C3%B3n-en-ecuador-tras-quinto-d%C3%ADa-de-reclamo>

¹⁸³ El Universo, "Paro nacional: hay dos pedidos de medidas cautelares para que la Asamblea Nacional no se reúna y derogue el decreto 455", 20 de junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/paro-nacional-presentan-solicitud-de-medidas-cautelares-para-que-la-asamblea-nacional-no-se-reuna-y-derogue-el-decreto-455-nota/>

¹⁸⁴ Pressenza, "Ecuador: el Paro no para", 27 de junio 2022, <https://www.pressenza.com/es/2022/06/ecuador-el-paro-no-para/>

¹⁸⁵ El Comercio, "Gobierno llega a reunión con la Conaie en la Basílica", 27 de junio 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/conaie-dialogo-ejecutivo-poderes-estado.html>

¹⁸⁶ El Comercio, "Lasso suspende el diálogo con la Conaie por ataque a militares en Shushufindi", 28 de junio 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-suspende-dialogo-conaie-ataque-militares-shushufindi.html>

¹⁸⁷ EcuadorEnVivo, "Lasso anuncia que empleará todos los recursos de la fuerza pública y acusa a Iza de golpista", 24 de junio 2022, <https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/145035-lasso-anuncia-que-empleara-todos-los-recursos-de-la-fuerza-publica-y-acusa-a-iza-de-golpista>

Las protestas de junio de 2022 pusieron de manifiesto una grave crisis de gobernabilidad y legitimidad preexistente¹⁸⁸.

El partido UNES, que agrupa a los partidarios de la revolución ciudadana, realizó entonces un análisis político, señalando que el presidente Lasso no contaba con el apoyo de los ecuatorianos, que su gobierno no tenía mayoría en la Asamblea Nacional y que el país se encontraba en un estado de grave malestar social, lo que justificaba la adopción de decretos presidenciales que establecían el estado de excepción. Para superar esta crisis, la UNES consideró oportuno utilizar el mecanismo constitucional conocido como "muerte cruzada" que implica nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias¹⁸⁹.

La CONAIE es una organización que representa a los pueblos indígenas, pero no es un partido político. El partido político que hace llegar las reivindicaciones indígenas a la Asamblea Nacional se llama PACHAKUTIK. El 25 de junio de 2022, PACHAKUTIK anunció que, ante la falta de diálogo y la brutal represión de las manifestaciones, llamaba a sus miembros a apoyar la solicitud constitucional de destitución del presidente Lasso. *"Nuestro compromiso es con el pueblo, hemos exigido el diálogo como salida a la crisis, la respuesta ha sido la represión, hoy tenemos la posibilidad de actuar desde el Legislativo"*¹⁹⁰.

Frente a las críticas civiles y políticas, el gobierno ha acusado, a través de la prensa, a los "correístas" de haber originado el movimiento de protesta popular¹⁹¹ y de ser aliados del narcotráfico, por un lado, y por otro lado ha insistido en que quienes apoyen la demanda de destitución presidencial serían golpistas.¹⁹²

No hay razón para creer que los correístas hayan originado el movimiento de protesta contra el presidente Lasso. Esta retórica se utiliza para vincular al movimiento social indígena con un "enemigo" ya fabricado por el lawfare (ver arriba). La acusación infundada¹⁹³ de un vínculo

¹⁸⁸ En este sentido: Primicias.ec, "Revocatoria del mandato contra Lasso avanza silenciosamente durante el paro", 13 de junio 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/revocatoria-mandato-lasso-paro-nacional/>

¹⁸⁹ Constitución de Ecuador (2008), https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Artículo 130 de la Constitución ecuatoriana:

" La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos:

(...)

2. Por grave crisis política y conmoción interna

¹⁹⁰ https://twitter.com/PKNacional18/status/1540755980161622016?ref_src=twsrc%5Etfw

¹⁹¹ EcuadorEnVivo, "Villavicencio: 'Esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica'", 23 de mayo 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/144935-villavicencio-esta-intentona-golpista-es-liderada-por-el-correismo-desde-belgica>

¹⁹² El Universo, "'Este es el golpista", le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato", 23 junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/este-es-el-golpista-le-responde-el-presidente-guillermo-lasso-a-rafael-correa-sobre-propuesta-de-revocatoria-de-mandato-nota/>

¹⁹³ Ministerio de Gobierno Ecuador, "El Departamento de Justicia a través de la DEA de EEUU condecora al ministro Serrano por su gestión en la lucha antidrogas", 2016, <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/el-departamento-de-estado-de-eeuu-condecora-al-ministro-serrano-por-su-gestion-en-la-lucha-antidrogas/>

entre los correístas y el narcotráfico¹⁹⁴ también pretende deslegitimar y desacreditar la protesta social y evitar el debate y la consideración de los problemas económicos y sociales que justificaron la magnitud de las protestas.

En cuanto al uso por parte de la Asamblea Nacional de la prerrogativa que le ofrece una disposición constitucional, esta no puede considerarse en ningún caso un golpe de Estado, ya que es una salida legal a la crisis de Ecuador. El discurso del gobierno¹⁹⁵ era claramente demagógico. Sin embargo, continuando con el enfoque de lawfare, se abrió una investigación penal contra los numerosos parlamentarios que favorecieron el uso del mecanismo de "muerte cruzada"¹⁹⁶.

Tras varios días de debate en la Asamblea Nacional, se celebró una votación sobre la solicitud de destitución presidencial: 80 parlamentarios -los dos partidos más importantes del país, UNES y PACHAKUTIK- votaron a favor, 40 votaron en contra y 9 parlamentarios se abstuvieron. La Asamblea Nacional tiene 137 miembros. El partido CREO del presidente Lasso tiene 12 diputados. Todos los parlamentarios aceptaron la votación, de acuerdo con los principios democráticos fundamentales.

Algunos medios de comunicación presentaron este resultado como una "victoria" del presidente Lasso¹⁹⁷. Sin embargo, refleja una crisis gubernamental sin precedentes.

77. Al final, a pesar del anuncio de la negativa al diálogo con el presidente de la Conaie¹⁹⁸, el gobierno tuvo que aceptar sentarse a la mesa de negociaciones.

“En los últimos 6 años y medio se han decomisado un 191 % más de media anual que en los 10 años anteriores. 332 toneladas métricas de droga del año 2010 hasta hoy, versus 268 del año 2000 al 2009. Se ha decomisado prácticamente lo mismo en aproximadamente 6 años y medio, que en 19 años”

¹⁹⁴ El Universo, "Declaración del presidente Guillermo Lasso enfureció a Rafael Correa", 23 de junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/declaracion-del-presidente-guillermo-lasso-enfurecio-a-rafael-correa-nota/>

También reproducido: El Universo, ""Este es el golpista", le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato", 23 junio 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/este-es-el-golpista-le-responde-el-presidente-guillermo-lasso-a-rafael-correa-sobre-propuesta-de-revocatoria-de-mandato-nota/>

Ver también: El Comercio, "Correísmo denuncia a Ministro Carrillo y pide su comparecencia en Asamblea",

¹⁹⁵ SwissInfo, "Lasso acusa al correísmo de intentar "asaltar la democracia" en Ecuador", https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-gobierno_lasso-acusa-al-corre%C3%ADsmo-de-intentar--asaltar-la-democracia--en-ecuador/47711392

¹⁹⁶ EcuadorEnVivo, "Villavicencio: 'Esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica'", 23 de mayo 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/144935-villavicencio-esta-intentona-golpista-es-liderada-por-el-correismo-desde-belgica>

¹⁹⁷ ABS Internacional, "Lasso retiene la presidencia y derrota al correísmo opositor", 29 de junio 2022, https://www.abc.es/internacional/abci-lasso-retiene-presidencia-y-derrota-correismo-opositor-202206290642_noticia.html

¹⁹⁸ ABS Internacional, "Lasso retiene la presidencia y derrota al correísmo opositor", 29 de junio 2022, https://www.abc.es/internacional/abci-lasso-retiene-presidencia-y-derrota-correismo-opositor-202206290642_noticia.html

Tras 18 días ininterrumpidos de huelga general y protestas, se firmó un "Acta por la Paz" que ponía fin a las manifestaciones y concedía algunas de las demandas de las asociaciones indígenas. El acuerdo preveía la continuación de las negociaciones en un ambiente pacífico¹⁹⁹.

Los virulentos ataques del gobierno, ampliamente difundidos por la prensa, contra R. CORREA DELGADO²⁰⁰, el partido UNES, y los representantes de la CONAIE²⁰¹ no se han detenido. Vician el debate y socavan el derecho de los ecuatorianos a una resolución democrática y constructiva de sus importantes puntos de preocupación.

78. Ecuador atraviesa actualmente una profunda crisis social, económica, de seguridad, política y democrática.

La reciente gestión de esta crisis ha atentado gravemente contra los derechos y libertades fundamentales de los ecuatorianos (derecho a vivir dignamente, derecho a la salud, libertad de expresión y de manifestación, derecho a la vida, derecho al respeto de la integridad física, derecho a un juicio justo, libertad de ejercer los derechos políticos).

VII. Organización de un nuevo referéndum (2022): nuevos temores de desinstitucionalización y politización de la justicia

79. En plena crisis de legitimidad y gobernabilidad, el presidente Lasso anunció en septiembre de 2022 su intención de convocar un nuevo referéndum.

El gobierno justifica este nuevo referéndum por la necesidad de mejorar la seguridad, la institucionalidad de Ecuador y la protección de los recursos naturales²⁰², objetivos naturalmente loables.

¹⁹⁹ Gobierno de Ecuador, "Finaliza paro en Ecuador, se firma acta por la paz", 30 de junio 2022, <https://www.presidencia.gob.ec/finaliza-paro-en-ecuador-se-firma-acta-por-la-paz/>

²⁰⁰ Por ejemplo: La Nación, "El embajador de Ecuador en la Argentina apuntó contra Correa, Venezuela y Cuba por las protestas en su país: Son regímenes del mal", 1 de julio 2022, <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-embajador-de-ecuador-en-la-argentina-apunto-contra-correa-venezuela-y-cuba-por-las-protestas-en-nid01072022/>

El Comercio, "Guillermo Lasso: Correa 'está desesperado por regresar a Ecuador para lograr su impunidad'", 18 de julio 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-correa-desesperado-regreso-ecuador-impunidad.html>

Expreso.ec, "Maniobras desestabilizadoras tejidas de varios frentes", 9 de julio 2022, <https://www.expreso.ec>

²⁰¹ Por ejemplo: Rfi, "Indígenas de Ecuador niegan acusación del presidente que se financian con el narco", 10 de julio 2022, <https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20220709-ind%C3%ADgenas-de-ecuador-niegan-acusaci%C3%B3n-del-presidente-que-se-financian-con-el-narco>

GK, "Conaie: declaraciones de Lasso ponen en riesgo los acuerdos", 9 de julio 2022, <https://gk.city/2022/07/09/declaraciones-lasso-conaie-riesgo-acuerdos/>

²⁰² Reuters, « Ecuador plans referendum to cut to assembly seats, fight drug trafficking », 12 septiembre 2022, <https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-plans-referendum-cut-assembly-seats-fight-drug-trafficking-2022-09-12/>

Lamentablemente, al igual que en el 2018, rápidamente quedó claro que las respuestas afirmativas a las preguntas formuladas no resolverían los graves problemas que enfrenta el Ecuador, sino que aumentarían el riesgo de abusos y violaciones a los derechos humanos, la falta de representatividad de ciertos ciudadanos, y la politización de instituciones que deben ser independientes. Es un asunto muy preocupante, que constituye un paso más hacia la desintegración del Estado de Derecho.

80. La primera preocupación es el modus operandi que adoptará el Gobierno en relación con el necesario control constitucional de las preguntas formuladas en un referéndum.

En efecto, el 12 de septiembre de 2022, el presidente Lasso presentó las ocho preguntas a las que quiere que el pueblo ecuatoriano responda "sí" o "no":

“1. Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?

2. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2?

3. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?

4. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1

También: “A través de ellas se plantean reformas constitucionales relacionadas con el combate a la inseguridad, la calidad de la institucionalidad especialmente de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (PSC), y otras políticas ambientales – El Universo, “Estas son las preguntas del referéndum impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso”, 12 de septiembre 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/estas-son-las-preguntas-del-referendum-impulsado-por-el-gobierno-de-guillermo-lasso-nota/>

asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?

5. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?

6. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6?

7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que estas no gozan de su protección. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?

8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?"

Conforme lo establece la ley, el Gobierno primero remitió su propuesta de preguntas a la Corte Constitucional para que evalúe su pertinencia legal y constitucional. En principio, la Corte Constitucional tiene 20 días para hacer su evaluación. Sin embargo, parece extremadamente difícil, si no imposible, que la Corte Constitucional pueda cumplir ese plazo, dado que el anexo de las preguntas es un documento de 470 páginas.

Por tanto, hay fuertes temores de que, al igual que en 2018 (véase más arriba), el Gobierno prescinda del dictamen de constitucionalidad. Este enfoque fue muy criticado por varios organismos internacionales. Además, la necesidad de explicaciones tan largas es un indicio de la complejidad de los temas y del proyecto que esta oculto, por lo que es probable que el ciudadano medio no podría votar con pleno conocimiento de causa.

Sin embargo, el proceso que se seguirá no es la única fuente de preocupación. De un análisis somero se desprende inmediatamente que las respuestas afirmativas conducirían a consecuencias contrarias a los objetivos supuestamente perseguidos. Vale la pena aclarar que el texto transcrito sobre las preguntas es referencial y que el anexo que se anuncia en cada una de ellas es el que detalla el verdadero alcance e intenciones de la consulta.

81. Creemos que es importante llamar la atención sobre los riesgos que implican algunas de las preguntas que el gobierno pretende hacer a los ciudadanos ecuatorianos.

La primera pregunta dice:

“1. Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”

En teoría, pretende mejorar la seguridad de los ecuatorianos.

Sin embargo, es preocupante plantear una pregunta de este tipo, cuya respuesta aumentaría la "militarización" de la acción policial, sin haber puesto en marcha previamente un plan de acción gubernamental contra el aumento de la violencia con las herramientas que ya poseen los dirigentes ecuatorianos, y sin haber desarrollado, además, una estrategia para atajar la principal causa del aumento de la violencia: el empobrecimiento de la población y el aumento de las desigualdades sociales (véase más arriba). Es realmente simplista -aunque desde un punto de vista de la comunicación muy prometedor- afirmar que *“La situación actual de violencia e inseguridad que vive el Ecuador es en gran parte causada gracias a la presencia del crimen organizado que ha tomado cada vez más fuerza en los últimos años”*²⁰³.

Optar por la vía de la represión incrementada que propone esta pregunta sólo debería hacerse como opción subsidiaria, después de haber explorado todas las demás opciones. Este no es el caso. La pregunta parece, pues, demagógica, pues pretende dar la apariencia de una respuesta a un problema extremadamente complejo que será imposible de contener por este medio.

Además, la medida puede ser preocupante si se recuerda que, durante las manifestaciones de junio de 2022, los líderes de la protesta social y sus movimientos fueron calificados como criminales, como grupos organizados vinculados al narcotráfico.

Además, la misma Constitución del Ecuador prevé que una reforma constitucional como se plantea en esta pregunta no pueda realizarse a través de consulta popular como pretende el

²⁰³ Anexo a las preguntas del referéndum, p.17

presidente. De esta manera, existe la posibilidad que esta pregunta no supere el control de constitucionalidad por la forma.

82. La tercera pregunta es aún más problemática.

Consulta:

“3. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3?”

La reacción del Consejo de la judicatura fue inmediata:

«Por su parte María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, dijo a CNN en Español que la propuesta de quitar funciones a esta institución es “desconcertante” y ocasiona una duplicación de competencias.

“Mi primera reacción es de desconcierto. Lo adecuado sería dejar a la justicia en libertad. Ya se estructuró un Consejo de la Judicatura; si algo no funciona hay que verificar por qué no funciona (...) Además, la directora Coronel señaló que en medio de la crisis de la justicia en el país, el Consejo de la Judicatura debe ser reforzado. “Se pretende crear otro consejo para garantizar autonomía fiscal cuando la Fiscalía es autónoma”, precisó”²⁰⁴.

Básicamente, una respuesta positiva a esta pregunta llevaría a una situación contraria al principio de que los jueces no pueden controlarse a sí mismos y que es más apropiado que un organismo independiente se encargue de la disciplina. Este principio pretende garantizar el principio de independencia del poder judicial. La Fiscalía forma parte del poder judicial, por lo que el Consejo de la judicatura es el órgano encargado de la selección, evaluación y aplicación de la disciplina.

La propuesta, mejor descrita en el anexo, va en una dirección que daría al Fiscal General mucho más poder del que tiene actualmente. Se convertiría en la autoridad disciplinaria de todos sus subordinados. Podría transformarse por completo en un brazo de interés político, sobre el que no podría ejercerse ningún control externo. En el contexto del lawfare descrito anteriormente, esta propuesta es alarmante. ¿Qué fiscal se atrevería aún a actuar con la independencia e imparcialidad que requiere su función?

²⁰⁴ CNN, «El presidente de Ecuador propone un pliego de preguntas para consulta popular», 12 de septiembre 2022, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/12/ecuador-pliego-preguntas-consulta-popular-orix/>

La preocupación aumenta por el hecho de que este es el único tema para el que no hay plazo para que la Asamblea Nacional proceda a la reforma de la ley en caso de que se apruebe. El texto del anexo establece que la propuesta de referéndum se aplicaría directamente, requiriendo únicamente la adopción de un reglamento por parte del actual Fiscal General.

83. En cuanto a la composición de la Asamblea Nacional, se propone la siguiente cuestión:

“4. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?”

Este tema parece haber sido incluido para satisfacer las crecientes voces en Ecuador contra la ineficiencia del poder legislativo y los abusos cometidos por algunos de sus miembros. Parece, pues, demagógico, ya que está claro que la reducción del número de parlamentarios no resolverá estos problemas.

Más fundamentalmente, parece que su aplicación reducirá el número de parlamentarios a uno para las provincias que actualmente tienen dos representantes. Como explica E. RON, esta modificación va en detrimento de la representatividad y pluralidad de la Asamblea Nacional, sin aportar ninguna solución al problema mencionado²⁰⁵. No tendrá un impacto positivo, sino que corre el riesgo de concentrar el poder en manos de una sola persona en estas pequeñas provincias, lo que paradójicamente podría crear un aumento del déficit de confianza en el poder legislativo. Incluso, tal y como se ha venido develando en las últimas semanas, existiría la posibilidad de que esa concentración y contracción en la representatividad incremente la posibilidad del cometimiento de actos de corrupción por la disposición o acaparamiento de los votos en el parlamento.

84. La quinta pregunta va en detrimento de la libertad política y su diversidad:

“5. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. Estos no garantizan la representación ciudadana, ni una adecuada participación de sus miembros. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?”

²⁰⁵ E. Ron, experto político electoral, https://www.facebook.com/jimmyjairala/videos/443760157731296/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

Esta propuesta plantea eliminar la institución del “*adherente permanente*” y constitucionaliza el requisito de afiliados equivalente como mínimo al 1.5% del padrón para poder ser reconocido como partido o movimiento político. También busca que el órgano de control electoral sea más estricto con los sistemas de verificación de firmas de afiliados, y que éstas sean permanentes y continuadas.

Dificultar la creación y el mantenimiento de las estructuras políticas no parece estar en consonancia con el objetivo de garantizar la representatividad ciudadana.

85. Todo lo anterior pone de manifiesto el carácter demagógico del referéndum previsto por el presidente Lasso como medio de promover la imagen de un hombre que actúa mientras su gobierno está paralizado sin apoyo suficiente en el parlamento.

Sin embargo, más allá de esta demagogia, el proyecto que hay detrás del referéndum previsto es gravísimo para la democracia y está en línea con el desmantelamiento del anterior referéndum de 2018 (ver más arriba).

El peligro reside existencialmente en la pregunta número 6:

“6. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 6?”

Cambia el órgano nominador de las autoridades de control, del CPCCS como es ahora, a la Asamblea Nacional. En general, todas las autoridades que elegiría la Asamblea provendrían de ternas presentadas por el Ejecutivo. Las Superintendencias y el Procurador no serían elegidos de ternas sino a partir de nombres fijos propuestos por el presidente a consideración de la Asamblea²⁰⁶. Las demás autoridades provendrían de ternas que escogería el propio Presidente, de 6 nombres que vendrían de diferentes fuentes. En el caso de la Fiscalía, por ejemplo, vendrían de binomios propuestos por la Corte Nacional de Justicia, la propia Fiscalía y el Presidente. Para la Contraloría, vendrían de binomios presentados por la Corte Nacional de Justicia, el propio Contralor y el Presidente.

²⁰⁶ Como en la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, quien recientemente demuestro su carácter político en una decisión en contraria de todos los precedentes que obligan normalmente a los jueces – BBC News, “Aborto en Estados Unidos: la Corte Suprema deroga Roe vs. Wade y elimina el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país”, 24 de junio 2022, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61806107>

Lo que más llama la atención es que la propuesta pretende otorgarle al Presidente prácticamente poderes ilimitados, ya que una iniciativa de designación sólo podría ser negada con los dos tercios de los miembros de la Asamblea²⁰⁷, quórum muy difícil de obtener. Además, si se llegare a conseguir los votos para negar la terna o la propuesta de designación, el Presidente tendría que enviar otra propuesta, la cual, para ser nuevamente negada, requeriría los $\frac{3}{4}$ de los votos en contra de los miembros del Parlamento, quórum imposible de obtener.

También, el plazo para decidir sobre la idoneidad de un candidato es cortísimo: sólo 15 días para que una Comisión analice la probidad de tres personas y que el Pleno de la Asamblea nacional se pronuncie. En caso de silencio administrativo, la propuesta entre en vigor por el ministerio de la ley.

Así que la propuesta es una carta blanca al Presidente para que designe quien quiere por asumir las funciones de autoridad de control. La única excepción sería la forma de elección de los miembros del CPCCS, que provendrían de una lista de 18 personas propuestas por la Fiscalía.

Esto es gravísimo por el Estado de derecho y la preservación de la independencia de los diferentes poderes entre ellos, incluido el poder judicial, que sirve a asegurar la protección de los derechos de los ecuatorianos frente, entre otro, a la administración. Una politización grave de las instituciones públicas. Además, no hay ninguna lógica o explicación en dejar la nominación de los miembros del CPCCS a carga de la Fiscalía general. No se entiende el vínculo entre la participación ciudadana y la protección del orden público, para que se le otorgue a la Fiscalía este privilegio.

Concretamente esta reforma significara que el Presidente Lasso –que critica la ausencia de nombramiento a algunas cargas por parte del CPCCS²⁰⁸- podría convertirse en dictador al facultarlo a nombrar a dedo a las autoridades que, a la fecha de la consulta, no se hayan nombrado.

Claramente esta propuesta viola el principio de la separación de los poderes, de la independencia judicial, aumenta la politización del servicio público, la arbitrariedad y los riesgos de abuso de funciones, así como de lawfare.

86. Después de las dramáticas consecuencias del referéndum ilegal de 2018, es sumamente preocupante constatar que, para darse la imagen de hombre que toma acciones, el Presidente de la República propone organizar un nuevo referéndum, construido demagógicamente, prometiendo una mayor politización de la justicia y de otras instancias de control del Estado.

²⁰⁷ En comparación, en EEUU, se niega solo con mayoría simple.

²⁰⁸ Sostiene que hay 10 autoridades en funciones prorrogadas. Reconoce cómo el actual CPCCS ha incumplido sus funciones (ver acápite 662 del anexo)

Nadie debe olvidar que el Estado de Derecho no es un concepto abstracto. Su salvaguardia está estrechamente vinculada a la preservación de todos los derechos y libertades individuales, que deben garantizarse a todos sin discriminación por motivos de raza, religión, etnia, afiliación política, etc.

Lamentablemente, este informe demuestra que el desmantelamiento del Estado de Derecho ha ido de la mano del deterioro de los derechos políticos y civiles, económicos y sociales de los ecuatorianos. Situación que se demuestra con la pretensión que existe de desbalancear el sistema de pesos y contrapesos, dando prevalencia a la función ejecutiva para que pueda tener injerencia en el resto de los poderes del estado.

87. Un planteamiento de consulta que pretende evitar las vías idóneas establecidas para este tipo de enmiendas.

Pese a que la Constitución de la República es clara al establecer el mecanismo a través del cual se pueden realizar las enmiendas constitucionales, se evidencia que la propuesta realizada por el presidente de la República en las primeras preguntas no es procedente a través de una consulta popular.

Ciertas enmiendas requieren de la participación para el tratamiento y debate en la Asamblea Nacional. Considerando que no tiene el apoyo en el cuerpo legislativo, colegimos que pretende engañar a la Corte Constitucional intentando insertarlas a través de consulta al electorado. Lo cierto es que en casos idénticos como los planteados en preguntas como la 1 y la 6, ha sido la misma Corte que ha determinado los métodos idóneos de reforma constitucional²⁰⁹. Guardando

²⁰⁹ La sentencia No. 018-18-SIN-CC de 01 de agosto de 2018 analizó varias reformas constitucionales entre las que se encontraba la posibilidad de dotar a las Fuerzas Armadas de la capacidad constitucional de contribuir a la seguridad interna del país (similar a lo que se pretende consultar con la pregunta 1). La resolución observa que el proceso de enmienda con la participación de la Asamblea Nacional era el idóneo, sin embargo cada punto que se planteaba enmendar, debía votarse individualmente y no en bloque; y fue por esta última observación que finalmente se declaró la inconstitucionalidad de la enmienda, como se observan en los puntos resolutive de aquella sentencia:

“3. En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 436 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 76 numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se declara la inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador el 03 de diciembre de 2015, a excepción de las enmiendas constantes en los artículos 2 y 4 que modificaron los artículos 114 y 144 de la Constitución de la República, en virtud de que fueron derogadas por efecto de la promulgación de los resultados del referéndum y la consulta popular efectuados el día 4 de febrero de 2018, en el Registro Oficial Suplemento No. 180 de 14 de febrero de 2018. (...)

5. En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 436 numerales 1 y 6 de la Constitución de la República, dicta la siguiente regla jurisprudencial, la cual tendrá vigencia hasta que la Asamblea Nacional regule el procedimiento de aprobación y votación de las enmiendas constitucionales de iniciativa de la Asamblea Nacional: En la tramitación del proyecto de enmienda constitucional de iniciativa de la Asamblea Nacional, previsto en el artículo 441 numeral 2 de la Constitución de la República, la votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional se realizará en virtud del principio de deliberación democrática, respecto de cada uno de los artículos propuestos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta.”

En sentencia No. 4-19-RC/19 la Corte ya resolvió el planteamiento respecto a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (similar a lo que ahora se pretende con la pregunta 6 de la consulta

coherencia con los pronunciamientos precedentes de la Corte, ésta debería ratificarlos y negar la posibilidad de consultar al pueblo determinados temas.

VIII. Conclusión

88. Este informe pone de manifiesto las graves violaciones por parte del Estado ecuatoriano de los principios fundacionales y los valores esenciales de la Comunidad Internacional y las Organizaciones de Derechos Humanos²¹⁰.

La actualidad internacional demuestra el interés que tiene la comunidad internacional en vincularse activamente por estas cuestiones para anticipar y evitar el desarrollo de asociaciones con Estados que no comparten o violan los derechos y libertades fundamentales que constituyen el eje de las democracias.

La atención prestada por la comunidad internacional es, además, un factor favorable para los ciudadanos de los Estados asociados, el respeto y el desarrollo de los valores fundamentales de nuestras democracias.

popular). Textualmente observó que la consulta popular no era la vía constitucional idónea para implementar esta enmienda, tal y como se lee en las siguientes líneas:

“V. Dictamen.- 45. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional dictamina: 45.1. En general, el procedimiento de reforma, establecido en el art. 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado, cuyos principales temas se resumieron en los párrafos 5 a 7 supra, encaminados a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al rediseño de la Función Legislativa para volverla bicameral; y a la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera Función Judicial para darle más autonomía.”

²¹⁰ Derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

**Report on the situation of serious violations of the rule of law and
of fundamental rights and freedoms in Ecuador**

I. Introduction

Ecuador is going through a deep social, economic, political, democratic and security crisis. The rule of law and the fundamental rights and freedoms of Ecuadorians are no longer guaranteed. The rule of law presupposes respect for the separation and balance of the different powers of the State, which alone makes it possible to protect and guarantee respect for human rights.

Since 2018, in Ecuador, the judicial system has been profoundly reshaped, ruining the guarantees of independence and impartiality of justice. Members of the Judiciary Council, magistrates of the Constitutional Court, 70% of the members of the National Court of Justice, the Attorney General and others have been arbitrarily removed from their positions, without having committed any fault and without respect for their rights of defence. Since then, the power of attorney has turned into service of the government getting to the point of criminalize political opponents. In addition, the media actively participate in strategies to create the figure of the "enemy opponent" propagating an official message without retrospective or evidence. The concern for the institutional future of Ecuador is greater because the current President of the country is planning demagogically to call for a new referendum, which in reality intends to politicize the law enforcement offices.

The legal and media powers attack to political opponents, known as "lawfare" has been used mainly against the leaders and supporters of the Revolución Ciudadana (RC) movement. They have been subjected to several trials in clear violation of the law and their human rights. Without fair trials and with degrading and unhuman treatments.

International control agencies, such as the Interpol File Control Commission, the United Nations Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, the Inter-American Commission on Human Rights, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention and the Belgian Commissariat General for Refugees and Stateless Persons and others all come to the same conclusion that lawfare has been used repeatedly to criminalize, discredit and delegitimize not only political opponents but also leaders of social and indigenous movements who protest asking for the implementation of policies that respect their social, economic and cultural rights. Among the victims of the assault on human rights are also Julian ASSANGE, psychologically tortured in the Ecuadorian embassy since the arrival to the presidency of L. MORENO, then arbitrarily deprived of his refugee status, and Ola BINI, arbitrarily arrested and imprisoned, victim of an unfair trial, for his links with the founder of WikiLeaks.

Democracy requires the possibility of a representative expression of different political thoughts of the population. After the breakup within the Alianza País party in 2018, and following the sudden political turn of R. CORREA DELGADO's successor, supporters of the "Revolución Ciudadana" were systematically prevented from creating a new party or political alliance that would allow them to participate, on equal terms, in the 2019 regional and 2021 national elections. As in Brazil, lawfare has undermined the right of fair and democratic elections.

Since 2017, poverty and violence have increased alarmingly. Economic, social and security difficulties have led to widespread protests in 2019 and 2022. The same ones that were violently repressed leaving a result of several dead and hundreds injured. In response to popular discontent, the freedoms of expression and demonstration have been violated through the abuse of states of emergency and the excessive use of force. This disproportionate use of public forces has been condemned internationally. The Ecuadorian government has also used these mass demonstrations as a excuse to criminalize its "opponents". Democratic dialogue is generally denied and disqualified.

In 2019, the prison administration underwent structural and budgetary reform. The overuse of incarceration and the lack of investment have led to significant overcrowding in conditions that do not allow for the classification of prisoners, and the number of prison guides in prison facilities has been depleted. The State can no longer guarantee the right to life and respect for the physical integrity of prisoners in Ecuador. Since December 2020, despite the state of emergency declared in September 2021, more than 400 prisoners have lost their lives in violent clashes. These are massacres with some victims having been dismembered and/or decapitated. It has not been decided what structural measures could be taken, nor significant investments in this field.

The crisis in Ecuador reveals a management that seriously undermines the fundamental rights and freedoms of Ecuadorians (right to live in dignity, right of health, right of freedom of expression and demonstration, right of life, right to be respected for any physical integrity, right of a fair trial, right of freedom to exercise political rights or preferences).

The breakdown of the rule of law is a matter of deep concern, as it is a necessary condition for the development of people's fundamental rights and freedoms.

Table of contents

I. Introduction	75
II. Breakdown of the rule of law - establishment of a judiciary under the tutelage of the executive, lacking independence and impartiality.	78
A. Process of "dismantling" of the judiciary	78
1. Referéndum 2018	78
2. Transitory Council of Citizen Participation (CPCCS-T).....	81
3. Removal and replacement of the Judiciary Council.....	83
4. Removal and replacement of the Constitutional Court	84
5. Removal and replacement of judges of the National Court of Justice (CNJ)	85
6. Removal from office and appointment of a new Attorney General of State (FGE).....	90
7. Conclusion.....	91
B. Use of the judiciary for political persecution/repression	92
1. Contextualization.....	93
2. Rafael Correa Delgado's case	97
3. The case of Jorge GLAS.....	99
4. The case of Carlos OCHOA	102
5. Case of Fernando ALVARADO ESPINEL	102
6. Case of Vinicio ALVARADO.....	103
7. The case of Walter SOLIS.....	103
8. Case of Ricardo Armando PATINO.....	104
9. Alexis MERA Case	105
10. Case of Maria DUARTE	105
11. Julian ASSANGE's case	105
12. Ola BINI case	109
13. Diplomatic asylum after the October 2019 "protests".....	111
14. The use of the judiciary to pressure the legislature	111
III. Violation of the right to form a political party of the most important political force in the country and lawfare within the electoral system.	112
IV. Violent crackdown on social protest in October 2019.	117
V. Massive violation of the right to life and respect for the physical integrity of persons deprived of their liberty.....	122
VI. Impoverishment, increased violence, state of emergency, repression and criminalization of democratic debate.....	125
VII. Organization of a new referendum (2022): new fears of deinstitutionalization and politicization of the justice system	135
VIII. Conclusion	144

II. Breakdown of the rule of law - establishment of a judiciary under the tutelage of the executive, lacking independence and impartiality.

A. Process of "dismantling" of the judiciary

1. Referéndum 2018

1. Among the constitutional powers of the President of the Republic is the power to "call a referendum in the cases and with the requirements set forth in the Constitution"¹.

On October the 2nd in 2017, the President of the country requested that the Constitutional Court issue a prior and binding opinion regarding the constitutionality of the referendum back then, and the questionnaire relating to five questions suggesting to the following topics: fight against corruption, indefinite re-election, citizen participation and institutional, social and environmental issues².

Question 3 of the referendum specifically stated:

"Do you agree with amending the Constitution of the Republic of Ecuador to restructure the Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS) as well as to terminate the constitutional term of its current members, and that the Council that temporarily assumes their functions has the power to evaluate the performance of the authorities whose appointment corresponds to it, being able, if necessary, to anticipate the termination of their terms, according to Annex 3?"³

Annex 3 had the following content:

"Early termination of term: The constitutional terms of the principal and alternate members of the Council of Citizen Participation and Social Control are hereby terminated, who shall cease in their functions on the day on which the Council of Citizen Participation and Social Control is installed, which shall carry out the transition in accordance with this annex.

[Transitional regime of the Council for Citizen Participation and Social Control: The terms of office of the councilors of the current Council for Citizen Participation and Social Control are terminated in advance. Until the installation of the new Council of Citizen Participation and Social Control in accordance with the system established in the amended Constitution, a Council of Citizen Participation and Social Control is

¹ Constitution of the Republic of Ecuador, Art. 147 numeral 14.

² Office of the President of the Republic, Oficio No. T.141-SGJ-17-0331 of October 2, 2017.

³ Presidency of the Republic, Oficio No. T.141-SGJ-17-0331 of October 2, 2017.

established which will temporarily assume all the powers, duties and attributions that the Constitution and the laws grant to the Council of Citizen Participation and Social Control and will be comprised of seven members appointed by the National Assembly from among shortlists sent by the President of the Republic. (...) The transitional Council shall have the mission of strengthening the mechanisms of transparency and control, citizen participation, and prevention and fight against corruption for which it shall propose the necessary reforms to the competent bodies. The Transitional Council shall evaluate the performance of the authorities appointed by the terminated Council of Citizen Participation and Social Control, within a maximum term of six months from its installation, being able, if necessary, to declare the early termination of their terms, and if it does so, it shall immediately proceed to convene the respective selection processes. To this effect, it shall issue a regulation that regulates the evaluation process, guaranteeing due process, with a hearing for the evaluated authorities and including the necessary mechanisms for contestation and citizen participation. Likewise, it shall guarantee the improvement, objectivity, impartiality and transparency of the selection mechanisms of the authorities whose appointment is within its competence [...]"⁴ .

Without waiting for the binding ruling of the Constitutional Court, former Ecuadorian President L. MORENO called on voters to go to the polls on February 4, 2018. 2018.

2. The Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS) is a constitutionally established body, whose members are elected by popular vote, which oversees multiple institutions (Attorney General's Office, Prosecutor General's Office, Judiciary Council, etc.). popular vote, which oversees multiple institutions (Attorney General's Office, Prosecutor General's Office, Judiciary Council, etc.).

Their dismissal outside the time and conditions set by law and their replacement by members chosen by the political power clearly endangered the structure of the State and the independence of the judiciary.

The Organization of American States (hereinafter OAS) invited the Ecuadorian State to wait for the result of the constitutionality review, but the government objected. The OAS then issued a critical preliminary report highlighting the illegality of the lack of prior review by the Constitutional Court; the disproportion between the organizations in favour of "yes" (supporters of President Moreno) and "no"; the lack of dissemination of the "no" campaign; the use of state resources in favour of "yes"; and the lack of legibility/clarity of the questions asked⁵ .

On January 24, 2018, the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers told Ecuador:

⁴ Presidency of the Republic, Oficio No. T.141-SGJ-17-0331 of October 2, 2017.

⁵ OAS, "Preliminary Report on the Referendum in Ecuador by the Electoral Experts Mission of the organization of American States," February 5, 2018, https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=S-002/18

"Our attention is particularly drawn to the matters that touch on the composition of the Council of Citizen Participation, a constitutional entity. According to this information, this would lead to the dismissal of the current members and the appointment of a new Council. It is alleged that this would lead to an appointment by the executive of the members of such Council and would affect, consequently, the autonomy of the Public Defender's Office, the Attorney General's Office and the organs of the Transparency and Social Control Function. Additionally, it is alleged that it could lead to the dismissal of the members of the Constitutional Court.

(...)

I would like your government to inform us, as soon as possible, on the following (...)

3. Guarantees that the ongoing process will not lead to a Citizen Participation Council controlled by the Executive Branch or affect the independence of bodies such as those mentioned above, in particular the Constitutional Court, the Attorney General's Office and the Public Defender's Office"⁶ ;

3. At the request of the CPCCS members, on February 6, 2018, the Inter-American Commission on Human Rights (hereinafter IACHR) asked the Inter-American Court of Human Rights to issue provisional measures: order the government to refrain from removing these members in order to create a CPCCS-Transitional (hereinafter CPCCS-T)⁷ .

The Inter-American Court of Human Rights did not consider the requested measure until after the dismissal of the members of the CPCCS, and therefore declared it without subject matter.

The appeal of the dismissed members of the CPCCS was declared admissible by the IACHR: *"the Commission considers that the allegations of the petitioner regarding their dismissal as members of the CPCCS are not manifestly unfounded and require a study of the merits since the alleged facts, if corroborated as true, could characterize violations of Articles 8 (judicial guarantees), 23 (political rights), 24 (equality before the law) and 25 (judicial protection) of the American Convention in relation to its Articles 1.1 (obligation to respect rights) and 2 (duty to adopt provisions of domestic law)"⁸ .*

4. In 2019, new elections were held to replace the politically appointed CPCCS-T.

⁶ UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, January 24, 2018, OL ECU 1/2018, available at: <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23589>

⁷ OAS press release, "IACHR refers request for provisional measures in favor of members of the Citizen Participation Council of Ecuador," February 6, 2018, <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/021.asp>

⁸ IACHR, Report No. 195/21. Petition 2377-17. Admissibility. Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva and Sonia Gabriela Vera García. Ecuador, September 7, 2021, <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2021/ECAD2377-17ES.pdf>

Previously, however, the CPCCS-T had succeeded in getting the "new" Constitutional Court (see below) to pass a resolution prohibiting the newly elected members from being able to evaluate the work of the CPCCS-T⁹.

As a result of this constitutional decree, the new members of the CPCCS, elected by popular vote, among other things to oversee the work of the CPCCS-T, were dismissed. Since the 2018 referendum, this institution is in crisis¹⁰, like many others¹¹.

5. Despite the guarantees requested by the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, the process irregularly initiated in February 2018 led to the dismissal of all the judges of the Constitutional Court¹², of the attorney general, as well as 70% of the judges of the "National Court of Justice", the second highest court in the country (see below).

This was the first phase of a systematic dismantling of the judiciary.

2. Transitory Council of Citizen Participation (CPCCS-T)

6. The referendum called by L. Moreno took place on February 4, 2018.

Shortly thereafter, the members of the CPCCS were dismissed and a CPCCS-transitory was appointed by the National Assembly, instead of being elected, following the proposal of then President L. MORENO.

7. On March 13, 2018, the CPCCS-T resolved to initiate the evaluation process to all control authorities and those appointed by the dismissed Council of Citizen Participation and Social Control¹³.

On March 28, 2018, the Plenary of the CPCCS-T approved the Terms of Reference for the Evaluation of Authorities, which regulated the process of administrative investigation, evaluation, challenge and resolution on the authorities appointed by the dismissed Council for Citizen Participation and Social Control¹⁴ with the following administrative processes: request of a management report to the respective authorities; evaluation concluded with a Technical Investigation Report; the evaluated authority is informed of the Technical Report so that, within

⁹ El Comercio, "What are the decisions of the Cpccs-t armored by the Constitutional Court?", May 10, 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/CPCCS-T-dictamen-corte-constitucional-autoridades.html>

¹⁰ El Comercio, "El Cpccs va por su cuarto presidente", February 10, 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-presidente-hernan-ulloa-ecuador.html>

¹¹ Primicias, "Nine institutions in crisis due to resignations, dismissals and lack of renewal" February 23, 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/nueve-instituciones-inestabilidad-prorrogas-subrogaciones/>

¹² Jorge Luis Rivera Choez, Orlando Ivan Ronquillo Riera, "Removal of Constitutional Court members and its implications in Ecuador's domestic legal system," September 18, 2019, <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/541>

¹³ CPCCS-T Plenary, Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-001-13-03-2018.

¹⁴ CPCCS-T Plenary, Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018.

three to ten days, it may exercise its right of defence; public hearing; application of the evaluation parameters previously determined by the Plenary of the CPCCS-T; decision within five days; challenge, after three days of the evaluated authority being notified; resolution on the claim under review by the CPCCS-T, last instance.

8. On May 14, 2018, the Permanent Committee for the Defence of Human Rights was already expressing its concern about the powers assumed by the CPCCS-t:

"We observe that several members of the Transitory Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS-T) have stated that the popular will has granted them an extraordinary power, and, on that basis, they have made a normative interpretation, even indicating that their acts are at the same level as the Constitution itself, we believe that this statement is a mistake. The effect of this is that the Transitory Council performs a series of acts exceeding the mandate received by the Ecuadorian people, arrogating to itself functions for which it has no attribution or competence such as: to appoint new authorities to replace the dismissed ones without observing that the specific laws do establish succession rules; to pretend to evaluate and dismiss the Constitutional Court whose appointment according to the Constitution does not correspond to the CPCCS but to a Qualifying Commission in which participate, among others, the Executive Function, the Legislative Function and the Transparency and Social Control Function, the latter conformed by several organs, that is to say that in this case the CPCCS-T pretends to assume integrally as the three functions of the State"¹⁵ .

Professor RUIZ-CHIRIBOGA, after having made a sharp analysis of the (i)legality of the February 2018 referendum, concluded that:

"The constitutional amendments sought by President Moreno should have been reviewed by the Constitutional Court, but Moreno evaded this review. The lack of constitutional review produced serious problems for democracy and human rights. Question 3 of the referendum creating the CPCCS-T was incomplete, unclear and blurred, which affected the electorate's right to vote with full knowledge of the facts. The Constitutional Court could have corrected the question had it been allowed to conduct its constitutional review. The obscurity of the question represented an obstacle to the expression of the popular will. (...)

The all-powerful CPCCS-T presented itself as the voice of the people. It had the arrogance to call its decisions "mandates", as if they had been approved by the people, presenting them as supra-constitutional. The CPCCS-T was unstoppable. It became an ad hoc administrative court that did not apply pre-established rules and procedures. The referendum altered the separation of powers and the autonomy of public functions.

¹⁵ Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, "CPCCS-T EXTRALIMITA MANDATO DE CONSULTA POPULAR", May 24, 2018, <https://www.cdh.org.ec/ultimos-pronunciamentos/354-cpccs-t-extralimita-mandato-de-consulta-popular.html>

*Such a change, according to the Constitution, should not be approved by referendum. The 2018 constitutional amendments in Ecuador were unconstitutional."*¹⁶ .

3. Removal and replacement of the Judiciary Council

9. The Judiciary Council is the governing, administrative and disciplinary body of the Judicial Function (Ecuadorian judiciary). This body is not jurisdictional, so it cannot administer justice.

In June 2018, the CPCCS-T resolved to cease and terminate the term of the vocals of the Judiciary Council¹⁷ . It was also resolved to appoint five vocals in charge of the Judiciary Council until the appointment of the incumbents.

10. The President of the National Court of Justice, the State Attorney General, the Ombudsman, the Executive Branch and the National Assembly were to present a list of candidates to form the new Judiciary Council.

A technical commission, created by the CPCCS-T, was in charge of examining the candidates' qualifications, incompatibilities and merits, and then drew up a shortlist. In the end, the CPCCS-T carried out a "recusal" phase to keep only the desired candidates.

This brief description of the "procedure" followed to form the Council of the Judiciary illustrates the dominance of politicization over appointments to key state functions. CPCCS-T over the appointment to key State functions. The Council of the Judiciary is, in effect, the body that brings together the entire judicial institution: the National Court of Justice, the Attorney General of the State, the Ombudsman, etc.

On January 23, 2019, the CPCCS-T appointed the new principal members of the final Judiciary Council¹⁸ .

11. In the same Resolution, the CPCCS-T urged the new members of the Judiciary Council to, "in response to citizen demand", proceed to set the parameters and the immediate evaluation of judges and associate judges of the National Court of Justice.

Regarding the evaluation of the judges of one of the highest courts in the country, the CPCCS-T had already announced:

¹⁶ Oswaldo Ruiz-Chiriboga, "The 2018 Constitutional Referendum in Ecuador and the Transitory Council of Citizen's Participation and Social Control," from 2021, https://www.researchgate.net/publication/350740720_The_2018_Constitutional_Referendum_in_Ecuador_and_the_Transitory_Council_of_Citizen's_Participation_and_Social_Control free translation.

¹⁷ CPCCS-T, Resolution N°. PLE-CPCCS-T-O-037-04-06-2018 : decision
CPCCS-T, Resolution No. PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018 : denial of appeals for review.

¹⁸ CPCCS-T, Resolution N°. PLE-CPCCS-T-O-240-23-01-2019

"It is stated that the evaluation of the members of the National Court of Justice must comply with the standards of due process guarantees indicated by the Inter-American Court of Human Rights. However, "at this point in the transition it would not guarantee these standards due to the insufficient time to evaluate the performance and individual productivity of the 21 judges and associate judges of the Court"¹⁹ .

4. Removal and replacement of the Constitutional Court

12. In August 2018, the CPCCS-T terminated the mandate of the nine judges of the Constitutional Court²⁰ .

On September 19, 2018, the Transitional Council approved the terms of reference for the process of selection and appointment of the members of the Constitutional Court by the "Qualifying Commission". This Commission was composed of delegates from the public administration appointed by the Transitory Council²¹ . At the end of the process, the CPCCS-T could still object and impede certain candidates under the pretext of "social control".

The Transitional Council validated the appointment of the 9 new members of the Constitutional Court on January 30, 2019²² .

13. The Constitutional Court, which was initially declared "vacant" for 60 days, remained so for more than five months vacancy" for 60 days, remained so for more than five months.

On May 7, 2019, at the request of the President of the CPCCS-T, the "new" Constitutional Court issued an "interpretative opinion" that prohibits the future elected CPCCS-T from reversing decisions adopted by the CPCCS-T:

"The definitive Council of Citizen Participation and Social Control does not have the extraordinary powers that the "Transitional Regime of the Council of Citizen Participation and Social Control" granted to the Transitory Council. For this reason, it does not have the power to review the decisions made by the Transitory Council in exercise of those powers"²³ .

¹⁹ Transitional Council press release no. 212, September 19, 2018. Online: <https://www.cpccs.gob.ec/2018/09/la-corte-nacional-de-justicia-sera-evaluada-por-el-consejo-de-la-judicatura-definitivo/>

²⁰ El Comercio, "Consejo de Participación transitorio cesa a los nuevos jueces de la Corte constitucional," August 23, 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/consejo-participacion-ceso-corte-constitucional.html>

²¹ Transitional Council press release no. 214, September 19, 2018. Online: <https://www.cpccs.gob.ec/2018/09/se-aprobo-mandato-de-designacion-de-la-corte-constitucional-cc/>

²² Transitional Council press release no. 408 dated January 30, 2019. Online: <https://www.cpccs.gob.ec/2019/01/designados-nuevos-miembros-de-la-corte-constitucional-del-ecuador/>

²³ Constitutional Court, "Constitutional interpretation of the extraordinary powers "Transitional regime of the Council of Citizen Participation and Social Control"," number 2-19-IC/19, May 7, 2019, <https://portal.corteconstitucional.gob.ec/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=2-19-IC/19>

5. Removal and replacement of judges of the National Court of Justice (CNJ)

14. The "new Council of the Judiciary" has been charged by the CPCCS-T to evaluate the judges of the National Court of Justice in light of "citizen demand".

The Plenary of the Judiciary Council approved the different resolutions to "fix" the new rules for dismissing and appointing judges of the highest jurisdiction in the country²⁴.

The process of drafting the rules, establishing an "expert committee", preparing a report on the work of the judges, conducting written and oral examinations and reviewing appeals lasted only 7 months: from February to November 2019. At the end of this process, 70% of the judges of the National Court of Justice (hereinafter CNJ) were dismissed.

After the dismissals, the Council of the Judiciary resolved to *"Declare the extraordinary and emergent need for the appointment of temporary associate judges in the National Court of Justice", from among the judges of the Provincial Courts and the Contentious Administrative and Tax Courts of the country to replace those who had not passed the evaluation.*²⁵ The Judiciary Council resolved: *"To declare the extraordinary and emergent need for the appointment of temporary judges in the National Court of Justice", from among the judges of the Provincial Courts and Administrative and Tax Courts of the country to replace those who*

²⁴ Resolution No. 010-2019 of February 19, 2019, whereby it issued the *"Regulations for the comprehensive evaluation of judges and associate judges of the National Court of Justice of the Republic of Ecuador"*.

Resolution No. 035-2019 of March 26, 2019, whereby it issued the *"Instructions for the formation and operation of the committee of experts and the evaluation committee of the comprehensive evaluation process of judges and associate judges of the National Court of Justice of the Republic of Ecuador"*.

* Resolution No. 059-2019 of April 26, 2019, by which it resolved to *"Appoint the members of the Committee of Experts for the Comprehensive Evaluation of Judges and Associate Judges of the National Court of Justice"*.

Resolution No. 094-2019 of June 18, 2019, whereby it resolved to *"Approve the final report corresponding to the Comprehensive Evaluation Methodology for judges and associate judges of the National Court of Justice and its annex"*.

Resolution No. 103-2019 of July 2, 2019, whereby it resolved to *"Reform Resolutions 010-2019 and 035-2019, regarding the incorporation of social control in the process of comprehensive evaluation of judges of the National Court of Justice"*.

Resolution No. 116-2019 of July 12, 2019, whereby it resolved to *"Appoint the members of the Committee of Evaluators for the Comprehensive Evaluation of the judges and co-judges of the National Court of Justice"*.

Resolution No. 140-2019 of September 6, 2019, whereby it resolved *"To specify that the delivery of results to the person evaluated by this Committee consists of recording, through a record, that the indicators for the oral evaluation of orders and/or judgments have been met in terms of time (...)"*.

Resolution No. 141-2019 of September 7, 2019, whereby it resolved to *"Open the phase of oral substantiation of competencies in the exercise of their office of the judges and co-judges of the National Court of Justice and declare itself in permanent session during September 7, 8, 9 and 10, 2019"*.

Resolution No. 147-2019 of September 17, 2019, whereby it resolved: *"To specify the content within the evaluation criteria for the "quality analysis of admission / inadmissibility orders" for the judges of the National Court of Justice"*.

Resolution No. 163-2019 of October 23, 2019, whereby it resolved: *"To approve the final report of the results of the comprehensive evaluation process of the judges and co-judges of the National Court of Justice"*.

Resolution No. 187-2019 of November 15, 2019, whereby it resolved: *"To approve the final results report and declare the comprehensive evaluation process of judges and associate judges of the National Court of Justice concluded"*.

²⁵ Plenary of the Judiciary Council, Resolution No. 188-2019 of November 15, 2019.

had not passed the evaluation carried out. It resolved: *"To appoint the temporary co-judges for the National Court of Justice"*²⁶. According to the list, 26 temporary judges were appointed, who took office on December 2, 2019.

15. This process clearly undermines the principles of independence and impartiality of justice.

On September 18, 2019, the UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers (REIMA) reiterated his concern to Ecuador:

"In the context of the aforementioned issue and taking into account the allegations received, I would like to express my concern about the fact that the comprehensive evaluation process of the judges and co-judges of the National Court of Justice of the Republic of Ecuador may not meet international standards on the matter, should those allegations be founded. It should be emphasized that any judicial evaluation process must ensure effective compliance with the principle of judicial independence."

*The evaluation process and the criteria established could affect the principle of judicial independence and involve interference or intimidation in the judicial process. Moreover, there could be a risk that the purpose of the evaluation could be to justify removals or serious disciplinary proceedings, which would violate the principle of irrevocability and the standards for the imposition of disciplinary measures, suspension and removal from office. This risk is accentuated when, according to the allegations presented, the evaluation criteria established in the process conflict with the objective of a performance evaluation and include disciplinary issues that would have the purpose of removing judges from office"*²⁷.

On June 10, 2020, the REIMA returned to Ecuador:

"Without prejudice to the expansion of information on the facts of the case, I express my deep concern about the consequences that the new evaluation procedure for judges and associate judges of the National Court of Justice and the removal of judges and magistrates, as well as the conditions of instability in the performance of the functions of judges and temporary magistrates of the court, could have for the independence and impartiality of the judiciary in Ecuador."

In this regard, I note with concern the flaws in the Regulations for the comprehensive evaluation of judges and associate judges of the National Court of Justice, the composition of the Support Committee for the comprehensive evaluation, and the report prepared by the same that formed the basis for the decision taken by the plenary of the

²⁶ Plenary of the Judiciary Council, Resolution No. 197- 2019 of November 28, 2019.

²⁷ REIMA, September 18, 2019 appeal, AL ECU 14/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24848>

Judiciary Council to dismiss the judges and associate judges, apparently without due consideration of the applicable internal legal constraints.

In addition, I express my grave concern about the consequences of the appointment of temporary judges, apparently without a clear basis in domestic law, for the administration of justice in the National Court of Justice. I recall that the establishment of a situation in which the judiciary can be controlled, directed or influenced in the performance of its judicial functions is incompatible with the notion of an independent court"²⁸.

16. Several judges dismissed from the National Court of Justice have filed judicial appeals in Ecuador.

On December 21, 2021, the Constitutional Court invalidated the impeachment process of the CNJ judges:

"89. In this regard, this Agency has explained that: "Institutional judicial independence, both internal and external, is essential, in turn, to guarantee the individual or functional independence of the judges, so that the parties can exercise their right to an independent, impartial and competent judge, in accordance with Article 76, paragraph 7 (k) of the Constitution (...) Judicial independence is, therefore, a basic guarantee of due process of law, but not only because of the specific right to be judged by an independent judge, but also because of the independence of the judiciary. (...) Judicial independence constitutes, therefore, a basic guarantee of due judicial process, but not only because of the specific right to be judged by an independent judge, but also because the independence of the judge depends, in turn, on the due protection of other rights and principles, some of which are part of due process".

(...)

94. This Constitutional Court emphasizes that judicial independence is a right of the justiciable, a guarantee of due process and a principle that constitutes a structural element of the system of administration of justice.

(...)

141. In the present case, regarding the guarantee of determination of the judges and associate judges of the National Court of Justice, it is observed that constitutionally and legally their appointment has been established for a fixed term of nine years.

(...)

143. In this sense, (...) and therefore, it generated the violation of legal certainty, because the realization of an evaluation process on all the members of the National Court of Justice, whose consequence was the removal and whose opportunity and

²⁸ REIMA, appeal of June 10, 2020, AL ECU 1/2020, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=25333>

frequency were unpredictable, "would be equivalent to relativize the duration of their mandates, with the same effects of a "ratification".

(...)

149. In the American Convention on Human Rights, Article 9 contemplates the principle of legality by stating that: "No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under the applicable law at the time it was committed.

(...)

(...) the derivation of the sanctioning process by means of regulations infringes the principle of legality of the infringements and their sanctions"²⁹.

Judge JIMENEZ's concurring opinion, more in line with international standards, also states:

"14. However, in my opinion, the evaluation becomes detrimental to judicial independence when under ordinary constitutional conditions it: 1) is not carried out in accordance with the time limits and normative parameters pre-established in the law and, 2) unduly enters the sphere inherent to the jurisdictional activity, to justify the removal.

(...)

20. In my opinion, it is clear that on the basis of Resolution No. 10-2019, an evaluation was proceeded to regulate and execute an evaluation regarding this interpretative activity of the national judges that served as the basis for their unconstitutional removal. This evaluation is even confused in the aforementioned Resolution with a disciplinary process, an issue that is analysed in the majority vote. The evaluation resulted in that, based on a report issued by an ad-hoc committee, which does not exercise jurisdiction, the CJ removes national judges, without following the deadlines and procedures previously established by law, also violating judicial independence" (pp. 57-60)³⁰.

The analysis of Judges SALAZAR MARIN and LOZADA PRADO, more in line with international requirements, is along the same lines:

" 5.1. The guarantee of irrevocability was violated by the removal of national judges and associate judges without having guaranteed due process, in particular, by having violated the principle of legality, legal certainty and the procedure set forth in the Organic Code of the Judicial Function ("COFJ").

5.2. The guarantee of irrevocability of judges was violated by the removal of 70% of an Ecuadorian High Court outside the periods allowed by the Constitution.

²⁹ Constitutional Court of Ecuador, Decision No. 37-19-IN/21, December 21, 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBldGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlOC0xNDMxODhhY2UxOWUucGRmJ30=

³⁰ Constitutional Court of Ecuador, Decision No. 37-19-IN/21, December 21, 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcBldGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlOC0xNDMxODhhY2UxOWUucGRmJ30=

5.3. *The guarantee against external pressures was violated because the quality of the rulings and orders was used as the main and determining criterion to remove the judges and co-judges evaluated.*

(...)

30. *We consider that the mere fact that judges have been removed outside the renewal periods established in Article 187 of the Constitution is more than enough to constitute, by itself, a violation of the guarantee of removability. The unforeseen and arbitrary implementation of a comprehensive evaluation process outside the constitutionally established periodicity constitutes a breach of the State's obligation to refrain from removing judges for reasons other than the completion of the term or the commission of very serious misconduct.*

31. *In addition, this may sow doubts in a reasonable observer as to the motivations behind the evaluation process.*

(...)

34. *It is extremely relevant to consider that the process under examination in this case culminated with the removal of more than 70% of the judges, judges, co-judges and co-judges evaluated. Undoubtedly, what happened can be described as a massive removal of judges and associate judges from the National Court of Justice, the highest body for the administration of ordinary justice, which is extremely worrisome.*

(...)

39. *However, it is no less true that evaluating the quality of the rulings of a High Court can be at odds with judicial independence, by generating a chilling effect on judges. The control of the quality of the rulings may condition the judges with respect to the power in power. If a national judge is aware that the Judiciary Council may in the future use its legal criteria to remove him or her from office, this generates external pressure, in that it may condition the predisposition of judges to adopt decisions that are not to the liking of the Judiciary Council or even the political power in power" (pp. 65 et seq.)³¹*

17. Beyond the sanction of the evaluation process of the CNJ judges, protection/reparation actions have also been filed by some dismissed judges.

Thus, on December 30, 2021, the Provincial Court of Justice of Pichincha highlighted the seriousness of the violations of fundamental rights committed. For the Special Chamber, there is no doubt that *"In the specific case, the defendant entity through the Evaluation Process carried out to the judges and co-judges of the National Court of Justice in 2019 violated the right to due process; judicial independence and no removability of judges and co-judges elected for a fixed term."* The Provincial Court of Pichincha determined that the members in charge of

³¹ Constitutional Court of Ecuador, Judgment No. 37-19-IN/21, December 21, 2021, http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcNBldGE6J3RyYW1pdGUUnLCB1dWlkOidiODc2MzYwMy04MjZkLTRmYWVlOC0xNDMxODhhY2UxOWUucGRmJ30=

evaluating the judges of the CNJ were not impartial; they changed the rules and procedures during the evaluation process; they ruled on the quality of the sentences issued, without having any jurisdictional power; they intervened outside the constitutionally established deadlines; they illegally sanctioned the dismissed judges outside the existing disciplinary framework³².

18. After the decisions of the Constitutional Court and the Provincial Court of Pichincha, a controversy has arisen in Ecuador: what should happen with the decisions of the illegally appointed temporary judges³³ ?

In a press release dated January 3, 2022, the Judiciary Council bizarrely stated:

"The Plenary of the Judiciary Council (CJ) warned that the ruling of the Criminal Court of the Court of Pichincha - which favour judges removed from the National Court of Justice (CNJ) for failing the 2019 evaluation - contradicts the ruling of the Constitutional Court (CC), which already ruled on this issue.

At a press conference this Monday, January 3, 2022, the authorities of the CJ announced that they will file an appeal for amplification and clarification and an extraordinary action for protection against the Provincial Court's ruling, since its content goes against the pronouncement of the Constitutional Court (Ruling 37-19-IN/21).

(...)

The authorities recalled that on December 29, 2021, the institution filed before the CC, an Appeal for Clarification and Extension of Ruling 37-19-IN/21, since it did not consider that the CJ developed the evaluation of judges and judges of the CNJ, based on the exhortation formulated by the Transitional Participation Council"³⁴.

The serious institutional crisis created by the unconstitutional referendum of February 2018 continues.

6. Removal from office and appointment of a new Attorney General of the State (FGE)

19. Parallel to the replacement of the Judiciary Council, the Constitutional Court and the National Court of Justice, the CPCCS-T evaluated and replaced the State Attorney

³² SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA, Juicio Especial No. 17160202000272, Thursday, December 30, 2021, available at <http://consultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudicial/public/mobil.jsf;jsessionid=WFO+9cEDsGFtG5W78pm9EORD>

³³ Regarding this: Primicias, "Qué pasó en la evaluación de jueces de 2019 que tiene en apuros a la Judicatura", January 3, 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/evaluacion-destitucion-jueces-apuros-judicatura/>

³⁴ "Consejo de la Judicatura alerta que fallo provincial que favorece a exjueces contradice a Corte Constitucional", January 3, 2022, <https://www.funcionjudicial.gob.ec/es/saladeprensa/noticias/item/10593-consejo-de-la-judicatura-alerta-que-fallo-provincial-que-favorece-a-exjueces-contradice-a-corte-constitucional>

General (hereinafter FGE)³⁵, a key position in the "judicial apparatus". In fact, the FGE is the one who initiates and directs criminal proceedings.

After the dismissal of the FGE, several people have occupied this position before the elaboration of an appointment process through an evaluation by a Citizen Technical Selection Commission (evaluation value: 50/100), an Academic Commission (evaluation value 20/100) and the CPCCS-T (evaluation value 30/100). After the written tests regarding the legal knowledge of the candidates, "*Julio César Trujillo, president of the CPCCS-T, said that he expects that "the best lawyer" will be appointed as head of the Attorney General's Office, for his or her integrity, wisdom and honesty. Trujillo pointed out that the State Attorney General "is the most powerful official in Ecuador"*"³⁶. The table of evaluation of the candidates for the post of attorney general shows without a doubt that the attorney general, D. SALAZAR, was not chosen at all for her legal abilities (score obtained 10/20, inferior to other contestants) but for her political connections, allowing her to suddenly overtake much more deserving candidates than herself³⁷.

20. At the same time, the appointment of "temporary magistrates" in the Attorney General's Office, which is detrimental to the independence of the function, is a practice that continues to occur.

Thus, in a resolution dated May 31, 2021, the Judiciary Council states:

"(...) the detail of the vacant positions of Fiscal Agents as of this date, showing a total of twenty-nine (29) vacant positions; seventeen (17) are effectively vacant and twelve (12) are identified as vacant/dismissal.

(...)

Article 2: The Plenum of the Council of the Judiciary shall appoint the prosecutors and agents.

*temporary taxation in accordance with the determination of the extraordinary need set forth in the preceding article"*³⁸.

7. Conclusion

21. In its Rule of Law Report 2020, the European Commission recalled that:

³⁵ Plenary of the CPCCS-T, Resolution No. PLE-CPCCS-T-O-009-28-03-2018 of April 4, 2018.

³⁶ El Comercio, "El Cpccs difundió las notas obtenidas por los postulantes a Fiscal General en el examen escrito", 19 February 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-notas-postulantes-fiscal-examen.html>

³⁷ Diana Salazar obtained a total of 88.17 with the following scores: Citizens' Technical Selection Committee (49/50), Academic Committee (10/20) and CPCCS-T (28.17/30).

His immediate "rival", Merck Milko Benavides Benalcázar, obtained a score of 85.17 with the following marks: Citizens' Technical Selection Commission (50/50), Academic Commission (13/20) and CPCCS-T (22.17/30).

The most qualified lawyer, Javier Bosques Villena, only obtained a 77.91 with the following scores: Citizens' Technical Selection Committee (44.01/50), Academic Committee (15/20) and CPCCS-T (18.9/30).

³⁸ Judiciary Council, Resolution 070/2021, May 31, 2021, <https://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2021/070-2021.pdf>

"The European Union is based on a set of common values, such as fundamental rights, democracy and the rule of law. They are the basis of our societies and our common identity. No democracy can function without independent jurisdictions that protect fundamental rights and public freedoms and without an active civil society and a free and pluralistic media. (...)

The rule of law is enshrined in Article 2 of the Treaty on European Union as one of the common values of all Member States. It guarantees that all public authorities always act within the limits established by law, in accordance with the values of democracy and fundamental rights, and under the control of independent and impartial jurisdictions. (...)

The rule of law has a direct impact on the life of every citizen. It is a prerequisite for equal treatment before the law and for the defence of the rights of citizens of the Union. (...) The existence of national mechanisms that balance powers and maintain respect for the rule of law is essential to ensure that such restrictions on our rights are limited to what is strictly necessary and are proportionate, limited in time and subject to the control of national parliaments and jurisdictions"³⁹ .

22. It follows from the above that the balance of powers has completely broken down in Ecuador.

The country's most senior judges of the Constitutional Court and 70% of the members of the National Court of Justice were arbitrarily removed from office, in clear violation of international law. None of the dismissed judges had committed any serious misconduct. The guarantees of independence and impartiality of judges and prosecutors are no longer guaranteed.

Justice has become an instrument of politics to criminalize "opponents". Political persecution, through unfair criminal/administrative proceedings, has multiplied (see below). The magistrates who do not follow the "guidelines" of the new State Attorney General. The risk of being dismissed for decisions made in the exercise of their functions is high for those magistrates who do not follow the "guidelines" of the new State Attorney General. At the same time, the media amplify the message of authorities interfering in judicial proceedings, preparing public opinion for the most legally aberrant decisions, lacking any evidentiary basis or contrary to international law.

These elements indicate a breakdown of the rule of law in Ecuador.

B. Use of the judiciary for political persecution/repression

³⁹ European Commission, "Rapport 2020 sur l'état de droit La situation de l'état de droit dans l'Union européenne", 30 septembre 2020, COM(2020) 580 final, available at https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_2020_rule_of_law_report_fr_0.pdf

1. Contextualization

23. In Latin America, what can be called a "judicialization of politics" seems to have become widespread.

The expression means that political conflicts are resolved through the instrumentalization of justice. This phenomenon is so worrisome that it led the Inter-American Commission on Human Rights to request an advisory opinion from the Inter-American Court of Human Rights⁴⁰. Recalling what happened in Honduras, Paraguay and Brazil, the Commission considered that "*such situations should call attention to possible cases of distortion of the figure of impeachment, with the consequent risk of its arbitrary use as a cover for a parliamentary coup d'état*" (§10).

It should be noted that Ecuador opposes the issuance of this opinion and argues in favour of the inadmissibility of the request formulated by the Inter-American Commission on Human Rights⁴¹.

24. As this phenomenon grew, the Lawfare Institute was created, a body that studies the misuse of law as a "weapon" to achieve a political objective, as a tool to discredit a political enemy.

This organization describes the term "lawfare" as follows:

*"The term lawfare was created in 2001 by U.S. Army Major General Charles Dunlap and has since been studied at leading universities such as Harvard, for example. Lawfare is a powerful weapon to combat political enemies, combining apparently legal actions with extensive media coverage. The idea is to disrupt the enemy to the point where they become extremely vulnerable to unfounded accusations. Once weakened, they lose popular support and all power to react"*⁴².

This Institute analysed the case of Ecuador and considered that lawfare acted in several processes against various political figures linked to the movement of former President CORREA DELGADO⁴³.

⁴⁰ IACHR, " Demande d'avis consultatif : démocratie et droits de l'homme dans le cadre des procès politiques ", 13 October 2017, https://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitudud_13_10_17_fre.pdf

⁴¹ Ecuador, Observations transmitted on April 26, 2018 by the Embassy of Ecuador in Costa Rica, San José, ref. n°4-3-14/2018.

⁴² Free translation of:

"The term lawfare was created in 2001 by US army major General Charles Dunlap, and has been studied ever since in major universities such as Harvard, for example. Lawfare is a powerful weapon for fighting political enemies, combining apparently legal actions and widespread media coverage. The idea is to embarrass the enemy to the point where they become extremely vulnerable to the baseless accusations. once weakened, they lose popular support and any power of reaction".

Institute Lawfare - About the Institute - http://lawfareinstitute.com/?page_id=4

⁴³ Lawfare Institute, "Expert opinion issued on occurrence of lawfare in Ecuador," October 18, 2018, <http://lawfareinstitute.com/expert-opinion-issued-on-occurrence-of-lawfare-in-ecuador/>

25. As a reminder, on May 24, 2017, Mr. CORREA DELGADO voluntarily resigned from the presidency of Ecuador.

It was the candidate of his party, Alianza País, who won: Mr. Lenín Moreno. Consequently, everyone expected continuity of governmental action. However, from the first days of Moreno's government, decisions and measures were taken that completely broke with previous policies.

L. Moreno made a series of statements questioning the policies of his predecessor, accusing him of not having prepared the transition, of having over-indebted the country, of having created an economic crisis, of having poorly executed public works, of having announced his desire to distance himself from the Union of South American Nations (UNASUR), created in 2008 to "counterbalance" the OAS⁴⁴, etc., etc. Shortly after his appointment, President Moreno began to appoint people opposed to the outgoing president to public positions. Among the decisions taken by L. Moreno, the suppression of the political asylum granted to Julian Assange also testifies to the turnaround.

Elected in tandem with Lenín Moreno as vice president, Jorge Glas publicly accused the Moreno administration of improper practices. This provoked the beginning of an avalanche of judicial proceedings, violating the basic norms of a fair trial, against the now so-called "correístas"⁴⁵.

26. The intention to purge all officials loyal to the ideals and/or policies of former President CORREA DELGADO was clearly expressed.

⁴⁴ Lenín MORENO has finally announced that he will leave UNASUR in March 2019.

⁴⁵ The systemic and widespread nature of political persecution could fall within the scope of Article 7(1)(h) of the ICC Statute, which provides:

"Article 7 Crimes against humanity

For the purposes of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population, with knowledge of the attack:

a) Murder;

b) Extermination;

c) Slavery;

d) Deportation or forced population transfer;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;

f) Torture ;

g) Rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced sterilization or any other form of sexual violence of comparable gravity;

(h) Persecution of a self-identified group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds universally recognized as unacceptable under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court".

The Minister of Communication indicated in October 2018 that it was necessary to combat "correístas moles" throughout the Ecuadorian government⁴⁶. The newspaper El Comercio headlined "The Government announces a purge to 'correct' the Executive":

"'Mafia', 'fanatics', 'moles'. Those are the terms used by the Government authorities to refer to officials of their administration who remain from the previous Regime and who, according to them, have established a system to guarantee impunity for corruption."

(...)

"GRANDA therefore recommends to other ministers and secretaries of state to conduct an evaluation of employees and collaborators of the institutions they lead to identify more infiltrators."⁴⁷

With the argument of the "fight against corruption", as he did to disintegrate the judicial function, and despite the fact that he himself was for a long time a member of the State apparatus, Mr. Moreno and his government made war on the "correista moles":

"'Since his arrival to power in May 2017, and after discovering a whole series of alleged embezzlements that had left the public coffers empty, Moreno made the fight against corruption one of his main objectives (...)

(...)

"We have -and we have to be very sincere- Correa's moles entrenched in the whole system of the Government and State functions. We have many entrenched moles", acknowledged the national secretary in view of this possibility.

(...)

A man of Moreno's confidence and the most visible face of this new way of doing politics that the president of Ecuador has institutionalized, Michelena insists that the message of the fight against corruption is "forceful"⁴⁸.

27. The change of president in 2021 has not changed the authorities' discourse.

The intervention of the authorities in the judicial processes related to the "correístas" continues to be highlighted (see below). In 2022, the President of the Republic, Guillermo Lasso, acknowledged that *'he has set the goal that correísmo does not return to the Government, although, he said, he must hand over power to someone else, he stated that it must be someone*

⁴⁶ EFE, "Ecuador has correista moles throughout government system, says communication minister," October 24, 2018, <https://www.efe.com/efe/america/politica/ecuador-tiene-topos-correistas-en-todo-el-sistema-de-gobierno-dice-ministro-comunicacion/20000035-3791343>

⁴⁷ El Comercio, "El Gobierno anuncia una purga para descorreizar al ejecutivo," October 25, 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/gobierno-anuncia-purga-descorreizar-ejecutivo.html>

⁴⁸ Entorno Inteligente, "ANDRÉS MICHELENA: 'ECUADOR HAS CORREIST MOLES THROUGHOUT THE ENTIRE GOVERNMENT SYSTEM,'" April 24, 2018, <https://www.entornointeligente.com/andrs-michelena-ecuador-tiene-topos-correstas-en-todo-el-sistema-de-gobierno/>

*who respects the fundamentals of democracy, freedom, who believes in free enterprise, initiative, private entrepreneurship*⁴⁹.

28. An indispensable factor in lawfare is the creation of the figure of the enemy and the amplification by the press of the accusations made against this political enemy.

The media have been widely used to influence public opinion in Ecuador. This factor reflects the lack of a fair trial for the victims of these media campaigns.

The following cases only illustrate the phenomenon of lawfare against "correístas" in Ecuador. Many correístas, or alleged correístas, working in the administration have lost their jobs for this reason alone and/or are subject to discrimination/threats/evictions. Few have the knowledge, will and means to fight in court to try to enforce their rights. Lawfare has recently extended to indigenous leaders of the June 2022 protests (see below).

⁴⁹ Radio Pichincha, "Me he planteado la meta de que los correístas no puedan regresar al Gobierno, reconoce Guillermo Lasso", June 5, 2022, <https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/me-he-planteado-la-meta-de-que-los-correistas-no-puedan-regresar-al-gobierno-reconoce-guillermo-lasso/>

2. Rafael Correa Delgado's case

29. The former president of Ecuador CORREA DELGADO has been criminally prosecuted in two cases: the "Balda" case and the "Bribes" case.

He was directly and publicly presented by the authorities, with wide press coverage, as guilty of the alleged crimes.

On January 24, 2018, the UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers (REIMA) has made a call of attention to Ecuador regarding its international obligations and on the guarantees that must be given so that the trial was conducted in an independent and impartial manner⁵⁰. The Special Rapporteur reiterated his concern on January 28, 2019⁵¹. The Commission for the Control of Interpol's Files refused to disseminate the red notices requested by Ecuador⁵². When questioned by others involved in the "Bribery case", REIMA reiterated on July 9, 2021⁵³ and on January 26, 2022⁵⁴ its serious concern not only about the lack of independence and impartiality of the judges in this case, but also about the violation of other facets of the right to a fair trial.

30. In both cases, the legal figure of "effective collaboration" - denunciation of a defendant in exchange for a reduced sentence - was fundamental.

Although objective evidence is required to corroborate the informant's assertions, these cases lack it. In the "Balda" case, the main effective collaborator, Mr. Chicaiza, later admitted that he had been pressured, including by the president of the CPCCS-T, to implicate the former president⁵⁵.

In the "Bribery" case, the notebook that supported the testimony of P. Martínez, the effective collaborator, was, according to her own confession, written years after the criminal acts and was allegedly transcribed at the same time⁵⁶. P. Martinez could never be cross-examined by

⁵⁰ REIMA, appeal of January 24, 2018, OL ECU 1/2018, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=23589>

⁵¹ REIMA, appeal of January 28, 2019, AL ECU 2/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24304>

⁵² EuropaPress, "Interpol refuses for the third time to issue its 'red alert' against former Ecuadorian President Rafael Correa," August 18, 2021, <https://www.europapress.es/internacional/noticia-interpol-rechaza-tercera-vez-emitir-alerta-roja-contra-expresidente-ecuatoriano-rafael-correa-20210818233148.html>

⁵³ REIMA, appeal of July 9, 2021, AL ECU 2/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26537>

⁵⁴ REIMA, appeal of January 26, 2022, AL ECU 1/2022, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26981>

⁵⁵ Confirmado.net, "Caso Balda: Chicaiza afirmó que Trujillo le amenazó con 9 años de prisión si no implicaba a Correa en el supuesto secuestro de Balda", 3 January 2022, <https://confirmado.net/2022/01/03/caso-balda-chicaiza-afirmo-que-trujillo-le-amenazo-con-9-anos-de-prision-si-no-implicaba-a-correa-en-el-supuesto-secuestro-de-balda/>

⁵⁶ Confirmado.net, "Ecuador: le armaron la "causa de los cuadernos" a Rafael Correa pero los escribieron cuando ya no era presidente," September 7, 2019, <https://confirmado.net/2019/09/07/ecuador-le-armaron-la-causa-de-los-cuadernos-a-rafael-correa-pero-los-escribieron-cuando-ya-no-era-presidente/>

the defence. For this trial, the Attorney General's Office created an Internet page to propagate its accusations through, among other things, multiple video clips, accompanied by a martial music background⁵⁷. At the end of this procedure, Mr. CORREA DELGADO was sentenced as perpetrator of a crime of corruption by psychic influence⁵⁸, as head of a State qualified as a criminal organization, to 8 years imprisonment with prohibition to exercise his political rights. The duration and timing of the Bribes case attest to the political purpose of the prosecution. The entire case against almost 20 defendants, including the investigation, was processed in only 17 months, despite the pandemic that had justified the paralysation of all other proceedings in the country. The Court of Cassation resolved the 16 appeals introduced against the more than 820 pages of the appealed sentence in a record time of 20 days⁵⁹, and issued a 231-page sentence. Sentence that came out at the right time to prevent Mr. CORREA from running for the vice-presidency in the 2021 elections.

31. Former President CORREA DELGADO is also involved in a multitude of other, less successful, proceedings on sometimes totally implausible charges.

He is being investigated for "crimes against humanity/extrajudicial execution".⁶⁰ with respect to events that occurred on September 30, 2010, the day on which he himself was the victim of an attempted coup d'état condemned by the international community⁶¹.

The avalanche of denunciations, supported by the authorities and commented on in the press, is a sign of the lawfare underway in Ecuador.

32. On March 15, 2022, Belgium recognized the refugee status of Ecuador's former president⁶² as a result of political persecution in the form of unfair criminal proceedings.

This news was widely disseminated and brought to the attention of the Ecuadorian authorities. The Ecuadorian authorities continued to insist in the media that they would request extradition

⁵⁷ Cf: <https://www.fiscalia.gob.ec/caso-sobornos-2012-2016/>

⁵⁸ Confirmado.net, "Rafael Oyarte: "Qué pendejada fueron a meter en el fallo", sobre sentencia contra Correa de autoría mediata por influjo psíquico", 21 May 2021, <https://confirmado.net/2021/05/21/rafael-oyarte-que-pendejada-fueron-a-meter-en-el-fallo-sobre-sentencia-contra-correa-de-autoria-mediata-por-influjo-psiquico/>

⁵⁹ Primicias.ec, "Un trámite falta para que se ejecute la sentencia de Rafael Correa", 7 September 2020, Primicias.ec: <https://www.primicias.ec/noticias/politica/sobornos-decision-casacion/>

⁶⁰ El Comercio, "16 denuncias vinculadas con el 30-S apuntan a Rafael Correa", September 29, 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/denuncias-victimas-insubordinacion-rafael-correa.html>

⁶¹ El Comercio, '30S police insubordination', <https://especiales.elcomercio.com/2011/09/30s/>

The event has been unanimously condemned by most Latin American countries and the United States, as well as Unasur, the OAS, the UN and ALBA: https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_pol%C3%ADtica_en_Ecuador_de_2010#Reacci%C3%B3n_internacional

⁶² Rtbf, "Diplomatie : la Belgique accorde l'asile à l'ex-président équatorien Rafael Correa", 22 April 2022, <https://www.rtbf.be/article/diplomatie-la-belgique-accorde-l-asile-a-l-ex-president-equatorien-rafael-correa-10979730>

to Belgium, despite previous refusals by Interpol⁶³. This new media campaign was carried out despite the non-refoulement obligation implied by the political refugee status⁶⁴.

3. The case of Jorge GLAS

33. The case of former Vice President Jorge Glas is an emblematic example of lawfare.

Jorge GLAS took a very firm position against the new policy implemented by Lenín Moreno. As soon as the vice president, elected with the same electoral ballot as Mr. Moreno, publicly manifested his continued support for the policies backed by Mr. Correa Delgado, a political and judicial persecution against him began, supported by President Moreno⁶⁵.

34. Jorge Glas was accused for the first time in the "Odebrecht" case, linked to the famous "Lava Jato" operation in Brazil.

In October 2017, former Vice President Jorge Glas was arrested in the framework of the "Odebrecht case". Very quickly, in December 2017, he was sentenced to six years in prison, which was confirmed on appeal. It was in connection with this case that, in October 2018, the lawfare Institute analysed in detail the manner in which the former vice president was placed in pretrial detention, deprived of the office to which he had been elected and sentenced without the benefit of basic due process⁶⁶. The conviction of Jorge Glas was based mainly on the statements of Brazilian "effective co-operators" who could never be questioned by the defence. There is no objective evidence to support the accusations of the informants, who enjoyed total impunity in Ecuador. The case is now before the Inter-American Court of Human Rights (see below).

The reliability of the testimonies of Odebrecht employees has also been strongly questioned since former Odebrecht director Carlos Armando Paschoal revealed that he was "almost forced"

⁶³ Diariocorreo, "Cancillería pedirá a Bélgica extradición de Rafael Correa", May 29, 2022, <https://diariocorreo.com.ec/71285/nacional/contraloria-pedira-a-belgica-extradicion-de-rafael-correa>

⁶⁴ DW, "Belgium will dismiss extradition of Rafael Correa, says his defense," May 7, 2022, <https://www.dw.com/es/b%C3%A9lgica-desestimar%C3%A1-extradici%C3%B3n-de-rafael-correa-dice-su-defensa/a-61716250>

⁶⁵ La República, 'Diario "La Estrella de Panamá" habla de existencia de grave expediente contra Glas', 2 November 2016. Online: <https://www.larepublica.ec/blog/politica/2016/11/02/diario-estrella-panama-habla-existencia-grave-expediente-glas/>

El Comercio: Lenín Moreno: 'Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted', 4 August 2017. Online: <https://www.elcomercio.com/actualidad/leninmoreno-jorgeglas-guayaquil-carta-funciones.html>

El Universo " Pretrial detention for Jorge Glas, who accepts it 'under protest'," October 3, 2017. Online: <https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/03/nota/6412954/prision-preventiva-glas-quien-acepta-bajo-protesta>

⁶⁶ Lawfare Institute, "Expert opinion issued on occurrence of lawfare in Ecuador," October 18, 2018, <http://lawfareinstitute.com/expert-opinion-issued-on-occurrence-of-lawfare-in-ecuador/>

to build a case against former Brazilian president LULA DA SILVA for political purposes⁶⁷. Messages exchanged between the prosecutors in charge of the case against former President Lula and former judge Sergio Moro, who became Brazilian President BOLSONARO's Minister of Justice, have also been made public. The UN Human Rights Committee has recognized the violation of the presumption of innocence and the right to a fair trial and its implications for the exercise of the political rights of former Brazilian President Lula da Silva, falsely implicated in the "Lava Jato" case⁶⁸.

35. Former Vice President Jorge GLAS was also convicted in the "Bribery" case (see above), for which Belgium granted refugee status to Mr. CORREA DELGADO in view of the blatant injustice of the proceedings.

36. Jorge Glas is finally involved in a "Singue" case, related to the alleged illicit awarding of an oil contract.

This case has not yet been definitively resolved, but it should be noted that Ecuador has just lost before the International Arbitration Court against the company that won the contract⁶⁹.

37. Placed in pre-trial detention in October 2017, the former vice president was transferred in 2018 to a high-security prison where, in the face of constant threats against him, he had to live in isolation.

The situation was so dangerous that he obtained a provisional measure from the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to guarantee the preservation of his life and health⁷⁰.

Despite Mr. Glas' serious health problems and the precautionary measures ordered by the IACHR, Ecuador has kept him, without justification, in solitary confinement in a high security prison where he did not receive adequate health care. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) issued an opinion on September 9, 2021, stating "*65. The Working Group wishes to express its grave concern at the deteriorating health of Mr. Glas Espinel, as well as the dangerous conditions in which he is alleged to be detained. According to the source, Mr. Glas Espinel has received death threats during his detention at the Cotopaxi Social Rehabilitation Centre. In addition, other prisoners at the Centre have recently reportedly lost their lives as a result of violence inside the prison. The Working Group urges the Government of Ecuador to take immediate action to safeguard the safety and well-being of Mr.*

⁶⁷ Le Monde article, "Au Brésil, des révélations sur l'opération 'Lava Jato' ternissent encore l'image de la justice," July 18, 2019. Online: https://www.lemonde.fr/international/article/2019/07/18/de-nouvelles-revelations-sur-l-operation-lava-jato-ternissent-encore-l-image-de-la-justice-bresilienne_5490761_3210.html

⁶⁸ HRC, *Lula da Silva v. Brazil*, CCPR/C/134/D/2841, 27 March 2022, <https://tbinternet.ohchr.org/>

⁶⁹ El Universo, "Procuraduría planteará una acción de anulación al laudo arbitral que condenó a Ecuador a pagar \$ 11 millones a Gente Oil", June 9, 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/procuraduria-planteara-una-accion-de-anulacion-al-laudo-arbitral-que-condeno-a-ecuador-a-pagar-11-millones-a-gente-oil-nota/>

⁷⁰ IACHR, *Jorge David Glas Espinel regarding Ecuador*, December 31, 2019, RESOLUTION 69/2019, Precautionary Measure No. 1581-18, available at: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2019/69-19MC1581-18-EC.pdf>

*Glas Espinel, including the granting of alternatives to detention, including early release or other non-custodial measures"*⁷¹ .

Therefore, a habeas corpus application was filed to obtain an alternative mode of execution of the sentence. A judge accepted this request on April 9, 2022. As soon as this decision was made public, the highest authorities - the president of the Republic, the president of the National Court, the state attorney general, the president of the Judiciary Council, the president of the National Assembly's Auditing Commission and the attorney general - interfered in the judicial process⁷² . So much so that the president of the Constitutional Court, on April 25, 2022, issued a video in which he stated that "*the public manifestations of the president of the National Court of Justice and the president of the Judiciary Council seem to disregard the Constitutional Court's own competencies, the jurisprudence on habeas corpus and the institution of binding precedent. Furthermore, they constitute a clear interference in the functions of the Constitutional Court, which we firmly and emphatically reject*"⁷³ .

The judge who granted the habeas corpus was suspended from his duties⁷⁴ . On May 20, 2022, the Court of Santa Elena ordered that Jorge Glas be located immediately and taken back to the Regional Prison of Cotopaxi, but also that the Prosecutor's Office investigate the actions of the judge and the officials of the National Service of Attention to Detainees who intervened in the first instance proceedings⁷⁵ .

⁷¹ WGAD, Opinion 39/2021, September 9, 2021, A/HRC/WGAD/2021/39

⁷² OFFICIAL COMMUNIQUE | In view of the judicial decision granting habeas corpus in favor of J. Glas, we express our rejection and legal disagreement, as well as our concern for the abuse of constitutional actions available in: <https://twitter.com/ComunicacionEc/status/1512971387018911749?s=20&t=LABLd4mASEyNBs8n4GY2g> #ATTENTION | In view of the habeas corpus request filed by the defense of Jorge Glas, on whom there are 2 enforceable sentences and a pending process (on appeal), #FiscalíaEc informs the citizenship (communiqué). <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1512949416621129730?s=20&t=LABLd4mASEyNBs8n4GY2g> #FiscalíaContraElDelito, available at: https://twitter.com/CJudicaturaEc/status/1513003124046409729?s=20&t=ikGSx5iT6wx5ppFL_fXJFQ The Judicature Council @CJudicaturaEc Apr 10 #ComunicadoCJ | The Judicature Council to the country <https://www.dw.com/es/ecuador-refuerza-vigilancia-de-exvicepresidente-por-temor-a-fuga/a-61442839>, available at <https://www.dw.com/es/ecuador-refuerza-vigilancia-de-exvicepresidente-por-temor-a-fuga/a-61442839> Interview with Gen. (sp) Patricio Carrillo, Minister of the Interior in La Posta, April 12, 2022, available at <https://www.youtube.com/watch?v=FGm2C4tShLo> "Lasso: "I will never allow Ecuador to become a state under siege by drug trafficking gangs aided by corrupt or cowardly judges"", 24 April 2022, <https://srradio.com.ec/lasso-jamas-permitire-que-el-ecuador-se-convierta-en-un-estado-sitiado-por-bandas-de-narcotrafico-auxiliadas-por-jueces-corruptos-o-cobardes>

⁷³ The Constitutional Court of Ecuador to the media and the citizenry, April 24, 2022, available at <https://www.youtube.com/watch?v=eh176kM37fY>

⁷⁴ National Court of Justice requests suspension and investigations of judges who granted habeas corpus to Jorge Glas and the leader of Los Choneros, April 24, 2022, available at <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/corte-nacional-de-justicia-pide-suspension-e-investigaciones-a-jueces-que-dieron-habeas-corpor-a-jorge-glas-y-al-lider-de-los-choneros-nota/>

⁷⁵ Expreso.ec, "Corte de Santa Elena ordena la localización y captura de Jorge Glas", May 20, 2022, <https://www.expreso.ec/actualidad/corte-santa-elena-ordena-localizacion-captura-jorge-glas-127853.html>

38. At the end of May 2022, given the seriousness of the situation, the IACHR decided to expedite the processing of the appeal filed by Jorge Glas in the "Odebrecht" case⁷⁶.

4. The case of Carlos OCHOA

39. Mr. Carlos Alberto OCHOA HERNANDEZ was superintendent of communications under the CORREA administration.

On January 24, 2019, the Prosecutor's Office filed charges for the crime of forgery and use of false document, but finally charged him as a perpetrator of the crime of ideological forgery⁷⁷.

The former official assured that in his case the presumption of innocence and due process have been flagrantly violated by the Prosecutor's Office. Mr. OCHOA HERNANDEZ has requested political asylum in Bolivia⁷⁸. Interpol, an institution designed to facilitate international criminal cooperation, refused to execute the red notice request issued by Ecuador⁷⁹.

5. Case of Fernando ALVARADO ESPINEL

40. Mr. ALVARADO ESPINEL was Minister of SECOM (Secretariat of Communication).

Mr. ALVARADO ESPINEL was accused of having entered into an employment contract for media coverage with a person who *a priori* was not qualified to perform this function. This contract had a duration of 8 months and provided for a monthly remuneration of 1,500 dollars. Mr. ALVARADO ESPINEL was charged solely in his capacity as head of the administration where the "unqualified" person had been hired.

Mr. ALVARADO ESPINEL was placed on an electronic bracelet, with a prohibition to leave the country. However, he fled the country because of the persecution he was suffering.

In October 2018, Ecuadorian authorities requested a red notice for an alleged misappropriation of funds by his administration. Interpol refused to issue the red notice requested by Ecuador⁸⁰.

⁷⁶ RadioPichincha, "CIDH acelera el proceso en Caso Glas por presuntas violaciones a sus derechos humanos", June 3, 2022, <https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/cidh-acelera-el-proceso-en-caso-glas-por-presuntas-violaciones-a-sus-derechos-humanos/>

⁷⁷ El Universo, "Exsuperintendente Carlos Ochoa es llamado a juicio por el delito de falsificación ideológica", March 20, 2019, <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/20/nota/7242710/exsuperintendente-carlos-ochoa-es-llamado-juicio-delito/>

⁷⁸ Metro, "Sofía Espín and Carlos Ochoa are in Bolivia for political asylum," January 31, 2019, <https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/01/31/sofia-espino-carlos-ochoa-estao-bolivia-asilo-politico.html>

⁷⁹ El Universo, "Interpol denies red notice against exsuperintendent of Communication Carlos Ochoa," February 13, 2019, <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/13/nota/7187066/interpol-niega-difusion-roja-contraxsuperintendente-comunicacion/>

⁸⁰ Your name does not appear on the Interpol wanted list (red notice) - <https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-rouges>

In October 2020, a majority vote of the judges of the National Court of Justice (CNJ), before the inexistence of the crime of embezzlement, declared Alvarado's innocence. The then national judge and now president of the CNJ, Iván Saquicela, involved in the cases against former president CORREA and former vice-president GLAS, was the one who issued a different opinion, stating that the crime of embezzlement did exist.

The Prosecutor's Office appealed the majority decision. Despite the acquittal, the Prosecutor's Office also filed an appeal for Mr. ALVARADO ESPINEL to be sentenced for non-compliance with the precautionary measure ordered in 2018⁸¹. On November 10, 2020, the Ministry of Government published a photo of Fernando Alvarado Espinel on the country's "Most Wanted for Corruption" list⁸², despite the fact that there was no longer an arrest warrant.

6. Case of Vinicio ALVARADO

41. Vinicio ALVARADO was involved in the "Bribery" case, as well as former President CORREA and former Vice President GLAS.

On August 8, 2019, the Ecuadorian justice system requested Interpol to issue the red notice and proceed with the location and capture of the former secretary of the Administration, Vinicio Alvarado.

Interpol denied the Ecuadorian request. The international organization concluded that the request falls within the scope of Article 3 of its Constitution, and therefore it is not appropriate to approve it⁸³. This provision "*strictly prohibits (...) the Organization from any activity or intervention in questions or matters of a political, military, religious or racial nature.*"⁸⁴ Based on this article, Interpol indicated that the General Secretariat is not in a position to issue the red notice and that the information on Alvarado will be removed from the agency's databases.

7. The case of Walter SOLIS

42. Walter Solís was head of the National Water Secretariat (SENAGUA) and Minister of Public Works during Rafael Correa's administration.

He was charged in the "Bribery" case, as well as former President CORREA and former Vice President GLAS. On August 8, 2019, the Ecuadorian justice requested Interpol to publish the red notice and proceed to locate and capture Walter Solís. Interpol denied it.

⁸¹ El Universo, "Por el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente Fiscalía pide audiencia para formular cargos contra Fernando Alvarado", 17 November 2021.

⁸² Expreso.ec, "Fernando Alvarado, el más buscado en Ecuador por delitos de corrupción", November 10, 2020, <https://www.expreso.ec/actualidad/fernando-alvarado-buscado-ecuador-delitos-corrupcion-93336.html>

⁸³ Primicias.ec, "Interpol denies red notice request for Vinicio Alvarado", February 17, 2020, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/interpol-niega-solicitud-difusion-roja-vinicio-alvarado/>

⁸⁴ Article 3, Interpol Constitution.

On January 4, 2021, a criminal court of Ecuador's National Court of Justice (CNJ) again sentenced W. SOLIS to eight years in prison, found him guilty of "peculation" or embezzlement of public funds⁸⁵.

Despite this double conviction⁸⁶, given the political profile and violations of the right to a fair trial, Interpol did not issue a red notice for him⁸⁷.

On January 26, 2022, following an urgent action filed by W. SOLIS, C VITERI, V. BONILLA and R ALVARADO, the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers expressed serious concerns to Ecuador regarding compliance with its international obligations in relation to the right of access to an independent and impartial judge and to a fair trial⁸⁸.

8. Case of Ricardo Armando PATINO

43. Mr. PATINO was Minister of Foreign Affairs under the CORREA government.

At the end of October 2018, meeting with militants of the so-called 'citizen revolution', Patiño harangued in Latacunga: *"It is necessary to go on the offensive. We change the strategies of passive and organized resistance to combative resistance"*. He was prosecuted for the crime of "incitement to commit a crime" for having called members of the opposition to undertake a "combative resistance with peaceful means" in order to reject government policies and demand the release of the former Vice President of the Republic, Jorge GLAS⁸⁹.

A judge ordered on April 18th, 2019, the preventive detention of Ricardo Patiño, for his alleged participation in the crime of instigation and requested the red notice to Interpol⁹⁰. Mr. PATINO, then leader of the opposition political party filed an appeal before Interpol⁹¹, which once again refused to meet the Ecuadorian request.

⁸⁵ DW, "Ecuador: Walter Solis sentenced to jail for embezzlement," January 5, 2021, <https://www.dw.com/es/ecuador-walter-solis-condenado-a-la-c%C3%A1rcel-por-malversaci%C3%B3n/a-56129491>

⁸⁶ The Telegraph, "Dos juicios, prisión y extradición afronta Walter S.", March 10, 2020, <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/walter-solis-caso-sobornos>

⁸⁷ Your name does not appear on the Interpol wanted list (red notice) - <https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-rouges>

⁸⁸ REIMA, Appeal of January 26, 2022, AL ECU 1/2022, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26981>

⁸⁹ La República "Patino calls for "combative resistance" against Moreno's government", 28 octubre 2018, <https://www.larepublica.ec/blog/politica/2018/10/28/patino-llama-resistencia-combativa-contra-gobierno-moreno/>

⁹⁰ El Comercio, "Ricardo Patiño es prófugo de la Justicia; juez ordena su prisión y solicita su ubicación internacional a Interpol", 18 April 2019, <https://www.elcomercio.com/actualidad/prision-ricardo-patino-interpol-profugo.html>

⁹¹ El Universo, "Ricardo Patino espera que la Interpol deseche de difusión roja en su contra", 22 abril 2019. En ligne : <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/22/nota/7297289/patino-espera-que-interpol-deseche-pedido-difusion-roja-su-contra>

9. Alexis MERA Case

44. Alexis Javier Mera Giler, former Legal Secretary of the Presidency of the Republic of Rafael Correa (2007-2017) was involved in the Bribery case.

He is currently serving a sentence in the Ambato prison. Former judge Edgar Flores one of the magistrates who integrated the Court that in July 2019 resolved the appeal of the sentence, stated on the afternoon of Thursday, August 4, 2022, during his appearance in the process of political trial against the Judiciary Council (CJ): *"The former legal secretary of the Presidency, Alexis Mera, should have been released immediately when the preventive detention order was lifted against him for the crime of extortion, within the Green Rice (Bribes) case; however the National Court of Justice (CNJ) issued alternative measures "to avoid a scandal"*⁹².

10. Case of Maria DUARTE

45. María de los Ángeles Duarte, former minister of the Citizen Revolution (2007-2017) was involved in the "Bribes" case.

As for former president CORREA, she condemns that due process has not been complied with, that several legal principles have been violated in a case in which she should not even have been called to trial. She also accuses the media lynching and expressed that everything that is happening was to prevent Correa or someone of his entourage to participate in the electoral process⁹³.

María DUARTE took refuge in the Argentine Embassy in Quito, where she has been living with her son for more than two years as a humanitarian guest. In March 2022, Interpol again refused to issue the red notice requested by Ecuador⁹⁴. In view of the prolonged *de facto* detention of the former minister and her son, several NGOs have requested that she be formally granted diplomatic asylum⁹⁵.

11. Julian ASSANGE's case

⁹² El Universo, "'Alexis Mera was to be released, but alternative measures were dictated to avoid a scandal', revealed Édgar Flores, ex-judge of the National Court of Justice", August 4, 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/edgar-flores-exjuez-de-la-corte-nacional-de-justicia-revelo-que-alexis-mera-debia-ser-liberado-pero-se-dictaron-medidas-alternativas-para-evitar-un-escandalo-nota/>

⁹³ Confirmado.net, "María Duarte.- 'Hemos sufrido linchamiento mediático que antes se penaba y ahora es normal'", February 18, 2020, <https://confirmado.net/2020/02/18/maria-duarte-hemos-sufrido-linchamiento-mediatico-que-antes-se-penaba-y-ahora-es-normal/>

⁹⁴ Confirmado.net, "Interpol denies red notice against María de los Ángeles Duarte, former minister of Rafael Correa," March 9, 2022, <https://confirmado.net/2022/03/09/interpol-niega-difusion-roja-contra-maria-de-los-angeles-duarte-ex-ministra-de-rafael-correa/>

⁹⁵ La República, "ONGs piden a Argentina dar asilo a exministra María de los Ángeles Duarte", 18 April 2022, <https://www.larepublica.ec/blog/2022/04/18/ongs-piden-a-argentina-dar-asilo-a-exministra-maria-de-los-angeles-duarte/>

46. Julian Assange is an Australian journalist, activist and founder of WikiLeaks⁹⁶. His life has been dedicated to working for the right to freedom of the press and access to citizen information, with a social, political or protest purpose⁹⁷.

Assange published through the WikiLeaks platform information of public interest on cases such as bank corruption in Switzerland or Iceland, extrajudicial executions in Kenya, environmental crimes in the Ivory Coast, Internet censorship in China, or relevant information from other countries such as Saudi Arabia or Russia. Similarly, WikiLeaks published documents proving human rights violations and war crimes committed by the U.S. Army in Iraq and Afghanistan, as well as public documents relating to torture in Guantanamo.

As a result of the dissemination of information on serious violations committed by U.S. authorities, Assange was charged with 18 counts, 17 of which are framed under the *Espionage Act* of 1919, thus initiating a whole persecution from the United States against a journalist for the simple fact of publishing truthful information that proves the execution of very serious crimes. In view of this situation, Assange requested asylum before the Ecuadorian authorities, which was granted on August 16, 2012, during the government of Rafael Correa. The asylum was requested at the Ecuadorian Embassy in London.

During the time Assange remained in the diplomatic mission, multiple human rights organizations intervened and demanded his freedom, such as the Working Group on Arbitrary Detention of the UN Human Rights Council, which condemned Sweden, the United Kingdom and the other countries involved for keeping the journalist in a situation of detention contrary to international law⁹⁸. However, the Government of Lenín Moreno, in Ecuador, violating the principle of non-refoulement of any refugee that the Inter-American Commission on Human Rights itself had reminded him of, withdrew his asylum status on April 11, 2019, suspended the Ecuadorian citizenship to which he had acceded, and allowed the British Metropolitan Police access to the diplomatic mission to arrest the founder of WikiLeaks⁹⁹.

⁹⁶ WikiLeaks is a news portal that has been publishing documents of public interest from anonymous sources since 2006. The platform designed a system of IP firewalls to prevent anyone, not even the news platform itself, from identifying the *whistleblowers* who submitted the documents. Thanks to the information published by WikiLeaks, multiple human rights violations around the world have been revealed.

⁹⁷ <https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/el-gobierno-de-ecuador-concede-asilo-politico-julian-assange-fundador-de-wikileaks>

⁹⁸ Le Monde, Un groupe de travail de l'ONU estime que Julian Assange a été "détenu arbitrairement", 5 février 2016, https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/02/05/julian-assange-a-ete-detenu-arbitrairement-par-la-suede-et-la-grande-bretagne-estime-l-onu_4859913_4408996.html

Special Rapporteur on the right to privacy, 18 April 2019, AL ECU 6/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24557> ;

Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 18 April 2019, AL ECU 5/2019,

<https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24556>;

All UN decisions on the J. Assange case can be found on this site: <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/>

⁹⁹ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47902652>

It was then that the United States revealed what was already known, that there was a secret case against him in the Eastern District of Virginia, United States, formally requesting his extradition. Since then, Assange has been held in provisional detention in Belmarsh, a maximum-security prison known as "Britain's Guantanamo Bay". His legal team is currently fighting to prevent his extradition to the United States.

47. Julian ASSANGE's case differs somewhat from the other cases described in this chapter. However, it is relevant in the sense that his refugee status, and consequently his nationality, was withdrawn in violation of the right to a fair trial and an effective remedy, to satisfy the political interests of the government of Lenín Moreno, which has taken a clear turn in favour of the United States of America.

In its advisory opinion of May 30, 2018, the Inter-American Court of Human Rights had unanimously concluded that:

"The right to seek and receive asylum in the framework of the Inter-American system is configured as a human right to seek and receive international protection in foreign territory, including with this expression the status of refugee according to the relevant United Nations instruments or the corresponding national laws, and territorial asylum according to the various Inter-American conventions on the matter.

(...)

The principle of non-refoulement is enforceable by any foreign person, including those seeking international protection, over whom the State in question is exercising authority or who is under its effective control, regardless of whether he or she is in the land, river, maritime or air territory of the State.

(...)

The principle of non-refoulement not only requires that the person not be returned, but also imposes positive obligations on States".¹⁰⁰

However, Julian ASSANGE's fundamental rights have been grossly violated by Ecuador. In an interpellation on October 2, 2019, the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment noted the numerous violations of Julian ASSANGE's human rights by the government of Lenin MORENO:

"Given that your Excellency's Government has provided no credible evidence for the existence, on 11 April 2019, of a medical emergency, imminent security threat or other temporary need to terminate Mr. Assange's asylum, which he had been in since 2012, and given the very serious risks to the human rights of Mr. Assange in the in the event of his extradition to the United States, it does not appear convincing and plausible that

¹⁰⁰ IADH Court, Advisory Opinion OC-25/18 of May 30, 2018 requested by the Republic of Ecuador, <https://www.refworld.org/es/pdfid/5b48db9a4.pdf>

it would have been impossible or unreasonable for your Excellency's Government to allow my mandate to conduct an on-site visit to Mr. Assange before removing him from the Embassy.

(...)

Indeed, since his arrest by British police on April 11, 2019, concerns have been proven correct by the repeated and ongoing violations of his fair trial rights in the British criminal and extradition proceedings conducted against him

(...)

For the same reasons, the assurances given by the United Kingdom to His Excellency's Government that Mr. Assange would not be extradited to a country where he might face the death penalty or face torture, or ill-treatment lack the credibility and reliability necessary for Mr. Assange's removal to the United Kingdom to be permissible under international law. As this mandate has consistently observed diplomatic assurances have proven incapable of providing the protection required under the peremptory principle of non-refoulement

(...)

In summary, it is my considered opinion that, at least since March 2018, the primary factors, stemming from the responsibility of the Ecuadorian authorities, cumulatively and continuously inflicted severe mental and emotional suffering on Mr. Assange, thus producing the medical symptoms typical of victims of psychological torture

(...)

In sum, while there may be situations in which diplomatic asylum may be lawfully terminated, the rule of law requires that any such decision be made in a regular proceeding subject to due process of law, including the possibility for the affected person to present and appeal to a judicial authority. Moreover, none of the circumstances raised by your Excellency's Government appear to have created a situation of such gravity or urgency as to justify or require the termination of Mr. Assange's diplomatic asylum. The prohibition of non-refoulement in the face of a real risk of torture, being absolute, non-derogable and peremptory, overrides any other consideration

(...)

As accurately determined by the WGAD in its decision of 4 December 2015, in light of these risks, Mr. Assange's presence at the Ecuadorian Embassy could not at any time be considered voluntary, but amounted to arbitrary confinement, although admittedly not attributable to Ecuador, but to Sweden and the United Kingdom. I also acknowledge that the initial five years of years of cohabitation between Mr. Assange and the staff of the Ecuadorian Embassy from June 2012 to May 2017 appear to have been marked by respectful and friendly relations.

However, following the election of the current Ecuadorian government in 2017, the Ecuadorian authorities have reportedly begun to deliberately create and maintain circumstances that make Mr. Assange's living conditions increasingly difficult and oppressive.

(...)

*These findings by the undersigned mandate holder and two independent medical experts experienced and specialized in examining torture victims provide "reasonable grounds to believe" that Ecuadorian officials have contributed to Mr. Assange's psychological torture. As a matter of international law, therefore, Your Excellency's Government does not have the discretion to simply refute of refute these findings but has a clear and unequivocal obligation to conduct a prompt and impartial investigation into these allegations."*¹⁰¹ .

12. Ola BINI case

48. Ola Bini is a Swedish software developer, programmer, and Internet activist. He works for the Centre for Digital Autonomy on privacy, security and cryptography issues¹⁰² .

Dedicated to promoting the use of free software, he has been domiciled in Ecuador since 2013.

For allegedly being linked to Julian Assange, WikiLeaks and Correismo¹⁰³ was detained and arrested at Quito airport as he was preparing to board a flight to Japan on April 11, 2019¹⁰⁴ . This follows the detention of the WikiLeaks founder at the Ecuadorian Embassy in London. Within the arraignment hearing, Interior Minister María Paula Romo pointed to Bini as a suspect of participating in a plot to destabilize Moreno's government¹⁰⁵ .

On May 11, 2019, the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur for Freedom of Expression Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States sent a letter to the Ecuadorian government:

¹⁰¹ Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 2 October 2019, AL ECU 15/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24861>

¹⁰² The Center for Digital Autonomy, a non-profit organization incorporated in Ecuador and Spain "for the purpose of making the Internet a safer place for everyone," of which he is technical director, released a statement⁷ detailing his contributions and noting that he had been ranked by Computerworld as Sweden's #6 developer (in 2008), and that he "created two programming languages" and is "a long-time activist for free software, privacy and transparency." The statement listed his contributions to loke, Seph, JesCov, JRuby, JtestR, Yecht, JvYAMLb, JvYAML-gem, RbYAML, Costillas, ActiveRecord-JDBC, Jatha, Xample and JOpenSSL. <https://autonomia.digital/2019/04/12/ola-bini-arrest.html>

¹⁰³ Expreso.ec, "El paso de Ola Bini por Ecuador", 12 April 2019, <https://web.archive.org/web/20190412234313/https://www.expreso.ec/ciencia-y-tecnologia/olabini-informatica-casoassange-telecomunicaciones-GE2754118>

¹⁰⁴ Infobae, "A collaborator of Julian Assange was arrested while trying to leave Ecuador bound for Japan," 11 April 2019, <https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/11/un-colaborador-de-julian-assange-fue-detenido-al-intentar-salir-de-ecuador-rumbo-a-japon/>

¹⁰⁵ La Republica, " Arraignment hearing against Swede fingered as close to Assange," 12 April 2019, <https://www.larepublica.ec/blog/2019/04/12/audiencia-de-formulacion-de-cargos-contra-sueco-senalado-como-cercano-a-assange/>

"We would like to express our dismay, particularly, because the arrest and charges against Mr. Bini appear to be connected to his public support and friendship with Julian Assange, as well as his work and activism in the area of privacy (...).

express our concern about the circumstances surrounding the arrest and detention of Mr. Bini (...)

we recall that any person detained must be informed, at the time of arrest, of the reasons for his detention, and notified, without delay, of the charge against him, in accordance with Articles 9 (2) of the ICCPR and 7 (4) of the ACHR. The authorities must provide sufficient information to enable the person to challenge the reasons for detention (...).

Finally, we refer to the allegation that Mr. Bini was detained in an unofficial place of detention on April 11, and that he was repeatedly denied access to his lawyers. On this point, we express our concern about the alleged lack of safeguards to prevent rights violations"¹⁰⁶ .

On July 26, 2019, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression and the Special Rapporteur for Freedom of Expression Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States again questioned the Ecuadorian government:

"Despite noting the release of Mr. Ola Bini from prison, we still remain concerned about the ongoing investigations and criminal proceedings against him, given the lack of information we observe as to the reasons that may underlie these proceedings (...).

Although the aforementioned evidence could qualify for Mr. Bini's preventive detention under Ecuadorian domestic law, no response has been given regarding the legal or factual basis for the accusations against him, for which reason we would like to remind your Excellency's government of its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights"¹⁰⁷ .

The Observation Mission that has been monitoring Bini's case for the past few years and which includes Ecuadorian and international civil society organizations such as Access Now, Article 19, Electronic Frontier Foundation (EFF), the Free Software Association of Ecuador (ASLE), Brazil de Fato, Karisma Foundation, Indymedia Ecuador, and others has delivered its report on

¹⁰⁶ Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Special Rapporteur for Freedom of Expression Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States, interpelacion del 11 de Mayo 2019, UA ECU 7/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24566>

¹⁰⁷ Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Special Rapporteur for Freedom of Expression Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States, interpelacion of July 26, 2019, UA ECU 12/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24774>

May 2022¹⁰⁸. The report recalls that at the time of his arrest, Bini was imprisoned without charges being filed against him, and the then president of Ecuador, Lenín Moreno, went so far as to claim that the activist may have attempted to interfere in the U.S. elections¹⁰⁹. After 70 days in jail, Bini was released, but the judicial process against him continues. Bini is banned from leaving Ecuador and his bank accounts have been frozen. The report also explains that Fabian Hurtado, an expert witness in Bini's case who prepared a report on the prosecution's charges against Bini, has been charged with obstruction of justice and his home was the subject of a police search operation. Amnesty International says Hurtado, who worked for Bini's defence, had his electronic equipment violently confiscated and that the police action was an "intimidating" act that undermines the digital rights activist's defence¹¹⁰. Human rights organizations claim that the Swedish programmer is the target of a campaign of judicial harassment. The prosecution is relying on Article 234 of the Penal Code to charge Bini with the crime of non-consensual access to a computer, telematic or communications system. The penalty is three to five years in prison. His defence is seeking to have the case dismissed. After years of postponements, Bini's trial was scheduled to resume on May 16, 2022, but there is still no sentence.

Despite this long period of time since his arrest and the obligation to try people within a reasonable time, Ola Bini is still under a ban on leaving the country and is under constant surveillance.

13. Diplomatic asylum after the October 2019 "protests".

49. After the persecution of the leaders of the social protest of October 2019 (see below), seven 'correístas' decided to take refuge in the Mexican embassy, where they were granted diplomatic asylum and then a safe-conduct to flee Ecuador¹¹¹.

14. The use of the judiciary to pressure the legislature

50. The 2021 presidential elections brought Guillermo LASSO to power.

¹⁰⁸ Access Now, Article 19, Electronic Frontier Foundation (EFF), the Free Software Association of Ecuador (ASLE), Brasil de Fato, Karisma Foundation, Indymedia Ecuador, and others, "Informe de un proceso paradigmático para los derechos humanos en la era digital: El caso Ola Bini", May 2022, https://www.eff.org/files/2022/05/09/final_report_ola_bini_case_in_spanish_informe_final_caso_ola_bini_en_espanol.pdf

¹⁰⁹ See also, Amnesty International, "Équateur, Ingérence dans la procédure pénale contre Ola Bini," 26 août 2019, <https://www.amnesty.be/infos/actualites/equateur-ingerence-ola-bini>

Amnesty International, "Le droit d'Ola Bini à un procès équitable menacé," 6 septembre 2019, <https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/equateur-droit-bini-proces-equitable-menace>

¹¹⁰ Amnesty International, "Équateur. Une violente descente de police menace le droit d'Ola Bini à un procès équitable", 6 septembre 2019, <https://www.amnesty.org/fr/latest/press-release/2019/09/ecuador-allanamiento-violento-pone-en-riesgo-juicio-justo-ola-bini/>

Amnesty International, "Équateur. Les autorités doivent surveiller le procès contre le défenseur des droits numériques Ola Bini", 3 mars 2020, <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2020/03/ecuador-authorities-must-monitor-trial-digital-defender-ola-bini/>

¹¹¹ CNN, "Militantes correístas asilados en embajada viajan a México", January 9, <https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/09/alerta-militantes-correistas-asilados-en-embajada-viajan-a-mexico/>

Although he has been elected president, his party has only 11 seats out of 137 in the National Assembly. The National Assembly elected Guadalupe LLORI, from another political party, as president.

However, several incidents led her peers to create a commission to determine whether Ms. LLORI respected the law and her competencies. This process is, of course, highly political.

51. Ms. LLORI was seconded by Chairman LASSO¹¹².

Ms. LLORI and some parliamentarians tried to prevent the normal development of the parliamentary activity. They filed several appeals to prevent her dismissal and/or to obtain precautionary measures to interrupt the evaluation process decided by the plenary of the National Assembly¹¹³.

The Prosecutor General has opened an investigation against 93 deputies¹¹⁴.

On May 31, 2022, Ecuador's National Assembly finally removed its president, Guadalupe Llori, from office for failing to perform her duties and for allowing the chamber to fall into disrepute¹¹⁵.

52. This episode is evidence of another attempt to use justice as a political weapon.

III. Violation of the right to form a political party of the most important political force in the country and lawfare within the electoral system.

53. One of the founding elements of any democracy is the possibility for citizens to organize themselves into political parties, so that they can bring their economic, social and ideological sensibilities to bear on the governance of the country.

54. Rafael CORREA DELGADO was one of the historical founders of the political party Alianza País, a political party founded in April 2006 from the alliance of several leftist parties.

¹¹² El Universo, "Lasso announces support to Guadalupe Llori to avoid her dismissal", May 29, 2022, <https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/143516-lasso-anuncia-el-respaldo-a-guadalupe-llori-para-evitar-su-destitucion>

¹¹³ El Comercio, "Juzgado acepta medidas cautelares y frena proceso de destitución de Llori", May 27, 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/juzgado-medida-cautelar-frena-destitucion-guadalupe-llori.html>
Primicias, "Asamblea: Nuevas medidas cautelares buscan salvar a Llori de la remoción", 24 May 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/nuevas-medidas-cautelares-salvar-llori-remocion/>

¹¹⁴ El Comercio, "Fiscal Salazar defiende investigación contra 93 asambleístas denunciados por Llori", May 7, 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/fiscal-salazar-investigacion-asambleistas-denuncia-llori.html>

¹¹⁵ DW, "Ecuador's National Assembly ousts Guadalupe Llori," June 1, 2022, <https://www.dw.com/es/asamblea-nacional-de-ecuador-destituye-a-guadalupe-llori/a-61992607>

Rafael CORREA DELGADO ran for election, with Lenín MORENO as his vice-presidential candidate, in 2006. After winning that election, Mr. CORREA DELGADO was re-elected consecutively.

In 2017, Mr. CORREA DELGADO announced his decision not to run for re-election after his two terms and proposed his former vice president, Lenín MORENO, to succeed him.

However, the liberal turn given by Lenín Moreno after his victory in 2017 caused a split within the Alianza País party. As a result, supporters of the Citizen Revolution movement attempted to create a new political party. This was prevented.

55. The public authorities, and more specifically the National Electoral Council (hereinafter "CNE"), remodelled after the arrival of the CPCCS-T, systematically and arbitrarily denied any attempt by the "correístas" to form a new political movement:

- On December 29, 2017, the Correístas presented the formal conditions to request permission to initiate the process of creation of the "Revolución Ciudadana" party. On January 23, 2018, the CNE denied the authorization to initiate the process of creation of this party, arguing that the name "Revolución Ciudadana" was the slogan that identified Movimiento *Alianza País*. The CNE also justified its refusal arguing that on December 13, 2017, a request had been made by a person close to the then Executive Secretary of Alianza País to reserve the name "Partido de la Revolución Ciudadana"¹¹⁶.

- On March 6, 2018, in a new attempt to achieve legal recognition of their party, the Correístas filed a request before the CNE to initiate the process of legalization of the party "Movimiento de la Revolución Alfarista: Hacia un–Nuevo Polo Ciudadano" (Movement of the Alfarista Revolution: Towards a New Citizen Pole). On April 5, 2018, the CNE again rejected the request, this time arguing that the name "Alfarista" could not be granted to an organization that claims to be leftist and socialist, since Alfaro, according to the CNE, would be a person linked to political liberalism. The appeals against this refusal have all remained without effect¹¹⁷.

56. Faced with these repeated blockades, the activists of the citizen revolution contacted a political movement that was already accredited, the Movimiento Acuerdo Nacional (hereinafter MANA).

¹¹⁶ Colectivo de Abogados por la Democracia, "Judicialización de la política y bloqueo político: El caso del "proceso" de la Revolución Ciudadana en Ecuador", pp. 14-15. <http://economiaenbicicleta.com/wp-content/uploads/2018/09/Judicializaci%2n-de-la-Pol%Altica.pdf>

¹¹⁷ Colectivo de Abogados por la Democracia, "Judicialización de la política y bloqueo político: El caso del "proceso" de la Revolución Ciudadana en Ecuador", pp. 15-17. <http://economiaenbicicleta.com/wp-content/uploads/2018/09/Judicializaci%2n-de-la-Pol%Altica.pdf>

Mr. Juan Pablo Arévalo was, in this context, designated as legally responsible for the collection of citizens' signatures on behalf of this movement in order to be able to run in the 2019 local elections. In a few months, 462,000 signatures were collected. These signatures were to be submitted to the CNE. The former representative of MANA, who had resigned on May 4, 2017, then suddenly announced the expulsion from the movement of Mr. Rafael CORREA DELGADO and nine others. The CNE refused to recognize the capacity of Juan Pablo Arevalo to act on behalf of MANA.

Thus, the alliance with the MANA party¹¹⁸ was avoided.

Supporters of the citizen revolution finally managed, *in extremis*, to run in the local elections of March 24, 2019, through the political movement 'Compromiso Social Listas 5' (FCS). Despite the evident lack of communication to the population about this participation, List 5 won the elections in two highly populated provinces of Ecuador, Pichincha and Manabí, and came second in the most populated province of the country, Guayas¹¹⁹.

57. Therefore, the FCS positioned itself favourably for the February 2021 presidential and parliamentary elections.

Suddenly, despite his previous participations, he came under attack by the Office of the State Comptroller General. In August 2019, the Comptroller's Office issued a report stating that some parties, including Fuerza Compromiso Social, did not meet the legal requirement to participate in the elections. The plenary of the National Electoral Council (hereinafter CNE) dismissed said report¹²⁰. Despite this decision, on June 19, 2020, the Comptroller General of the State issued a press release stating, once again, that the FCS would not have complied with the legal requirements to be able to run in the elections. The CNE members were subjected to extreme pressure, threatened with fines and dismissal¹²¹. No one dared to oppose the request for the suppression of the four political parties, including Fuerza Compromiso Social¹²². The party could not run in the 2021 general elections¹²³.

¹¹⁸ NotiMundo, "Correístas suspend delivery of signatures to the CNE due to controversy with MANA faction", August 9, 2018, <https://notimundo.com.ec/correistas-suspenden-entrega-de-firmas-al-cne-por-controversia-con-faccion-de-mana/>

El Comercio, "El CNE deja sin posibilidades de participación a la facción correísta del movimiento MANA", 23 August 2018, <https://www.elcomercio.com/actualidad/cne-mana-participacion-faccion-correista.html>

¹¹⁹ Telesur, "Ecuador's CNE publishes sectional election results," March 26, 2019, <https://www.telesurtv.net/news/Correismo-se-consolida-como-primera-fuerza-electoral-en-Ecuador-20190326-0007.html>

¹²⁰ El Comercio, "Fuerza Compromiso Social, movimiento del correísmo, podrá presentar candidatos para las elecciones del 2021", January 3, 2020, available at <https://www.elcomercio.com/actualidad/fuerza-compromiso-social-correismo-elecciones.html>

¹²¹ Expresso.ec, "El contralor Pablo Celi se enfrenta a la justicia electoral", July 12, 2020, available at <https://www.expresso.ec/actualidad/contralor-pablo-celi-enfrenta-justicia-electoral-15585.html>

¹²² El Comercio, "Suspension of four groups will be the defense of CNE councilors," July 21, 2020, available at <https://www.elcomercio.com/actualidad/suspension-consejeros-cne-partidos-politicos.html>

¹²³ El Universo.com, "TCE niega recurso a Fuerza Compromiso Social a resultados de la segunda vuelta", May 5, 2021, online: <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/tce-niega-recurso-a-fuerza-compromiso-social-a-resultados-de-la-segunda-vuelta-nota/>

During this process, the Secretary General of the Cabinet of the President of Ecuador, Juan Sebastián ROLDÁN, also made this thinly veiled threat:

*"It is a good risk to be a correísta candidate because justice will focus its eyes on those who are not yet fugitives or convicted. There are few left"*¹²⁴ .

In relation to these presidential and parliamentary elections, on October 5, 2020, the European Parliament asks a question addressed to the Vice-President of the Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Commission and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, on the subject, underlining that *"a number of political parties, including the party backed by former President Rafael Correa, have been prevented from standing, [and] have complained that the government has placed legal obstacles in the way of the electoral process to prevent fair elections"*¹²⁵ .

58. Faced with the attacks and the scenario of the possible elimination of the FCS, on July 8, 2020, the Revolución Ciudadana decided to form an alliance with the Movimiento Centro Democrático Listas 1, which was called UNES, Unión por la Esperanza (Union for Hope).

The UNES list was finally able to run in the elections, without being able to include any of its historical leaders, due to the lawfare against them, which prevents them from participating against them, which prevents them from participating.

During the 2021 election campaign, the lawfare continued, with authorities claiming that supporters of the "Citizens' Revolution" were criminals linked to the drug cartel. Former President Lenin Moreno accused Andres Arauz and Rafael Correa of being linked to Colombian drug trafficking¹²⁶. Electoral and judicial authorities seconded the outgoing president's accusations¹²⁷.

¹²⁴ Tweet, "Roldán speaks of imprisoning Correísmo candidates," August 8, 2020.

See "Juan Sebastián Roldán amenaza a "candidatos del correísmo" y dice que la justicia pondrá "los ojos sobre ellos", August 7, 2020, available at <http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/juan-sebastian-roldan-amenaza-a-candidatos-del-correismo-y-dice-que-la-justicia-pondra-los-ojos-sobre-ellos/>

¹²⁵ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-005442_EN.html (free translation).

¹²⁶ Europa press.es, "Moreno to request information from Colombia on alleged financing of Arauz campaign by ELN", 2 February 2021, <https://www.europapress.es/internacional/noticia-moreno-pedira-informacion-colombia-presunta-financiacion-campana-arauz-parte-eln-20210202120111.html>

¹²⁷ El Universo, "Tribunal Contencioso desecha denuncia de campana contra Andrés Arauz por pruebas de COVID-19; Fiscalía pide información a Colombia sobre supuestos aportes del ELN", 12 February 2021, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/tribunal-contencioso-desecha-denuncia-de-campana-contra-andres-arauz-fiscalia-pide-informacion-a-colombia-sobre-supuestos-aportes-del-eln-nota/>

However, the ARAUZ-RABASCALL duo won the first round of the presidential election with 32% of the vote¹²⁸.

During the campaign for the second round of the presidential elections, the attorney general, who was a political appointee to her post (see above), officially invited the Colombian Prosecutor's Office to a high-profile judicial cooperation for the alleged financing of the campaign of the correista candidate, Andrés ARAUZ, by the ELN¹²⁹. The attorney general even issued a TV spot with the Colombian prosecutor¹³⁰, despite the fact that the cooperation was only being carried out in the framework of a preliminary investigation, which was dropped after the elections.

Faced with this "intervention" of the judiciary in the electoral campaign, the UN Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García-Sayán, expressed his concern about the judicial harassment of the progressive candidate, Andrés ARAUZ¹³¹. On March 2, 2021, UN Secretary General Antonio GUTERRES called on "*all stakeholders to act responsibly and in accordance with institutional and legal frameworks in the run-up to the April 11 presidential runoff elections*"¹³².

"Agency France Presse" (AFP) also identified the use of "*fake news*" aimed at discrediting Andrés ARAUZ and raising fears for the country's economic future¹³³.

¹²⁸ BBC article, "Ecuador election goes into run-off with Arauz in the lead", February 8, 2021, available at <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55934856>

¹²⁹ Primicias, "Fiscalía pide asistencia a Colombia sobre supuesto aporte del ELN a Andrés Arauz," February 9, 2021, available at <https://www.primicias.ec/noticias/politica/fiscalia-asistencia-colombia-aportes-eln-andres-arauz/>

La Hora, "Fiscal de Colombia viaja a Ecuador por posible financiación del ELN a candidato correista", February 12, 2021, available at <https://lahora.com.ec/noticia/1102340580/fiscal-de-colombia-viaja-a-ecuador-por-posible-financiamiento-del-eln-a-candidato-correista> - (free translation)

Semana, "El viaje del fiscal Barbosa a Ecuador y los informes que entregó sobre el candidato de Rafael Correa," April 11, 2021, available at <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-viaje-del-fiscal-barbosa-a-ecuador-y-los-informes-que-entrego-sobre-el-candidato-de-rafael-correa/202124/>

¹³⁰ "#ATTENTION. | #prosecutorEc y @FiscaliaCol meet for the delivery of information found in the devices of alias 'Uriel', of the ELN, in the framework of criminal cooperation between both countries." - Tweet from the Ecuadorian Prosecutor's Office, February 12, 2021, available at <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1360359986992467972>

"I thank @FiscaliaCol and your Attorney General for having accepted the request for information that you have delivered to us today. It is a very important exercise in the fight against criminality, we are together and this is how we will fight it." @DianaSalazarM2" - Tweet from Ecuador's Attorney General's Office; February 13, 2021, available at <https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1360363112688402434>

¹³¹ Confirmado.net, "Diego Garcia-Sayan-UN Special Rapporteur: Ecuador judges and prosecutors should not interfere, directly and indirectly, in the tasks of electoral bodies and processes," March 4, 2021, <https://confirmado.net/2021/03/04/diego-garcia-sayan-relator-especial-de-la-onu-ecuador-los-jueces-y-fiscales-no-deben-interferir-de-manera-directa-e-indirecta-en-las-tareas-de-organos-y-procesos-electorales/>

¹³² UN, "Secretary-General Welcomes Peaceful Elections in Ecuador", 2 March 2021, SG/SM/20611, available at <https://www.un.org/press/en/2021/sgsm20611.doc.htm>

¹³³ For example:

AFP, "No record of Maduro sending 'revolutionary hug' to Andres Arauz," April 11, 2021, available at <https://factual.afp.com/no-hay-registro-de-que-maduro-haya-enviado-un-abrazo-revolucionario-andres-arauz>

59. The repeated interventions of the authorities arbitrarily using their power to prevent the participation of candidates, the creation of a party, the consolidation of an electoral alliance, to intimidate candidates or to continuously tarnish the reputation of UNES candidates, constitutes a serious violation of the political rights of the direct victims of these attacks, but also of Ecuadorian democracy in general.

IV. Violent crackdown on social protest in October 2019.

60. Having elected a "leftist" president, Ecuadorians were massively dissatisfied with the liberal policies implemented under the MORENO government.

In early October 2019, the Ecuadorian government approved decrees eliminating public fuel subsidies. On October 3, 2019, Ecuadorian citizens, supported by the indigenous movement, rose up against these measures. Some analysts point out the causes of the citizen mobilization:

"We can see behind these demonstrations the weariness of the population, which has been subjected for two and a half years to very aggressive neoliberal structural adjustment policies: suspension of certain rights, of social benefits, etc. Since Moreno came to power in 2017, there has been a shift to the neoliberal right, seeking to reduce the role of the State and the tax burden. There has been a huge tax amnesty for the richest in society. At the same time, the country suffered a fiscal deficit that forced the government to go into debt with the International Monetary Fund. The IMF granted a loan of US\$4.2 billion but demanded a reduction in state and public administration expenditures, which led to numerous layoffs. This contrasts with President Correa's previous term, which was a period of social progress, reduced inequality and economic growth. Correa's government had doubled the GDP in ten years and did so without making neoliberal reforms"¹³⁴ .

"A large social movement is shaking Ecuador, marked by road and oil well blockades in the Amazon, demonstrations and strikes. For researcher Marie-Esther Lacuisse, President Moreno has not kept his ecological and social promises and is paying the price for it"¹³⁵ .

61. The reaction of the government of Lenín Moreno was to declare a state of emergency.

AFP, "La fotografía del candidato ecuatoriano Andrés Arauz con Nicolás Maduro es un montaje," December 11, 2020, available at. <https://factual.afp.com/la-fotografia-del-candidato-ecuatoriano-andres-arauz-con-nicolas-maduro-es-un-montaje>

AFP, "Andrés Arauz no se refirió a la caravana indígena de Ecuador en eventos con migrantes en EEUU," February 23, 2021, available at. <https://factual.afp.com/andres-arauz-no-se-refirio-la-caravana-indigena-de-ecuador-en-eventos-con-migrantes-en-eeuu>

¹³⁴ IRIS, " Manifestations en Equateur: symbole d'un revirement annoncé ", 7 October 2019. <https://www.iris-france.org/140720-manifestations-en-equateur-symbole-dun-revirement-annonce%E2%80%89>

¹³⁵ Reporterre, " Equateur : un pays révolté par le retour du FMI dans la politique ", 11 October 2019, <https://reporterre.net/Equateur-un-pays-revolte-par-le-retour-du-FMI-dans-la-politique>

These presidential decrees, denounced as unconstitutional¹³⁶, allowed the criminalization and arrest of those who participated in the demonstrations.

During the month of October, the government systematically criminalized the most politically influential protesters. In total, at least 1192 people were arbitrarily detained between October 3 and 13, 2019. They were carried out searches to journalists, and members of the political party Social Commitment for the Citizen Revolution (FCS).

On October 9, 2019, the Inter-American Commission on Human Rights (hereinafter IACHR) expressed concern about the excessive use of force by State agents. It also noted allegations of pressure exerted to destroy evidence of police violence¹³⁷. On October 17, 2019, the IACHR announced an on-site investigation¹³⁸.

On October 11, 2019, the Ecuadorian State was also questioned by the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the right to freedom of peaceful assembly and of association, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples and by the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. This interpellation follows the receipt of allegations regarding *"serious violations of the rights to freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association in Ecuador, in the context of the demonstrations that have taken place since October 3, 2019 following the declaration of a state of emergency, including excessive use of force against demonstrators (including children, adolescents, pregnant women, elderly people, and persons with disabilities), members of indigenous peoples and journalists, which has caused at least 929 detainees and hundreds of injured, and at least 5 people have reportedly lost their lives while participating in the protests. We have also received information about alleged mass detentions, and events that could constitute torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment in detention centres"*¹³⁹.

¹³⁶ NORTESUR, "The dictatorship in Ecuador: the unconstitutionality of the states of exception decreed by Lenín Moreno", p.5, October 13, 2019, <https://nortesur.media/2019/10/13/la-inconstitucionalidad-de-los-estados-de-excepcion-decretados-por-lenin-moreno/>

¹³⁷ IACHR, "IACHR and its Special Rapporteurship Concerned about Excessive Use of Police Force against Demonstrators and Attacks on Journalists during Protests in Ecuador," October 9, 2019, press release 252, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/252.asp

¹³⁸ IACHR, "IACHR Announces Observation Mission to Ecuador in Response to Protests," October 17, 2019, press release 262, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/262.asp

¹³⁹ Working Group on Arbitrary Detention; the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples; and of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Interpellation of 11 October 2019, UA ECU 16/2019, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24900>

62. On October 13, 2019, the Government reached an agreement with the indigenous movement¹⁴⁰ which initiated mobilizations.

The repeal of one of the controversial decrees and the lifting of austerity measures in the indigenous territories placated the citizens and put an end to the insurrection.

63. According to human rights organizations, the police repression left at least 8 dead and 1400 wounded. Among those arrested, 32 people were prosecuted for "rebellion"¹⁴¹.

In 2019, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights expressed its "*concern at the manner in which the state of emergency proclaimed on 3 October 2019 was implemented following protests against the adoption of austerity measures, in particular with regard to the suspension of freedom of association.*" It is also concerned about the violence related to social protests against austerity measures, which in some cases was accompanied by acts of vandalism, and the use of force, sometimes disproportionate, against protesters and human rights defenders, including by the army (art. 2, para. 1)¹⁴².

On January 14, 2020, the IACHR presented its observations on its visit to Ecuador in relation to the social protests that took place from October 3 to 13, 2019. It noted the violation of multiple fundamental rights in the context of these protests:

"A. Attacks and assaults on the press during protests

The escalation of violence resulted in the obstruction of the work of the press, due to a series of attacks against journalists and media outlets, both by public security forces and by demonstrators (...)

(...) They also denounced permanent cuts in Internet access by the telephone platforms of Claro and Movistar. (...)

B. Violations of the rights to freedom of expression and association

(...) Through a public statement, different alternative media outlets that covered the demonstrations in Ecuador denounced the government for technological and digital censorship and indicated that their rights had been intervened and violated. (...)

C. Violations of personal integrity in the context of social protests

During its working visit, the Inter-American Commission received documentary information, audio-visual material and hundreds of testimonies related to the violations of personal integrity in the context of the social protests in Ecuador.

¹⁴⁰ Le Monde, "Equateur : gouvernement et indigènes trouvent un accord pour sortir de la crise", October 14, 2019.

¹⁴¹ ANRed, "Ecuador: Lenin Moreno persecutes communicators and political opponents," October 18, 2019, <https://www.anred.org/2019/10/18/ecuador-lenin-moreno-persigue-a-comunicadores-y-opositores-politicos/>

¹⁴² UN CESCR, "Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l'Équateur", 14 November 2019, E/C.12/EQU/CO/4, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fEQU%2fC.O%2f4&Lang=fr

(...)

These damages were allegedly caused by the violent actions of the law enforcement officers through "mounted police", kicks, blows, verbal aggressions and, even, by firing pellets and/or tear gas directly at the demonstrators or at those who were in the surrounding areas. As a consequence, dozens of people were injured, some of them seriously, due to fractures caused by the impact of projectiles or by pellets lodged in various parts of the body. (...)

In addition to the above, the IACHR received at least nineteen testimonies of people who had lost their sight totally or partially, through the loss of an eye, due to the impact of tear gas bombs or pellets used to disperse the protests, both by police officers and military (...)

The information available to the IACHR reveals that the aggressions and point-blank shots fired by police officers and military forces were also directed against those providing medical assistance to demonstrators. (...)

(...)

In relation to the above, the Inter-American Commission concludes that the violent reaction and the disproportionate use of force by police and military agents in the context of the operations to disperse the demonstrations would be the main cause of the high number of injured persons. As a consequence, the IACHR warns that the State has failed to comply with its obligations to respect and guarantee the right to personal integrity, as enshrined in the American Convention.

D. Affections to life in the context of social protests.

(...) In the framework of its working visit to Ecuador, the IACHR received information from the Ombudsman's Office, civil society organizations and testimonies from the victims' families about eleven people who reportedly lost their lives in the context of the social protests in the country. (...)

(...)

In particular, the IACHR warns that the precipitation of two people from the San Roque bridge occurred during a police operation whose circumstances would indicate a repressive and violent action by State agents in a context that would allow the use of alternative conflict resolution measures (...)

E. Arrests, criminalization and stigmatization of protesters in the context of social protests.

(...) in the period from the start of the social protests on October 2, 2019, until October 13, 2019, a total of 1228 people were arrested

(...)

the IACHR received diverse information of numerous detentions in which due process was allegedly violated. (...)

The IACHR is alarmed by the information received indicating torture and other cruel, inhuman or degrading treatment in the context of detentions. In this regard, according to the information provided by civil society organizations, as well as that received through testimonies, numerous detainees were strongly verbally and physically assaulted; they were allegedly threatened, beaten with fists, kicks and metal batons, pepper sprayed in the face and forced to perform physical exercises. (...)

In terms of criminalization, the IACHR received information on the use of the criminal justice system against protesters and social and opposition leaders. (...)

Finally, the IACHR notes that on several occasions these criminalization processes are preceded and accompanied by stigmatization campaigns (...)

On December 6, the IACHR granted precautionary measures in favour of Paola Verence Pabón Caranqui, Prefect of Pichincha; Virgilio Hernández, Executive Secretary of the Movimiento de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana; and Christian Fabián González Narváez. The IACHR, in deciding to grant the measures, noted that among the evidence that can be taken into account when assessing the risk situation of the proposed beneficiaries, following alleged threats and acts of harassment allegedly related to their work as political opposition leaders, it considered the allegedly stigmatizing statements of high-ranking authorities in which they are directly accused of being responsible for the altercations"¹⁴³ .

These findings confirm that the Ecuadorian authorities have seriously violated the fundamental rights and freedoms of Ecuadorians, including political opponents, by arbitrarily detaining them, mistreating them and violating their right to a fair trial.

In a report made a year after the harsh repression of social protest in October 2019, "Alianza por los Derechos Humanos Ecuador" -which groups 18 organizations- pointed out:

- Denial of the facts by the authorities.
- The lack of concrete measures to address the social challenges identified by the population.
- Violation of the constitutional right to protest.
- The focus on certain as a tactic to avoid the media.
- Asymmetrical criminal prosecutions leading to impunity for law enforcement and lack of redress.
- The abuse of the use of the state of emergency by the Executive¹⁴⁴ .

¹⁴³ IACHR, "IACHR Issues Observations Following Visit to Ecuador," January 14, 2020, press release 008, https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/008.asp

¹⁴⁴ Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, "Verdad, Justicia y Reparación: A un año de la protestas sociales Octubre 2019 - Informe actualizado, Ecuador", pp.94-95, October 15, 2020, https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-10/informe_actualizado_paroec.pdf

64. This management of a social protest through repressive measures that violate fundamental rights and freedoms constitutes a serious violation of the rule of law and the values that are the basis of any democratic state.

The abusive use of the state of emergency in the face of an economic and social crisis, the violent repression of demonstrators, the impunity of the forces of law and order, the criminalization of protest leaders, etc. were repeated in June 2022 (see below).

V. Massive violation of the right to life and respect for the physical integrity of persons deprived of their liberty

65. The Ecuadorian penitentiary system is experiencing great difficulties.

In 2019, when the Ministry of Justice was eliminated by the Government, the new National Service for the Comprehensive Care of Adults Deprived of Liberty and Adolescent Offenders (SNAI) received a budget of \$98 million. In 2020, it was reduced by 43%: only about \$55 million was allocated. By 2021, the budget was increased by \$8 million, reaching \$63 million¹⁴⁵.

It is estimated that in some social rehabilitation centres there is only one guide for every 20 to 30 people¹⁴⁶. There is also a lack of personnel in other areas that are indispensable for true social rehabilitation: educators, doctors, psychiatrists, psychologists.

The lack of management and funding of the prison system has led to "monstrous" overcrowding. The pandemic has increased this problem. *"To reduce the number of prisoners in the midst of the coronavirus outbreak, the government commuted the sentences of those convicted of minor offenses, reducing overcrowding from 42% to 30%"*¹⁴⁷. Unfortunately, this was not enough to ease tensions.

66. In February 2021, extremely violent riots broke out in several Ecuadorian prisons. Some 80 people died.

The IACHR recalled *"the unavoidable legal duty of the State of Ecuador, as guarantor of the rights of persons deprived of liberty, to take concrete actions to guarantee their life and personal integrity. As part of this obligation, the State must adopt measures aimed at preventing and controlling possible outbreaks of violence in detention centres, such as disarming detainees, imposing effective controls to prevent the entry of weapons and other prohibited items, investigating and punishing acts of violence in prison facilities, and preventing the*

¹⁴⁵ "Prison in Équateur", https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_en_%C3%89quateur#cite_note-5

¹⁴⁶ Primicias, "Cárceles tienen déficit de casi 70% de guías penitenciarios," August 3, 2020, <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/carceles-tienen-deficit-setenta-por-ciento-guias-penitenciarios/>

¹⁴⁷ Dayly Sabah, "At least 75 killed in prison riots in Ecuador," February 23, 2021, available at <https://www.dailysabah.com/world/americas/at-least-75-killed-in-prison-riots-in-ecuador> (free translation).

actions of criminal organizations with a presence in prisons"¹⁴⁸ . The IACHR also indicated that through "a February 23 communication addressed to the President of Ecuador, the "Ombudsman's Office" indicated that *intra-prison violence has deepened since 2018, with a progressive increase in violent deaths*"¹⁴⁹ .

67. After this terrible episode, the government did not take adequate measures and the massacres inside the prisons were repeated.

In a report on persons deprived of liberty in Ecuador, published in March 2022, the IACHR stated:

"Ecuador is going through a serious penitentiary crisis of a structural nature, characterized by unprecedented levels of violence and corruption within the prisons, and that responds to the abandonment of the penitentiary system by the State for years, as well as the absence of a comprehensive criminal policy. (...) In this sense, we observe the use of a policy that favours incarceration to solve citizen security problems. This, in turn, has resulted in an exponential increase in incarceration in recent years, excessive use of pretrial detention, obstacles to replace alternative measures to imprisonment, and the impossibility of guaranteeing the social reintegration of detainees.

2. In this scenario, during 2021 a total of 316 persons deprived of liberty died in State custody, and hundreds of others were injured, in a succession of violent attacks carried out in a planned manner by organized groups formed by the detainees themselves" (p.8);

"In this regard, the Commission has pointed out that States must establish strategies to dismantle the criminal structures rooted in prisons that control various criminal activities, such as drug and alcohol trafficking and the collection of extortion fees from other prisoners.

(...)

These serious acts of violence are evidence of a collapsed penitentiary system. There is consensus among the various actors interviewed that the events that occurred in 2021 are not isolated and that the country is facing a "crisis in the penitentiary system", the product of a structural situation that responds to the abandonment of the penitentiary system by the State" (p.86-87);

"the IACHR issues the following recommendations to the State of Ecuador:

(...) 1.1. Guaranteeing the life, security and personal integrity of the persons in its custody, as well as of the officials who perform their duties in detention centres, must be a priority of the State. In this scenario, it is recommended that the State prioritize the

¹⁴⁸ IACHR, "IACHR condemns the death of 79 people in Ecuadorian prisons," February 26, 2021, available at <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/044.asp>

¹⁴⁹ IACHR, "IACHR condemns the deaths of 79 people in Ecuadorian prisons," February 26, 2021, available at <https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/044.asp>

urgent implementation of effective actions aimed at preventing and controlling all types of violence in prisons, as well as re-establishing control of prisons" (p.88)¹⁵⁰.

68. Despite sustained international attention¹⁵¹, the new government has not taken the necessary immediate structural measures.

On May 9, 2022, another massacre took place, claiming 43 new victims and as many families in mourning¹⁵².

On May 10, 2022, Amnesty International reported:

"Since December 2020, at least 390 people have been killed in Ecuador's prisons. Following the May 9 massacre at the Santo Domingo de los Tsáchilas prison, in which at least 44 prisoners died, and 10 others were injured, Erika Guevara-Rosas, Amnesty International's director for the Americas, stated that:

"Being deprived of liberty in Ecuador has become almost a death sentence. Repeated mistakes by Ecuadorian authorities in managing the prison crisis have resulted in the deaths of hundreds of people. Authorities must address, once and for all, the structural causes of this problem, such as overcrowding, corruption and impunity, through a comprehensive prison policy focused on human rights. All deaths and violations of the human rights of persons deprived of their liberty must be thoroughly, independently and impartially investigated.

"In response to this latest massacre, President Guillermo Lasso announced the transfer of "six criminal gang leaders" to other prisons. However, these superficial measures are insufficient to fulfil the main obligation of the authorities in this context: to protect the lives and safety of thousands of people who are deprived of their liberty and who are currently at risk""¹⁵³.

¹⁵⁰ OAS-IACHR, "Persons Deprived of Liberty in Ecuador", Report Approved by the Inter-American Commission on Human Rights on February 21, 2022, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Informe-PPL-Ecuador_VF.pdf

¹⁵¹ See also, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Interpellation of 27 October 2021, AL ECU 3/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26685>

¹⁵² El País, "Al menos 43 presos mueren en un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador", May 9, 2022, <https://elpais.com/internacional/2022-05-09/al-menos-20-presos-mueren-en-un-nuevo-enfrentamiento-en-una-carcel-de-ecuador.html>

¹⁵³ AI, "Ecuador: In light of new prison massacre, authorities must address structural causes", 10 May 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/ecuador-prison-massacre-authorities-must-address-structural-causes/> (Free translation).

Despite the state of emergency declared by President Lasso in the prison system since September 2021, the massacre of 13 inmates was again reported on July 19, 2022¹⁵⁴, bringing the number of victims since 2020 to over 400. Some detainees were dismembered and decapitated.

69. Persons deprived of their liberty are a vulnerable category of people who are totally under the control of the State.

The failure to guarantee respect for the fundamental rights that are the right to life and the protection of the physical integrity of persons, due to the absence of adequate governmental measures for years, attests to the serious violation by Ecuador of the rights that are at the core of any democratic state.

VI. Impoverishment, increased violence, state of emergency, repression and criminalization of democratic debate

70. In 2019, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights raised some concerns regarding Ecuador, such as "*the impact of the austerity measures of the 2018-2021 Prosperity Plan and of the agreement concluded with the International Monetary Fund under the Extended Fund Facility on the enjoyment of economic, social and cultural rights*"¹⁵⁵.

The lack of a social response adapted to the needs of the population has led to an increase in the poverty rate. World Bank data show that, after declining from 2008 (35.1%) to 2017 (21.5%), the ratio between the poor population and the national poverty line has steadily increased to reach 33% in 2020¹⁵⁶. The appeal of the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation illustrates the lack of contemplation of the basic needs of the most deprived:

"Although it is not intended to prejudge the accuracy of the above information, the possibility that water cut-offs due to lack of payment may be repeated to families in vulnerable and poor situations in Ecuador, after the expiration of the Humanitarian Support Law, in which case their human rights would be violated, is a cause for concern. This concern is accentuated in the current Covid19 pandemic context, given the need

¹⁵⁴ 20Minutos.es, "Al menos 13 muertos por una nueva masacre entre reclusos en una cárcel de Ecuador", 19 July 2022, <https://www.20minutos.es/noticia/5031726/0/al-menos-13-muertos-por-una-nueva-reyerta-en-una-carcel-de-ecuador/>

¹⁵⁵ UN CESCR, "Concluding observations on the fourth periodic report of Ecuador," 14 November 2019, E/C.12/EQU/CO/4, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/324/90/PDF/G1932490.pdf?OpenElement>

¹⁵⁶ "Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté national (% de la population) - Ecuador", 2007-2020, <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SI.POV.NAHC?end=2020&locations=EC&start=2007&view=chart>

*for affected people to have access to water and sanitation in order to comply with health recommendations. (...) water cut-offs for lack of payment to people in situations of vulnerability and poverty constitute human rights violations that all States must avoid at all costs in compliance with existing international human rights obligations"*¹⁵⁷ .

71. The more difficult living conditions are not unrelated to increased insecurity and violence.

Thus, *"In parallel to the prison crisis, Ecuador has been dealing since last year with a wave of violence that has triggered an increase in the number of murders, especially those committed by hired assassins, and has led to the declaration of recurring states of exception and emergency, increasing police and military manpower in the streets and imposing curfews. The last state of exception was decreed two weeks ago, without having stopped the violent deaths. As of March, there are 959 homicides in Ecuador. Last year, there were almost 2,500, 80% more than in 2020"*¹⁵⁸ .

In response to the increased violence, Ecuador has not taken the necessary structural measures, but rather, as in the case of the October 2019 protests, has introduced a state of emergency, i.e. mobilized the armed forces to maintain order, suspended citizens' rights and introduced curfews¹⁵⁹ .

72. Economic, social and environmental problems particularly affect Ecuador's indigenous populations.

In 2019, the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights expressed that it was "concerned about the persistence of systemic discrimination, de facto and through violent manifestations, towards some population groups, in particular (...) indigenous peoples"¹⁶⁰ .

On May 4, 2022, Amnesty International reported:

"Authorities and companies in Ecuador threaten the Amazon with extractivist laws, policies and projects (mainly oil and mining) that have not obtained the free, prior and informed consent of indigenous peoples or that have affected their territories, environment, health, water or food, Amnesty International said today, as it released the report Ecuador: The Amazon in danger.

¹⁵⁷ Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, appeal of 24 February 2021, OL ECU 1/2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=26079>

¹⁵⁸ El País, "Al menos 43 presos mueren en un nuevo enfrentamiento en una cárcel de Ecuador", May 9, 2022, <https://elpais.com/internacional/2022-05-09/al-menos-20-presos-mueren-en-un-nuevo-enfrentamiento-en-una-carcel-de-ecuador.html>

¹⁵⁹ Le Temps, "L'état d'exception décrété en Equateur en raison des violences liées au narcotrafic", October 19, 2021, <https://www.letemps.ch/monde/letat-dexception-decrete-equateur-raison-violences-liees-narcotrafic>

¹⁶⁰ UN CESCR, "Concluding observations on the fourth periodic report of Ecuador," 14 November 2019, p.5, E/C.12/ECU/CO/4, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/324/90/PDF/G1932490.pdf?OpenElement>

"Ecuador must guarantee the consent of Indigenous Peoples to legislation, policies and projects that may put their existence at risk. The Amazon is also a critical ecosystem for overcoming the climate crisis that threatens all life on our planet, and Indigenous Peoples have protected it for centuries"¹⁶¹ .

73. In June 2022, following the rejection of the discussion attempts initiated by the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (Conaie), the largest organization of indigenous peoples in the country¹⁶² undertook a national strike action, also blocking some highways.

"CONAIE demands to reduce fuel prices, address the problem of unemployment, regulate the prices of rural products and combat crime and insecurity, among other requests"¹⁶³ . The social protest, initiated by CONAIE, was supported by the unions¹⁶⁴ and other civil society groups¹⁶⁵ who joined the protests.

The national strike began on June 13, 2022.

74. The initial reaction of the authorities was twofold.

On the one hand, the authorities detained the president of CONAIE, Mr. IZA, who was finally released on parole.

On the other hand, President LASSO decreed a "state of emergency due to serious internal commotion"¹⁶⁶ . Despite the approval of this decree, social protest continued. It was violently

¹⁶¹ AI, " Ecuador: Authorities and companies threaten the Amazon and its Indigenous Peoples", 4 May 2022, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/ecuador-authorities-companies-threaten-amazon-indigenous-peoples/>

¹⁶² Conaie helped overthrow three Ecuadorian presidents between 1997 and 2005. The indigenous community represents more than one million of Ecuador's 17.7 million inhabitants.

¹⁶³ CNN Ecuador, "Judge in Ecuador orders the release of Leonidas Iza, president of the Confederation of Indigenous Nationalities, and orders alternative measures to prison," June 15, 2022, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/15/ecuador-libertad-leonidas-iza-conaie-orix/>

¹⁶⁴ For example: Latam Gremial, "Sindicatos apoyan el paro nacional que inició hoy en Ecuador convocado por comunidades indígenas", June 13, 2022, <https://latamgremial.com/sindicatos-apoyan-el-paro-nacional-que-inicia-hoy-en-ecuador-convocado-por-comunidades-indigenas/>

"Ecuador: the CFS expresses solidarity and condemns the violence and repression in the country," June 27, 2022, <https://csa-csi.org/2022/06/27/ecuador-la-csa-expresa-su-solidaridad-y-condena-la-violencia-y-la-represion-en-el-pais/>

¹⁶⁵ For example: El Mercurio, 'Universitarios lideraron protesta en Cuenca', 14 June 2022, <https://elmercurio.com.ec/2022/06/14/universitarios-lideraron-protesta-en-cuenca/>

¹⁶⁶ L'Express, "Equateur: poursuite des protestations indigènes malgré l'état d'urgence ", 19 juin 2022, https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/equateur-le-president-declare-l-etat-d-urgence-les-protestations-se-poursuivent_2175486.html

GK, "Guillermo Lasso decreed a state of exception in 3 provinces, what does the decree say?", June 17, 2022, <https://gk.city/2022/06/17/que-dice-decreto-excepcion-pichincha/>

repressed by the forces of law and order (see below)¹⁶⁷. Numerous videos, showing children affected by tear gas or protesters on the ground beaten by the police¹⁶⁸, have circulated on social networks¹⁶⁹, without being broadcast in the "mainstream media". On June 24, 2022, there were six deaths¹⁷⁰. The number of injured, as well as the number of detainees, was very high¹⁷¹.

75. In a statement dated June 20, 2022, Amnesty International denounced the violent management of the social crisis:

"The repression by the government of President Guillermo Lasso of demonstrations called by indigenous, trade union and social organizations in the framework of a national strike since June 13, 2022, is causing a human rights crisis with multiple reports of harassment, excessive use of force, arbitrary detentions, ill-treatment, and criminalization of protesters, journalists and human rights defenders, Amnesty International said today.

(...)

On June 17, President Lasso issued Executive Decree No. 455, which declared "a state of emergency due to serious internal commotion in the provinces of Cotopaxi, Pichincha and Imbabura", suspending freedom of association, assembly and transit for thirty days.

(...)

On June 18, despite the fact that the state of emergency suspended freedom of association and assembly, the Presidency issued Official Bulletin 561, entitled "The capital of Ecuadorians marches for Peace", to promote a march of "hundreds of Quito citizens (...) concerned about the situation of the country and the acts of violence and vandalism". The bulletin included the message "The National Government supports this initiative and joins this cause". Both the official page hosting the bulletin, as well as the tweet promoting it, were subsequently deleted. A video disseminated in social networks, allegedly recorded during the march, shows a group of people chanting racist messages against the indigenous population"¹⁷².

¹⁶⁷ See in particular: Publico.es, "Lasso militariza Ecuador y reprime la protesta indígena contra los recortes", 23 June 2022, <https://www.publico.es/internacional/lasso-militariza-ecuador-reprime-protesta-indigena-recortes.html>

¹⁶⁸ https://twitter.com/virgiliohernand/status/1540697129987063810?s=20&t=-BMDvjb7WJ5uxgweLkj_ew

¹⁶⁹ In particular, see https://twitter.com/conaie_ecuador?lang=fr

France24, "Violentes manifestations en Équateur : "J'ai soigné un homme avec une lésion à l'œil gauche" ", 28 juin 2022, <https://observers.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220628-equateur-manifestations-violences-indigenes-police>

¹⁷⁰ LaLibre.be, "Equateur: 6 morts lors de violents incidents devant le Parlement ", 24 juin 2022, <https://www.lalibre.be/international/amerique/2022/06/24/equateur-6-morts-lors-de-violents-incidents-devant-le-parlement-TDDB26RRSVDIFIR7XMIIVFZZLI/>

¹⁷¹ El Universo, "En diez días de protestas se aprehendió a 106 personas; los delitos imputados son posesión de armas de fuego, ataques a servidores y bloqueo de servicios públicos", 22 June 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/en-diez-dias-de-protestas-se-detuvieron-106-personas-los-delitos-van-desde-posesion-de-armas-de-fuego-ataques-a-servidores-bloqueo-de-servicios-publicos-nota/>

¹⁷² Amnesty International, "Ecuador: Repression against protests is causing human rights crisis," June 20, 2022, <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/ecuador-represion-contra-protestas-esta-causando-tesis-de-derechos-humanos/>

Many other human rights organizations have reacted to the brutality of the repression used against the demonstrators¹⁷³. A preliminary report of an observation mission indicated that *"The testimonies collected are heart-breaking. They all coincide in highlighting the repressive violence deployed and the massive attack on the defenceless civilian population. The security forces acted with vehemence and impunity in the exercise of repression. Following direct orders from the executive power, they deployed abusive, excessive and disproportionate interventions, causing serious injuries, in some cases lethal (...) Thus, according to official sources, the information provided by human rights platforms and the complaints and testimonies received directly, we can report the following human rights violations: • Killings at the hands of the police and military forces. Injuries of varying degrees and mutilations due to disproportionate action by police and military forces. Massive arbitrary detentions and false accusations. Kidnapping, persecution and attacks against the integrity of indigenous and social leaders. • Kidnappings and threats to demonstrators. • Violation of the right to social protest through untimely and unjustified attacks on peaceful demonstrations or agglomerations, particularly the attack on the Casa de la Cultura on Friday, June 24. • Violation of judicial guarantees and access to justice for citizens (failure to receive complaints in public prosecutors' offices, failure to investigate ex officio acts of police violence, among others). • Denial of medical attention by public health institutions on racial and anti-indigenous grounds. Violation of women's integrity, evidencing episodes of humiliation, verbal and symbolic violence. Violation of children's rights. Especially in the context of the repression of mobilizations. • Threats by police forces to volunteer health personnel in peace zones. • Repeated attacks on peace and humanitarian shelter zones, putting thousands of people affected by tear gas launched by security forces during the night in grave danger. Armed attacks by civilian organizations and police forces, based on racist and anti-indigenous violence. • Censorship of community media and blocking of the free flow of information. Blocking of internet service and social networks. Hacking of personal accounts of indigenous and social leaders. Forced disappearance of people who were participating in the mobilizations"*¹⁷⁴.

On June 24, 2022, the IACHR and the Special Rapporteur for Freedom of Expression expressed their concern, making an urgent call for dialogue:

"The protests, which began on June 13, following a call by the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), contain several demands, among which stand out the attention to economic, social, cultural and environmental rights

¹⁷³ CubaDebate, "Ecuador: Movimientos sociales denuncian la violencia policial", June 22, 2022, <http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/06/22/ecuador-movimientos-sociales-denuncian-la-violencia-policial-video/>

Telam, "Ecuador: Una misión de solidaridad argentina releva la situación de los DDHH", June 25, <https://www.telam.com.ar/notas/202206/596607-ecuador-una-mision-de-solidaridad-argentina-releva-la-situacion-de-los-ddhh.html>

¹⁷⁴ International Solidarity and Human Rights Mission, "Informe preliminar : violación de DDHH en Ecuador en el marco del paro nacional 2022", 28 June 2022, <https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/06/28/ecuador-se-ha-dado-a-conocer-el-informe-preliminar-de-la-mision-de-solidaridad-internacional-y-derechos-humanos-que-visito-este-pais-graves-constataciones-sobre-la-represion/>

(DESCA). (...) In the current call, organizations denounced the absence of effective dialogue mechanisms to respond to these demands.

The State declared a state of emergency due to serious internal commotion (...) Ecuador has the duty to ensure that the provisions adopted are proportional and that the suspension of rights or guarantees is carried out when it is the only way to deal with a given situation (...).

The IACHR is concerned that according to information from the Ombudsman's Office, 6 people lost their lives in the context of the protests, at least 2 as a result of gunshot wounds. Also, according to other sources, at least 166 demonstrators have been injured and 120 agents of the National Police. According to official figures, 108 people have been arrested. For their part, civil society organizations have expressed concern about the detention of social leaders, including the detention of the leader of CONAIE; and possible cases of abuse of police force, including raids on shelters in university campuses where demonstrators were staying. The IACHR and its RELE condemn all human rights violations committed in the context of social protest and urge the State to clarify the circumstances of the deaths with due diligence.

In addition, at least 86 serious acts of violence against the press covering the National Strike were reported by civil society organizations. The reports include acts of physical aggression - including the use of whips and spears - and the throwing of hot liquids against journalists, threats, harassment, damage, illegal appropriation of equipment and impacts by tear gas bombs. In addition to the above, the information reports attacks on websites of newspapers or civil society organizations that monitor and report on the events of the National Strike.

(...)

Lack of access to information has the potential to affect both institutional and civil society voices, hindering social understanding of the environment and making it more difficult to resolve disputes.

The IACHR and its RELE, in addition, took note of the various acts of violence reported by the State against public agents and public property, (...)

However, the State of Ecuador must act on the basis of the lawfulness of protests as a manifestation of the rights of association, freedom of expression and peaceful assembly. The fact that some groups or individuals exercise violence does not, per se, make all protests violent or illegitimate, nor does it allow public authorities to criminalize in a generalized manner or security forces to resort to the use of force or mass arrests.

(...)

*Within the framework of democratic institutions, the State is responsible for guaranteeing the rights and channelling the claims of the population, so it must ensure the strengthening of spaces that address petitions, claims and demands"*¹⁷⁵ .

76. In the face of the demonstrations, the government did not initiate a dialogue, but argued that the social protest was aimed at destroying democracy¹⁷⁶ , disregarding the government's serious lack of legitimacy¹⁷⁷ .

The government's response has been to criminalize protest leaders, establish a state of emergency, not to dialogue, support the forces of law and order, and criminalize democratic debate.

- Criminalization of protest leaders

The day after the general strike, the police arrested the president of CONAIE¹⁷⁸ . The judiciary was once again used to discredit the social movement. The arbitrary detention and criminalization of the leader of the indigenous movement was widely denounced¹⁷⁹ . The Alianza por los derechos humanos Ecuador, of which 13 organizations are members, has made *"an URGENT call to the judiciary to maintain its independence in all procedural actions in which it must intervene. We ask that a rational, proportional and last resort use of criminal law be made, that it be rigorous in the observance of national and international standards on due process and the human rights of indigenous peoples, and above all that it take into account the history of serious human rights violations"*¹⁸⁰ .

¹⁷⁵ OAS, "CIDH y RELE observan con preocupación la agudización de tensiones sociales en Ecuador e instan a un diálogo urgente, inclusivo y efectivo", 24 June 2022, <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/145.asp>

¹⁷⁶ Infobae, "Ecuador's Defense Minister said that "democracy is at serious risk" due to protests against Lasso's government," June 21, 2022, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/21/el-ministro-de-defensa-de-ecuador-dijo-que-la-democracia-esta-en-serio-riesgo-por-las-protestas-contr-a-el-gobierno-de-lasso/>

¹⁷⁷ RFI, "Lasso completes one year in power with popularity on the decline", 24 May 2022, <https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20220524-lasso-cumple-un-a%C3%B1o-en-el-poder-con-una-popularidad-a-la-baja>

EcuadorEnVivo, "Credibilidad de Lasso en el 12 %, tras un año de gestión", 17 June 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/entrevistas/a-primera-hora/item/144506-credibilidad-de-lasso-en-el-12-tras-un-ano-de-gestion>

¹⁷⁸ BBS News, "Ecuador police arrest protest leader Leonidas Iza", 14 June 2022, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-61796430>

¹⁷⁹ See in particular, FrontLine Defenders, "Detención arbitraria y criminalización del defensor indígena Leonidas Iza Salazar en el marco de protestas pacíficas en el país", 17 June 2022, <https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arbitrary-detention-and-criminalization-indigenous-defender-leonidas-iza-salazar-context>

Inred.org, "Inredh ante la detención ilegal de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, y el contexto de movilizaciones", 14 June 2022, <https://inredh.org/inredh-ante-la-detencion-ilegal-de-leonidas-iza-presidente-de-la-conaie-y-el-contexto-de-movilizaciones/>

¹⁸⁰ Alianza por los Derechos Humanos, "Paro nacional - Junio 2022: Pronunciamiento desde la Alianza por los Derechos Humanos sobre las acciones legítimas de protesta social y la respuesta estatal de criminalización por parte del Gobierno Nacional", 14 June 2022, <https://ddhcuador.org/sites/default/files/documentos/2022-06/Pronunciamiento%20Alianza%20DDHH%20sobre%20protesta%20social%20Junio%202022%20.%2014.06.22.pdf>

In contrast to this call for restraint, the Ecuadorian Attorney General's Office raided the premises of the Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), a symbolic place of the indigenous social struggle, following an anonymous complaint¹⁸¹.

- State of emergency

The general strike began in Ecuador on June 13, 2022. On June 17, 2022, President Lasso declared a state of emergency (decree n°455), without having initiated any dialogue with CONAIE leaders¹⁸².

The extent of the restrictions implied by the presidential decree, coupled with police violence and the government's chaotic management of the crisis, led members of the National Assembly to call for a democratic debate on the presidential decree. In response to this announcement, the executive reacted by filing requests for provisional measures before the courts to prevent the parliamentary session from taking place¹⁸³. The President of the Republic, Guillermo Lasso, then pre-empted the National Assembly by revoking his decree n°455 and replacing it with a new decree on June 20, 2022. The debate did not take place due to President Lasso's sudden decision to end the state of emergency on June 25, 2022.

- Lack of dialogue, support for the forces of law and order, criminalization of democratic debate

Despite the strong popular mobilization and the impact of the general strike in the country, President Lasso did not meet with the leaders of the social movement, but instead adopted unilateral measures that were considered unsatisfactory¹⁸⁴. It was not until June 27, 2022, 14 days after the beginning of the national strike, that the government, under international pressure, held its first meeting with the various leaders of the indigenous organizations¹⁸⁵. On June 28, 2022, President Lasso announced the suspension of the dialogue.¹⁸⁶

¹⁸¹ El Comercio, "Fiscalía de Ecuador allana la Casa de la Cultura en Quito por paro indígena", 19 June 2022, <https://elmercurio.com.ec/2022/06/19/fiscalia-de-ecuador-allana-la-casa-de-la-cultura-en-quito-por-paro-indigena/>

¹⁸² France24, "Guillermo Lasso declares state of emergency in Ecuador after fifth day of claims", 18 June 2022, <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20220618-guillermo-lasso-declara-el-estado-de-excepci%C3%B3n-en-ecuador-tras-quinto-d%C3%ADa-de-reclamo>

¹⁸³ El Universo, "Paro nacional: hay dos pedidos de medidas cautelares para que la Asamblea Nacional no se reune y deroga el decreto 455", 20 June 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/paro-nacional-presentan-solicitud-de-medidas-cautelares-para-que-la-asamblea-nacional-no-se-reuna-y-derogue-el-decreto-455-nota/>

¹⁸⁴ Presenza, "Ecuador: el Paro no para", June 27, 2022, <https://www.presenza.com/es/2022/06/ecuador-el-paro-no-para/>

¹⁸⁵ El Comercio, "Gobierno llega a reunión con la Conaie en la Basílica", June 27, 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/conaie-dialogo-ejecutivo-poderes-estado.html>

¹⁸⁶ El Comercio, "Lasso suspends dialogue with Conaie due to attack on military personnel in Shushufindi", June 28, 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-suspende-dialogo-conaie-ataque-militares-shushufindi.html>

While refusing to engage in dialogue, the Ecuadorian authorities positioned themselves as victims. They maintained a discourse that discredited and criminalized the social movement, without condemning the serious abuses and police violence, and also suggested without evidence that the protesters were infiltrated by criminal groups¹⁸⁷.

The June 2022 protests highlighted a serious pre-existing crisis of governance and legitimacy¹⁸⁸.

The UNES party, which groups together supporters of the Citizen Revolution, then made a political analysis, pointing out that President Lasso did not have the support of Ecuadorians, that his government did not have a majority in the National Assembly and that the country was in a state of serious social unrest, which justified the adoption of presidential decrees establishing a state of emergency. To overcome this crisis, UNES considered it appropriate to use the constitutional mechanism known as "cross death" which implies new presidential and parliamentary elections"¹⁸⁹.

CONAIE is an organization that represents indigenous peoples, but it is not a political party. The political party that brings indigenous demands to the National Assembly is called PACHAKUTIK. On June 25, 2022, PACHAKUTIK announced that, given the lack of dialogue and the brutal repression of demonstrations, it was calling on its members to support the constitutional request for the impeachment of President Lasso. *"Our commitment is with the people, we have demanded dialogue as a way out of the crisis, the response has been repression, today we have the possibility to act from the Legislative"*¹⁹⁰.

In the face of civil and political criticism, the government has accused, through the press, the "correístas" of having originated the popular protest movement¹⁹¹ and of being allies of drug trafficking, on the one hand, and on the other hand has insisted that those who support the demand for the president's removal would be coup plotters.¹⁹²

¹⁸⁷ EcuadorEnVivo, "Lasso announces that he will use all the resources of the public force and accuses Iza of being a coup leader", June 24, 2022, <https://www.ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/145035-lasso-anuncia-que-empleara-todos-los-recursos-de-la-fuerza-publica-y-acusa-a-iza-de-golpista>

¹⁸⁸ In this sense: Primicias.ec, "Revocatoria del mandato contra Lasso avanza silenciosamente durante el paro", 13 June 2022, <https://www.primicias.ec/noticias/politica/revocatoria-mandato-lasso-paro-nacional/>

¹⁸⁹ Constitution of Ecuador (2008), https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Article 130 of the Ecuadorian Constitution:

"The National Assembly may remove the President of the Republic from office in the following circumstances

following cases:

(...)

2. *Due to serious political crisis and internal commotion*

¹⁹⁰ https://twitter.com/PKNacional18/status/1540755980161622016?ref_src=twsrc%5Etfw

¹⁹¹ EcuadorEnVivo, "Villavicencio: 'Esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica'", May 23, 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/144935-villavicencio-esta-intentona-golpista-es-liderada-por-el-correismo-desde-belgica>

¹⁹² El Universo, "'Este es el golpista", le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato", 23 June 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/este-es-el-golpista-le-responde-el-presidente-guillermo-lasso-a-rafael-correa-sobre-propuesta-de-revocatoria-de-mandato-nota/>

There is no reason to believe that the correístas originated the protest movement against President Lasso. This rhetoric is used to link the indigenous social movement with an "enemy" already fabricated by lawfare (see above). The unfounded accusation¹⁹³ of a link between the correístas and drug trafficking¹⁹⁴ is also intended to delegitimize and discredit social protest and avoid debate and consideration of the economic and social problems that justified the magnitude of the protests.

As for the use by the National Assembly of the prerogative offered by a constitutional provision, this can in no way be considered a coup d'état, since it is a legal solution to the crisis in Ecuador. The government's discourse¹⁹⁵ was clearly demagogic. However, continuing with the lawfare approach, a criminal investigation was opened against the numerous parliamentarians who favoured the use of the "cross death" mechanism¹⁹⁶.

After several days of debate in the National Assembly, a vote was held on the presidential impeachment request: 80 parliamentarians - the two largest parties in the country, UNES and PACHAKUTIK - voted in favour, 40 voted against and 9 parliamentarians abstained. The National Assembly has 137 members. President Lasso's CREO party has 12 deputies. All parliamentarians accepted the vote, in accordance with fundamental democratic principles.

Some media presented this result as a "victory" for President Lasso¹⁹⁷. However, it reflects an unprecedented governmental crisis.

¹⁹³ Ministry of Government Ecuador, "The Department of Justice through the US DEA decorates Minister Serrano for his management in the fight against drugs", 2016, <https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/el-departamento-de-estado-de-eeuu-condecora-al-ministro-serrano-por-su-gestion-en-la-lucha-antidrogas/>

"In the last 6 and a half years, 191 % more drugs have been seized on average per year than in the previous 10 years. 332 metric tons of drugs from 2010 to date, versus 268 from 2000 to 2009. We have seized practically the same amount in approximately 6 and a half years as in 19 years".

¹⁹⁴ El Universo, "Declaración del presidente Guillermo Lasso enfureció a Rafael Correa", June 23, 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/declaracion-del-presidente-guillermo-lasso-enfurecio-a-rafael-correa-nota/>

Also reproduced: El Universo, ""Este es el golpista", le responde el presidente Guillermo Lasso a Rafael Correa sobre propuesta de revocatoria de mandato", 23 June 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/este-es-el-golpista-le-responde-el-presidente-guillermo-lasso-a-rafael-correa-sobre-propuesta-de-revocatoria-de-mandato-nota/>

See also: El Comercio, "Correísmo denuncia a Ministro Carrillo y pide su comparecencia en Asamblea",

¹⁹⁵ SwissInfo, "Lasso accuses Correísmo of trying to "assault democracy" in Ecuador", https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-gobierno_lasso-acusa-al-corre%C3%ADsmo-de-intentar--asaltar-la-democracia--en-ecuador/47711392

¹⁹⁶ EcuadorEnVivo, "Villavicencio: 'Esta intentona golpista es liderada por el correísmo desde Bélgica'", May 23, 2022, <https://ecuadorenvivo.com/index.php/politica/item/144935-villavicencio-esta-intentona-golpista-es-liderada-por-el-correismo-desde-belgica>

¹⁹⁷ ABS International, "Lasso retains presidency and defeats opposition Correa", June 29, 2022, https://www.abc.es/internacional/abci-lasso-retiene-presidencia-y-derrota-correismo-opositor-202206290642_noticia.html

77. In the end, despite the announcement of the refusal to dialogue with the president of the Conaie¹⁹⁸, the government had to agree to sit at the negotiating table.

After 18 days of uninterrupted general strike and protests, an "Act for Peace" was signed, putting an end to the demonstrations and conceding some of the demands of the indigenous associations. The agreement provided for the continuation of negotiations in a peaceful atmosphere¹⁹⁹.

The government's virulent attacks, widely publicized by the press, against R. CORREA DELGADO²⁰⁰, the UNES party, and CONAIE representatives²⁰¹ have not stopped. They vitiate the debate and undermine the right of Ecuadorians to a democratic and constructive resolution of their important points of concern.

78. Ecuador is currently undergoing a profound social, economic, security, political and democratic crisis.

The recent management of this crisis has seriously violated the fundamental rights and freedoms of Ecuadorians (right to live with dignity, right to health, freedom of expression and demonstration, right to life, right to respect for physical integrity, right to a fair trial, freedom to exercise political rights).

VII. Organization of a new referendum (2022): new fears of deinstitutionalization and politicization of the justice system

79. In the midst of a crisis of legitimacy and governability, President Lasso announced in September 2022 his intention to call a new referendum.

¹⁹⁸ ABS International, "Lasso retains presidency and defeats opposition Correa", June 29, 2022, https://www.abc.es/internacional/abci-lasso-retiene-presidencia-y-derrota-correismo-opositor-202206290642_noticia.html

¹⁹⁹ Government of Ecuador, "Finaliza paro en Ecuador, se firma acta por la paz", June 30, 2022, <https://www.presidencia.gob.ec/finaliza-paro-en-ecuador-se-firma-acta-por-la-paz/>

²⁰⁰ For example: La Nacion, "El embajador de Ecuador en la Argentina apuntó contra Correa, Venezuela y Cuba por las protestas en su país: Son regímenes del mal", 1 July 2022, <https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-embajador-de-ecuador-en-la-argentina-apunto-contra-correa-venezuela-y-cuba-por-las-protestas-en-nid01072022/>

El Comercio, "Guillermo Lasso: Correa 'is desperate to return to Ecuador to achieve impunity'", 18 July 2022, <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/lasso-correa-desesperado-regreso-ecuador-impunidad.html>
Expreso.ec, "Maniobras desestabilizadoras tejidas de varios frentes", July 9, 2022, <https://www.expreso.ec>

²⁰¹ For example: Rfi, "Indígenas de Ecuador niegan acusación del presidente que se financian con el narco", 10 July 2022, <https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20220709-ind%C3%ADgenas-de-ecuador-niegan-acusaci%C3%B3n-del-presidente-que-se-financian-con-el-narco>

GK, "Conaie: declaraciones de Lasso ponen en riesgo los acuerdos", 9 July 2022, <https://gk.city/2022/07/09/declaraciones-lasso-conaie-riesgo-acuerdos/>

The government justifies this new referendum by the need to improve security, the institutional framework of Ecuador and the protection of natural resources²⁰², naturally laudable objectives.

Unfortunately, as in 2018, it quickly became clear that affirmative answers to the questions posed would not solve the serious problems facing Ecuador but would increase the risk of human rights abuses and violations, the lack of representativeness of certain citizens, and the politicization of institutions that should be independent. This is a matter of great concern, which constitutes one more step towards the disintegration of the rule of law.

80. The first concern is the *modus operandi* that the Government will adopt in relation to the necessary constitutional control of the questions asked in a referendum.

Indeed, on September 12, 2022, President Lasso presented the eight questions to which he wants the Ecuadorian people to answer "yes" or "no":

" 1. Currently, the Armed Forces cannot support the National Police in the internal protection and maintenance of public order. Do you agree with allowing the complementary support of the Armed Forces in the functions of the National Police to combat organized crime, by amending the Constitution in accordance with the provisions of Annex 1?"

2. Extradition of Ecuadorians is prohibited for all crimes, including those related to transnational organized crime such as drug trafficking, arms trafficking, human trafficking and migrant smuggling. Do you agree with allowing the extradition of Ecuadorians who have committed crimes related to transnational organized crime, through processes that respect rights and guarantees, amending the Constitution in accordance with Annex 2?"

3. Currently, the Judiciary Council selects, evaluates, promotes, trains and sanctions prosecutors, despite the fact that the Prosecutor General's Office is an autonomous body. Do you agree with guaranteeing the autonomy of the Prosecutor General's Office, so that it selects, evaluates, promotes, trains and sanctions its employees through a Prosecutor Council, amending the Constitution in accordance with Annex 3?"

4. At present, the National Assembly is made up of 137 assembly members and it is estimated that, with the population census of 2022, this number will increase to

²⁰² Reuters, "Ecuador plans referendum to cut to assembly seats, fight drug trafficking", 12 September 2022, <https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-plans-referendum-cut-assembly-seats-fight-drug-trafficking-2022-09-12/>

Also: "Constitutional reforms related to the fight against insecurity, the quality of institutions, especially the National Assembly and the Council of Citizen Participation and Social Control (PSC), and other environmental policies are proposed" - El Universo, "Estas son las preguntas del referéndum impulsado por el gobierno de Guillermo Lasso", September 12, 2022, <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/estas-son-las-preguntas-del-referendum-impulsado-por-el-gobierno-de-guillermo-lasso-nota/>

approximately 152 assembly members. Do you agree with reducing the number of assembly members and that they be elected according to the following criteria: 1 assembly member per province and 1 additional provincial assembly member for every 250,000 inhabitants; 2 national assembly members for every million inhabitants; and 1 assembly member for every 500,000 inhabitants residing abroad? 2 national assemblymen for each million inhabitants; and 1 assemblyman for each 500,000 inhabitants residing abroad, amending the Constitution according to Annex 4?

5. There are currently 272 political movements in Ecuador. These do not guarantee citizen representation, nor adequate participation of their members. Do you agree with requiring political movements to have a minimum number of members equivalent to 1.5% of the electoral registry of their jurisdiction and obliging them to keep a registry of their members periodically audited by the National Electoral Council, amending the Constitution in accordance with Annex 5?

6. The Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS) is a public entity that currently has the power to appoint 77 authorities. Do you agree with eliminating the power to appoint authorities that the CPCCS has and implementing processes that guarantee meritocracy, public scrutiny, collaboration and control of different institutions, so that the National Assembly will be the one to appoint through these processes the authorities currently elected by the CPCCS and its advisors, amending the Constitution in accordance with Annex 6?

7. The Constitution excludes water protection areas from the National System of Protected Areas, so they do not enjoy its protection. Do you agree with the incorporation of a subsystem of water protection to the National System of Protected Areas, amending the Constitution in accordance with Annex 7?

8. The Constitution does not provide for compensations to those who support the generation of environmental services. Do you agree that individuals, communities, peoples and nationalities, may be beneficiaries of compensations duly regularized by the State, for their support to the generation of environmental services, by amending the Constitution in accordance with Annex 8?"

As required by law, the Government first submitted its proposed questions to the Constitutional Court to evaluate their legal and constitutional relevance. In principle, the Constitutional Court has 20 days to make its evaluation. However, it seems extremely difficult, if not impossible, for the Constitutional Court to meet this deadline, given that the annex of the questions is a 470-page document.

There are therefore strong fears that, as in 2018 (see above), the Government will dispense with the constitutionality opinion. This approach was strongly criticized by several international bodies. Moreover, the need for such lengthy explanations is an indication of the complexity of

the issues and of the project that is hidden, so it is likely that the average citizen would not be able to vote with full knowledge of the facts.

However, the process to be followed is not the only source of concern. From a cursory analysis it is immediately apparent that affirmative answers would lead to consequences contrary to the objectives supposedly pursued. It is worth clarifying that the transcribed text on the questions is referential and that the annex announced in each one of them is the one that details the true scope and intentions of the consultation.

81. We believe it is important to call attention to the risks involved in some of the questions that the government intends to ask Ecuadorian citizens.

The first question reads:

"1. Currently, the Armed Forces cannot support the National Police in the internal protection and maintenance of public order. Do you agree with allowing the complementary support of the Armed Forces in the functions of the National Police to combat organized crime, amending the Constitution in accordance with the provisions of Annex 1?"

In theory, it is intended to improve the security of Ecuadorians.

However, it is worrying to pose such a question, the answer to which would increase the "militarization" of police action, without having previously implemented a government action plan against the increase in violence with the tools that Ecuadorian leaders already possess, and without having developed a strategy to tackle the main cause of the increase in violence: the impoverishment of the population and the increase in social inequalities (see above). It is really simplistic - although from a communication point of view very promising - to state that *"The current situation of violence and insecurity in Ecuador is largely caused by the presence of organized crime, which has become increasingly strong in recent years"*²⁰³.

Opting for the path of increased repression proposed by this question should only be done as a subsidiary option, after all other options have been explored. This is not the case. The question seems, therefore, demagogic, as it pretends to give the appearance of an answer to an extremely complex problem that will be impossible to contain by this means.

Moreover, the measure may be worrisome if one recalls that during the June 2022 demonstrations, the leaders of the social protest and their movements were labelled as criminals, as organized groups linked to drug trafficking.

²⁰³ Annex to the referendum questions, p.17

In addition, the Constitution of Ecuador itself provides that a constitutional reform as proposed in this question cannot be carried out through a popular consultation, as the President intends. Thus, there is a possibility that this question will not pass constitutional control due to its form.

82. The third question is even more problematic.

Consultation:

"3. Currently, the Judiciary Council selects, evaluates, promotes, trains and sanctions prosecutors, despite the fact that the Prosecutor's Office is an autonomous body. Do you agree with guaranteeing the autonomy of the Prosecutor General's Office, so that it selects, evaluates, promotes, trains and sanctions the servants that make it up through a Prosecutorial Council, amending the Constitution in accordance with Annex 3?"

The reaction of the Council of the Judiciary was immediate:

On her hand, María Josefa Coronel, director of the Judiciary Council in Guayas, told CNN Spanish edition, that the proposal to remove functions from this institution is "disconcerting" and causes a duplication of competencies.

"My first reaction is one of bewilderment. The appropriate thing to do would be to leave justice free. A Judiciary Council has already been structured; if something does not work, we must verify why it does not work (...) Furthermore, Director Coronel pointed out that in the midst of the justice crisis in the country, the Judiciary Council must be strengthened. "They intend to create another council to guarantee fiscal autonomy when the Prosecutor's Office is autonomous", she specified"²⁰⁴.

Basically, a positive answer to this question would lead to a situation contrary to the principle that judges cannot control themselves and that it is more appropriate for an independent body to be in charge of discipline. This principle is intended to guarantee the principle of independence of the judiciary. The Prosecutor's Office is part of the judiciary, so the Council of the Judiciary is the body in charge of selection, evaluation and enforcement of discipline.

The proposal, better described in the annex, goes in a direction that would give the Attorney General much more power than he currently has. He would become the disciplinary authority of all his subordinates. He could be completely transformed into an arm of political interest, over which no external control could be exercised. In the context of the lawfare described above, this proposal is alarming. What prosecutor would still dare to act with the independence and impartiality that his function requires?

²⁰⁴ CNN, "Ecuador's president proposes a list of questions for popular consultation," September 12, 2022, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/12/ecuador-pliego-preguntas-consulta-popular-orix/>

Concern is heightened by the fact that this is the only issue for which there is no deadline for the National Assembly to proceed with the reform of the law should it be approved. The text of the annex establishes that the referendum proposal would be directly applicable, requiring only the adoption of a regulation by the current Attorney General.

83. Regarding the composition of the National Assembly, the following question is proposed:

"4. At present, the National Assembly is composed of 137 assembly members, and it is estimated that, with the population census of 2022, this number will rise to approximately 152 assembly members. Do you agree with reducing the number of assembly members and that they should be elected according to the following criteria: 1 assembly member per province and 1 additional provincial assembly member for every 250.000 inhabitants; 2 national assemblymen for each million inhabitants; and 1 assemblyman for each 500,000 inhabitants residing abroad, amending the Constitution in accordance with Annex 4?"

This issue seems to have been included to satisfy the growing voices in Ecuador against the inefficiency of the legislative branch and the abuses committed by some of its members. It seems, therefore, demagogic, since it is clear that reducing the number of parliamentarians will not solve these problems.

More fundamentally, it appears that its implementation will reduce the number of parliamentarians to one for the provinces which currently have two representatives. As E. RON explains, this modification is detrimental to the representativeness and plurality of the National Assembly, without providing any solution to the problem mentioned²⁰⁵. It will not have a positive impact, but risks concentrating power in the hands of a single person in these small provinces, which paradoxically could create an increase in the deficit of confidence in the legislative branch. In fact, as has been revealed in recent weeks, there is a possibility that this concentration and contraction of representation could increase the possibility of committing acts of corruption due to the disposition or hoarding of votes in parliament.

84. The fifth question is detrimental to political freedom and its diversity:

"5. Currently there are 272 political movements in Ecuador. These do not guarantee citizen representation, nor adequate participation of their members. Do you agree with requiring political movements to have a minimum number of affiliates equivalent to 1.5% of the electoral registry of their jurisdiction and obliging them to keep a registry of their members periodically audited by the National Electoral Council, amending the Constitution in accordance with Annex 5?"

²⁰⁵ E. Ron, electoral political expert, https://www.facebook.com/jimmyjairala/videos/443760157731296/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

This proposal proposes to eliminate the institution of the "*permanent adherent*" and constitutionalizes the requirement of affiliates equivalent to at least 1.5% of the electoral roll in order to be recognized as a political party or movement. It also seeks that the electoral control body be stricter with the systems of verification of signatures of affiliates, and that these be permanent and continuous.

Making it difficult to create and maintain political structures does not seem to be in line with the objective of guaranteeing citizen representativeness.

85. All of the above highlights the demagogic nature of the referendum planned by President Lasso as a means of promoting the image of a man who acts while his government is paralyzed without sufficient support in parliament.

However, beyond this demagoguery, the project behind the planned referendum is extremely serious for democracy and is in line with the dismantling of the previous 2018 referendum (see above).

The danger lies existentially in question number 6:

"6. The Council of Citizen Participation and Social Control (CPCCS) is a public entity that currently has the power to appoint 77 authorities. Do you agree with eliminating the power to appoint authorities that the CPCCS has and implementing processes that guarantee meritocracy, public scrutiny, collaboration and control of different institutions, so that it is the National Assembly that appoints through these processes the authorities currently elected by the CPCCS and its counsellors, amending the Constitution in accordance with Annex 6?"

It changes the appointing body of the control authorities, from the CPCCS as it is now, to the National Assembly. In general, all authorities to be elected by the Assembly would come from shortlists presented by the Executive. The Superintendencies and the Attorney General would not be elected from shortlists but from fixed names proposed by the President for consideration by the Assembly²⁰⁶. The other authorities would come from shortlists to be chosen by the President himself, from 6 names that would come from different sources. In the case of the Prosecutor's Office, for example, they would come from pairs proposed by the National Court of Justice, the Prosecutor's Office itself and the President. For the Comptroller's Office, they would come from pairs presented by the National Court of Justice, the Comptroller himself and the President.

²⁰⁶ As in the U.S. Supreme Court, which recently demonstrated its political character in a decision contrary to all precedents that normally bind judges - BBC News, "Abortion in the U.S.: Supreme Court overturns Roe v. Wade and eliminates constitutional right to terminate pregnancy nationwide," June 24, 2022, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61806107>

What is most striking is that the proposal intends to grant the President practically unlimited powers, since a nomination initiative could only be denied with two thirds of the members of the Assembly²⁰⁷, a quorum that is very difficult to obtain. Furthermore, if the votes to deny the nomination or the nomination proposal were to be obtained, the President would have to send another proposal, which, in order to be denied again, would require $\frac{3}{4}$ of the votes against the members of Parliament, a quorum impossible to obtain.

Also, the term to decide on the suitability of a candidate is very short: only 15 days for a Commission to analyse the probity of three persons and for the Plenary of the National Assembly to pronounce itself. In case of administrative silence, the proposal becomes effective by operation of law.

So, the proposal is a *carte blanche* to the President to appoint whoever he wants to assume the functions of control authority. The only exception would be the manner of election of the members of the CPCCS, who would come from a list of 18 persons proposed by the Attorney General's Office.

This is very serious for the rule of law and the preservation of the independence of the different powers among them, including the judiciary, which serves to ensure the protection of the rights of Ecuadorians against, among others, the administration. A serious politicization of public institutions. Furthermore, there is no logic or explanation in leaving the nomination of the members of the CPCCS to the Attorney General's Office. The link between citizen participation and the protection of public order is not understood, so that the Attorney General's Office is granted this privilege.

Concretely, this reform will mean that President Lasso - who criticizes the absence of appointment of some charges by the CPCCS²⁰⁸ - could become a dictator by empowering him to appoint by hand those authorities who, as of the date of the consultation, have not been appointed.

This proposal clearly violates the principle of separation of powers, judicial independence, increases the politicization of the public service, arbitrariness and the risks of abuse of functions as well as lawfare.

86. After the dramatic consequences of the illegal referendum of 2018, it is extremely worrying to note that, in order to give himself the image of a man who takes action, the President of the Republic proposes to organize a new referendum, demagogically constructed, promising further politicization of justice and other instances of State control.

²⁰⁷ By comparison, in the U.S., it is denied only with a simple majority.

²⁰⁸ Maintains that there are 10 authorities in extended functions. Acknowledges how the current CPCCS has failed to comply with its functions (see section 662 of the annex).

No one should forget that the rule of law is not an abstract concept. Its safeguarding is closely linked to the preservation of all individual rights and freedoms, which must be guaranteed to all without discrimination based on race, religion, ethnicity, political affiliation, etc.

Unfortunately, this report shows that the dismantling of the rule of law has gone hand in hand with the deterioration of the political, civil, economic and social rights of Ecuadorians. This situation is demonstrated by the attempt to unbalance the system of weights and counterweights, giving prevalence to the executive function so that it can interfere in the rest of the powers of the state.

87. A consultation approach that seeks to avoid the ideal channels established for this type of amendment.

Despite the fact that the Constitution of the Republic is clear in establishing the mechanism through which constitutional amendments can be made, it is evident that the proposal made by the President of the Republic in the first questions is not appropriate through a popular consultation.

Certain amendments require participation for treatment and debate in the National Assembly. Considering that it does not have the support of the legislative body, we infer that it intends to deceive the Constitutional Court by trying to insert them through consultation with the electorate. The truth is that in identical cases such as those raised in questions 1 and 6, it has been the same Court that has determined the suitable methods of constitutional reform²⁰⁹.

²⁰⁹ Ruling No. 018-18-SIN-CC of August 01, 2018 analyzed several constitutional reforms among which was the possibility of providing the Armed Forces with the constitutional capacity to contribute to the internal security of the country (similar to what is intended to be consulted with question 1). The resolution observes that the amendment process with the participation of the National Assembly was the ideal one, however each point that was proposed to be amended, should be voted individually and not as a block; and it was due to this last observation that finally the unconstitutionality of the amendment was declared, as observed in the operative paragraphs of that sentence:

"3. In exercise of the power enshrined in Article 436 numerals 1 and 2 of the Constitution of the Republic, in accordance with Article 76 numerals 4, 5 and 6 of the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control, the unconstitutionality is declared by the form of the amendments to the Constitution of the Republic of Ecuador, approved by the National Assembly of Ecuador on December 03, 2015, with the exception of the constant amendments in Articles 2 and 4 that modified Articles 114 and 144 of the Constitution of the Republic, by virtue of the fact that they were repealed by effect of the promulgation of the results of the referendum and popular consultation carried out on February 4, 2018, in Official Gazette Supplement No. 180 of February 14, 2018. (...)

5. In exercise of the powers provided for in Article 436 numerals 1 and 6 of the Constitution of the Republic, it dictates the following jurisprudential rule, which shall be in force until the National Assembly regulates the procedure for the approval and voting of constitutional amendments of initiative of the National Assembly: In the processing of the draft constitutional amendment of initiative of the National Assembly, provided for in Article 441 numeral 2 of the Constitution of the Republic, the amendment vote by the National Assembly shall be carried out under the principle of democratic deliberation, with respect to each of the proposed articles, being prohibited the voting by block of the proposal."

In sentence No. 4-19-RC/19, the Court already resolved the issue regarding the elimination of the Council of Citizen Participation and Social Control (similar to what is now intended with question 6 of the popular consultation). Textually, it observed that the popular consultation was not the ideal constitutional means to implement this amendment, as can be read in the following lines:

Keeping coherence with the precedent pronouncements of the Court, it should ratify them and deny the possibility of consulting the people on certain issues.

VIII. Conclusion

88. This report highlights the serious violations by the Ecuadorian State of the founding principles and essential values of the International Community and Human Rights Organizations²¹⁰.

International current affairs demonstrate the international community's interest in actively engaging on these issues in order to anticipate and prevent the development of partnerships with states that do not share or violate the fundamental rights and freedoms that are at the core of democracies.

The attention paid by the international community is also a favourable factor for the citizens of partner states, respect and development of the fundamental values of our democracies.

"V. Opinion.- 45. In merit of the foregoing, administering constitutional justice and by mandate of the Constitution of the Republic of Ecuador, the Plenary of the Constitutional Court rules: 45.1. In general, the reform procedure, established in art. 442 of the Constitution is apt for the issuance of the norms contained in the project under review, whose main topics were summarized in paragraphs 5 to 7 above, aimed at the elimination of the Council of Citizen Participation and Social Control, the redesign of the Legislative Function to make it bicameral; and the relocation of the State Attorney General's Office outside the Judicial Function to give it more autonomy."

²¹⁰ Fundamental rights and freedoms protected by the European Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, the Universal Declaration of Human Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

